



**LA TECNOCRACIA
Y SU INTRODUCCIÓN EN ESPAÑA**

Jesús M. Zaratiegui



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS
Universidad de Valladolid

LA TECNOCRACIA Y
SU INTRODUCCIÓN EN ESPAÑA

JESÚS M. ZARATIEGUI

LA TECNOCRACIA Y
SU INTRODUCCIÓN EN ESPAÑA



EDICIONES
Universidad
Valladolid^{de}



Este libro está sujeto a una licencia "Creative Commons Reconocimiento-No Comercial – Sin Obra derivada" (CC-by-nc-nd).

En conformidad con la política editorial de Ediciones Universidad de Valladolid (<http://www.publicaciones.uva.es/>), este libro ha superado una evaluación por pares de doble ciego realizada por revisores externos a la Universidad de Valladolid.

JESÚS M. ZARATIEGUI. Valladolid, 2019

EDICIONES UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Preimpresión: Ediciones Universidad de Valladolid

ISBN: 978-84-8448-056-9

Diseño de cubierta: Ediciones Universidad de Valladolid

Índice

Introducción	11
1. Los antecedentes históricos de la tecnocracia	17
2. Ramiro de Maeztu, precursor de la tecnocracia en España	27
3. La Dictadura de Primo de Rivera: primer experimento tecnocrático	33
4. La idea de la “planificación” en la Europa de posguerra	41
5. Las primeras manifestaciones de la tecnocracia castiza en España	49
6. La “teoría” de la tecnocracia en la Francia de los años 50	57
7. La “práctica” de la tecnocracia en la Francia de los años 50	63
8. Recepción de la teoría tecnocrática en España (1950-1962)	75
9. La respuesta a los (tecnocráticos) planes de desarrollo: Lucas Verdú, Negro Pavón, Uscatescu y Gómez Aranda	85
10. La crítica a los planes de desarrollo (ya en marcha)	105
11. Vallet de Goytisolo, el anti-tecnócrata por excelencia	117
12. La tecnocracia en los estertores del franquismo	123
13. Coda: la tecnocracia en la España posfranquista	145
Bibliografía. Prensa y revistas consultadas	151

A Inés, una mujer luchadora,
a quien ni la injusticia logró doblegar

Introducción

La crisis de la democracia representativa no es el resultado de la oleada populista que recorre en nuestros días las sociedades avanzadas, es su causa. La crisis política se fraguó durante las últimas décadas en la progresiva desconexión de los partidos de la ciudadanía: en su incapacidad para articular los intereses de aquéllos a quienes decían representar. ¿Qué puede sustituir a la democracia representativa? Unos dicen que la gente, otros que los expertos. Dejando de lado que ambas propuestas no tienen la misma fuerza social, ninguna de ellas es novedosa pues, como sostenemos en este trabajo, el pulso político y tecnócrata existe desde que surgió la democracia de partidos. Populismo y tecnocracia critican a los partidos desde ópticas opuestas: el primero los acusa de no responder a los problemas de la gente. La tecnocracia censura que estén sometidos al dictado cortoplacista de la opinión pública, por encima del interés general.

Sin embargo, populistas y tecnócratas parecen olvidar que comparten algunas de sus más características notas identificadoras. Ambos asumen que existe un interés objetivo y común en la sociedad y que éste puede conocerse, bien porque el interés general se equipara a la voluntad del pueblo (populismo) o porque se descubre a través de la razón y el procedimiento científico (tecnocracia). Y ninguno está interesado en que los políticos rindan cuentas ante los ciudadanos. Como el primero asume que es la voluntad popular la que dirige el comportamiento de los políticos, el control de abajo a arriba resulta innecesario. En cambio, la tecnocracia considera que la ciudadanía no posee el conocimiento suficiente para evaluar las decisiones sobre lo público. Su objetivo es aislar al poder de la opinión pública. En definitiva, populismo y democracia se alejan de la idea de sociedad como pluralidad de intereses en conflicto. Esquivan así el principal desafío de las democracias representativas: gestionar este conflicto y los desacuerdos fundamentales en unas sociedades más complejas y fragmentadas.

Innumerables formas de Estado y de Gobierno han sido usadas por los hombres para convivir o para invadir al vecino: míticas autocracias de origen divino y comunidades tribales a campo abierto; admiradas democracias esclavistas desde la *polis* o legendarias repúblicas esclavistas y patricias desde la *urbe*; dictaduras de Césares y Napoleones o “dicta-blandas” militares como pronunciamientos de cuartel; reyes absolutos, monarcas controlados bajo democracias censitarias o monarquías meramente simbólicas; repúblicas comunistas en nombre del proletariado y repúblicas democráticas parlamentarias o presidencialistas en representación del ciudadano; regímenes de partido único o partitocráticos.

Y, entre ellas, siendo propio de la era de la industrialización, nació el conjunto de ideas, doctrinas y posturas que conforman el sistema tecnocrático. Generalmente planteado y experimentado, casi como un tabú, bien como siniestra amenaza al sistema representativo democrático¹ (en formas desideologizadas o regímenes autoritarios) bien como complemento en la gestión pública (desde la forma de elección de los funcionarios públicos, de asesores expertos, o gobiernos de cuño técnico). Nuestro interés se centra en rastrear cómo se originó esta doctrina y praxis tecnocrática en el caso concreto de España. Para ello tendremos que recorrer todo el siglo XX. España no es diferente de la Europa en la que está inmersa geográficamente y culturalmente. A fuerza de insistir en la naturaleza débil y retrasada del proceso regenerador puesto en marcha en nuestro país a partir de 1898, se ha perdido de vista que en la génesis y consolidación del tradicionalismo político y religioso, del que el franquismo sería una expresión, el caso español es uno más en la marcha general hacia movimientos de corte moderno (fascismos de diverso tipo) y hacia la extraña simbiosis de estos con la tradición reaccionaria europea, en la línea de la derecha de Maurras. En este sentido, el estudio de la tecnocracia ofrece una adecuada guía para seguir el proceso por el que los tradicionalismos de todo signo tienden a apoyarse tanto en el hecho religioso (ámbitos moral y cultural), como en el técnico (desarrollo económico), ya sea en el maurismo o en el desarrollismo.

El término “tecnocracia” hace referencia a un sistema de organización social política y administrativa, nacido en los Estados Unidos hacia 1920, y con un fuerte crecimiento en la segunda mitad del siglo. En nuestro país estamos familiarizados con una versión peninsular que tuvo su apogeo en la España de los años sesenta, ligada a la irrupción en la vida política hispana de un grupo de impronta tradicionalista cercano a la organización religiosa del Opus Dei. Así lo describe el sociólogo Amando de Miguel cuando en su *Sociología del Franquismo* (1975) identifica la tecnocracia como una de las once familias

¹ Es sabido que prácticamente ningún tecnócrata se autodefine como tal, debido a la connotación peyorativa que tiene en la opinión pública, que se equipara con persona fría, calculadora y falta de sensibilidad social.

políticas del franquismo: el “tecnocratismo desarrollista con un talante autoritario elitista”². Entiende tecnócratas en su acepción popular de ligados al Opus Dei, como grupos sociológicos más que como instituto religioso, o a aspectos del tradicionalismo católico unido a una preeminencia de los aspectos técnicos³. El periodo de influencia del grupo cubriría tres lustros, desde 1957 hasta 1973. Esta acepción popular es la que ha prevalecido y, desde entonces, el apelativo tecnócrata en España quedó como sinónimo de persona perteneciente/cercana al Opus Dei que interviene en la cosa pública. González Cuevas (2000: 47) le dará otro nombre, “conservadurismo burocrático”, a esta sub-tradición española.

En realidad, como afirma Andrés-Gallego (1994: 123) ni todos ni la mayoría de los tecnócratas fueron del Opus Dei, ni la orientación política que respondía a esa denominación era española. Se trataba de un fenómeno común en las democracias occidentales, tendente a confiar la orientación y decisión económica a los representantes de las grandes empresas. Tendencia que empezaría a hacer crisis con las irregularidades políticas y económicas que en el mundo occidental se iniciaron a partir de 1968. Pero aquellos políticos/economistas españoles tuvieron un éxito notable con el Plan de Estabilización y la reorganización de la estructura administrativa del Estado, y eso los convirtió en enemigo a vencer, hasta su salida del Gobierno en 1974. La asimilación de tecnócrata y persona cercana al Opus Dei llegó a ser completa.

Sin embargo, al profundizar en el fenómeno, encontramos que esta variante castiza hispana de la tecnocracia es un ejemplo menor que los expertos ignoran al repasar las distintas formas de tecnocracia que se han dado en el tiempo. Incluso autores españoles como García Pelayo (1974: 91) aluden solo de pasada a “la inserción de los equipos tecnocráticos del Opus Dei en el sistema franquista”, pero destacando el carácter anómalo del hecho, ya que fue “estable-

² De Miguel distingue 11 familias franquistas, una el tecnocratismo desarrollista con un talante autoritario elitista, que derivaría de las enseñanzas de Camino. Para demostrar que falangistas y tecnócratas, las dos más alejadas entre sí, comparten ideario enfrenta citas de discursos de Girón y citas de Camino asombrosamente coincidentes en lo que se refiere a disciplina (obediencia ciega al Jefe), a las ideas de servicio y lucha, a la conveniencia de guardar silencio y no discutir, a mantenerse unidos, a la suprema ley de la eficiencia y a mantenerse vigilantes con una santa intransigencia. Califica al franquismo de “sistema autoritario personalista de derechas”.

³ “Tecnócrata sería el gobernante católico no falangista, no militar, ni primorriverista (aunque éstos fueran en cierta manera los primeros “tecnócratas” históricamente hablando), no tradicionalista, no monárquico, no de la santa casa y no estrictamente “técnico” que la vox populi suele asociar a las empresas del Opus Dei. Pero el tecnócrata más representativo, el jefe de la familia, podríamos decir, es Laureano López Rodó, artífice de la reforma administrativa (siendo todavía silente acólito de Carrero en las postrimerías de la Era Azul) y sobre todo de los Planes de Desarrollo a la francesa. Es de sobra conocido el hecho de que Fraga (con Solís) se enfrentó en 1968 al ala tecnócrata del Gobierno, dominante en él durante todo el decenio anterior, y concretamente al tándem directivo que formaban Carrero y López Rodó. Fraga pierde y es obligado a refugiarse en el cómodo retiro dorado de la Cátedra y de la Gerencia de una gran empresa” (*Diario de Navarra*, 25/III/75).

cido originariamente bajo otros supuestos”. Es decir, sólo excepcionalmente se puede afirmar la existencia de una *verdadera* tecnocracia en la España en los años 60 y 70, según lo ven los expertos. El modelo original se originó en la sociedad americana de entreguerras (1920-39), fue imitado por el estado soviético, y alcanzaría algún relieve en países europeos de tradición centralista (Francia) y en la estructura del Mercado Común a partir de 1957.

Esto no debería inducir al error de establecer una distinción estricta entre tecnocracias de signo capitalista y socialista, sino que cada uno de los casos (los directivos de las corporaciones americanas, los comités centrales soviéticos, los dirigentes de los planes de desarrollo franceses, o los técnicos ligados a las dictaduras latinoamericanas) aparece como subtipo de la categoría general. Acostumbrados en España a asociar los tecnócratas con cierto capitalismo de Estado, es una sorpresa advertir cómo algunos autores señalan las similitudes entre los planes quinquenales soviéticos y los planes de desarrollo españoles. En lo que sí hay unanimidad es en el juicio negativo que los expertos tienen de la tecnocracia, especialmente de su pretendido apoliticismo y del hecho de no considerarse como pertenecientes a una corriente ideológica sino como técnicos al servicio del Estado. Stiglitz (2002: 27) comienza su afamado libro *El malestar en la globalización* con estas palabras: “Los burócratas internacionales –símbolos sin rostro del orden económico mundial– son atacados por doquier. Las reuniones de oscuros tecnócratas en torno a temas tan anodinos como los préstamos preferenciales o las cuotas comerciales se han transformado en escenarios de iracundas batallas callejeras y grandes manifestaciones”. Pero, como hemos visto, el sesgo negativo del tecnocratismo se aprecia desde su inicio.

En estas páginas se aludirá al nacimiento del movimiento tecnocrático en los Estados Unidos y a las mutaciones posteriores del modelo hasta las modalidades propias del siglo XXI. Sirvan dos botones de muestra. El primero es Pierre Bourdieu, prestigioso sociólogo francés, hablando a los trabajadores en huelga, reunidos en la *Gare* de Lyon en París, el 12 de diciembre de 1995. “Lo que está en juego –les decía– es la reconquista de la democracia contra la tecnocracia: hay que acabar con la tiranía de los “expertos” al estilo del Banco Mundial o del FMI, que imponen sin discusión los veredictos del nuevo *Leviatán*, “los mercados financieros” (*Le Monde*, 13/XII). El otro ejemplo, en febrero de 2010, cuando Sebastián Piñera, Presidente de la República de Chile, presentó su equipo de gobierno, formado en gran parte por profesionales y técnicos, con el objetivo de olvidar el viejo y corrupto modo de hacer política. La prensa chilena denunció que “utilizar las ideas tecnocráticas, en reemplazo de medidas políticas propiamente tales, era una quimera disfrazada de datos y estadísticas” (*El Mercurio*, 21/II). Para la tecnocracia chilena no existiría otra forma de concebir la sociedad que no fuera en forma de análisis de costes y beneficios. En ambos casos, se identifica tecnocracia con un modo concreto de concebir la política, la

economía y la administración de los países. El movimiento mundial derivado del 15 M vendría a recoger preocupaciones similares.

Los ejemplos podrían multiplicarse pero nos centramos en la variante hispana de la tecnocracia para identificar los elementos que la distinguen de la categoría general y los que son propios de la tradición española del *fomento*, viva desde el siglo XVIII, con figuras señeras como el ministro Bravo Murillo⁴. Aunque la eclosión de esas tendencias se produce en las décadas iniciales del siglo XX, especialmente en los gobiernos *técnicos* de la dictadura de Primo de Rivera, herederos directos de la corriente maurista y del pensamiento de Ramiro de Maeztu. La presencia del escritor vitoriano en los proyectos del Dictador, en *Acción Española* (1931-36) y después en el ideario del grupo *Arbor*, conectará la corriente tecnocrática ortodoxa norteamericana de los años veinte con las primeras tecnocracias europeas, de las que será precursor Carl Schmitt. Esta tradición vendrá a confluir en la figura de L. López Rodó, heredero directo de las ideas de R. Calvo Serer, que encuentra en la administración tecno-burocrática francesa el modelo que guiará su transformación de la administración pública española y los planes de desarrollo económico. La denominación *tecnócrata* será un rótulo útil que pondrá en circulación la facción falangista para designar al grupo político que se configura en torno al ministro comisario del Plan de Desarrollo. Es al compás de los avatares políticos de López Rodó como se entiende el uso del término *tecnócrata* como arma arrojada contra el grupo del escudero de Carrero. Significativamente la caída de López Rodó en 1973 será percibida como el fin de la tecnocracia.

En un mundo tan determinado por la tecnología como el del siglo XXI, el pensamiento tecnocrático forma parte de las filosofías políticas comunes. Formaciones políticas como *Ciudadanos* en España o la *República en Marcha* de Macron, han hecho bandera de los postulados tecnocráticos en sus programas. Esta tendencia suele desplazar el poder político, en lugar de asesorarlo, y reemplazarlo por modelos de decisión fruto de cálculos y especulaciones teóricas, otorgando poder a los sectores que mayor control ejercen sobre el desarrollo científico o tecnológico, que suelen ser las grandes corporaciones transnacionales.

La obra pretende sistematizar toda la literatura existente hasta ahora en relación con los caminos que ha seguido el pensamiento tecnocrático para penetrar en la doctrina y las realizaciones políticas de nuestro país, a lo largo de la historia. Los primeros cinco capítulos abordan los hitos fundamentales (tradición de fomento, Ramiro de Maeztu, la Dictadura, el periodo de entreguerras, y la posguerra) de la versión española de la tecnocracia (“castiza”

⁴ Existen otros antecedentes de la tecnocracia en el autoritarismo burocrático del siglo XIX e inicios del XX: meritocracia bonapartista, regímenes “positivistas” como el Brasil o el México porfirista

la llamamos, aunque parezca una *contradictio in terminis*). Dedicamos luego dos capítulos a la “teoría” y la “práctica” tecnocrática en Francia, el país donde esta doctrina encontrará sus mejores exponentes. El capítulo 8 indaga sobre cómo entró en España y cómo se recibió por parte de los políticos e intelectuales. En los capítulos 9 y 10 se repasa la obra de cinco autores españoles opuestos a la tecnocracia. La doctrina pierde fuerza a partir de 1973, cuando López Rodó deja su cargo de ministro comisario del Plan de Desarrollo. En los dos últimos capítulos abordamos las últimas señales de tecnocracia ya en pleno proceso democrático. El libro llena un vacío historiográfico sobre el caso español y ofrece una síntesis del argumento con una aproximación que se enmarca entre la historia de las ideas, la historia política y la politología. La obra aborda un tema que sigue estando de actualidad, especialmente cuando se observan las consecuencias políticas de la Gran Recesión de 2008. Desde una perspectiva innovadora de análisis, permite ubicar las experiencias tecnocráticas españolas (específicamente la del franquismo) en una perspectiva internacional, en relación con la planificación indicativa francesa de posguerra.

1. Los antecedentes históricos de la tecnocracia⁵

Antes de adentrarnos en el análisis del *conservadurismo burocrático* español, conviene aludir al origen de esta variante de ordenación jurídica, industrial y política. La tecnocracia (del griego *gobierno de los técnicos*) como sistema de organización comienza a establecerse en la fase madura de la revolución industrial. El tecnócrata será el especialista en alguna materia que ejerce una función pública de gobierno en virtud de ese conocimiento, y no por un mandato ciudadano en decisión democrática. La tecnocracia todo lo quema en el altar supremo de la eficacia; se mueve más atendiendo a fines que a medios. En sus decisiones prevalece la razón técnica sobre consideraciones de índole política, ideológica o social. El técnico que gobierna (el tecnócrata) aparece investido de una doble legitimación: por su condición de experto (ya sea economía, administración, control de masas), y la que recibe por el aparente apoliticismo de su tarea, alejada de los intereses partidistas que tendría el político de oficio.

El advenimiento del Estado moderno conllevará el nacimiento de la moderna burocracia. En pleno siglo XIX, frente a la tradición del viejo mando, el nuevo voto, y al carisma del que seguíamos y al que elegíamos, Max Weber se queda con la técnica y la burocracia (sus fuentes de legitimación del poder), al ser más eficiente y racional de la forma de organización de la actividad humana y, por tanto, como la clave para la racional-legal de la autoridad, indispensable para el mundo moderno, pese a su amenaza a las libertades individuales. Pero junto a la creciente burocracia técnica y estatista, ante el impacto del industrialismo (con la irrupción de las masas y los modos técnicos de producir), surgirán las primeras formas de organización política social tecnocrática como alternativa o como

⁵ Una versión previa de los capítulos 2, 3 y 4 de esta obra, apareció en el libro *El régimen de Franco*, coordinado por Álvaro Ferrary y Antonio Cañellas. Agradezco su permiso y el de la editorial EUNSA para utilizar mi colaboración en ese libro colectivo, en esta nueva publicación.

ingrediente gestor. Así la defendieron para una sociedad sin Estado el sociólogo francés conde de Saint-Simon (1760-1825), en su *Reorganización de la sociedad europea* (1814), para una sociedad científica el filósofo positivista Auguste Comte (1798-1857) en *Système de politique positive, ou Traité de sociologie, instituant la religion del'humanité* (1851-1854), o como necesidad democrática para el presidente de los EEUU, Woodrow Wilson en *The Study of Administration* (1887).

A Saint-Simon se atribuye la primera formulación de un ideario tecnocrático cuando propone que ocupen el poder político aquellos que en su época lideraban el proceso de transformación económica en Francia, los industriales y los técnicos, augurando el reemplazo de la política por la ciencia de la producción, el “gobierno de los hombres” por la “administración de las cosas”⁶. Para Saint-Simon el método de las ciencias experimentales no había sido aún aplicado a las cuestiones políticas con la consecuencia de que “no hay exactitud de soluciones ni generalidad de resultados” (2011: 37). Había llegado el momento de superar esta infancia de la ciencia. Tal vez por la pobreza en que vivía, introdujo la teoría social en la ética cristiana, llegando a la conclusión de que toda la sociedad debe consagrar devotamente su existencia a las clases más pobres, ideal en sí mismo generoso, pero inadecuado, porque introduce simultáneamente la idea de que los mejor dotados tienen el derecho –precisamente porque tienen semejante obligación – de practicar la caridad en un sentido que tiende a ser excluyente para los demás. El paternalismo “tecnocrático” tiene aquí su justificación “moral”, aunque no es otra cosa que una exageración del ideal ilustrado según el cual, mediante el conocimiento científico aplicado a la sociedad, podrían eliminarse las causas de los conflictos sociales. Es, a la vez, una continuación de las prácticas del despotismo ilustrado y una utopía. R. Dahrendorf ha definido con razón la sociedad utópica como aquella en la cual no existe conflicto. Las Sociedades utópicas presentan las características de aislamiento en el espacio y en el tiempo, de consenso universal, de falta de todos los conflictos a excepción de las desviaciones individuales y de la falta de procesos no funcionales. Tales son las condiciones de una sociedad inmóvil y a-histórica. La tecnocracia es el ensayo para conseguir un modelo de sociedad progresiva sin conflicto, ideal que es irrealizable, como enseña la experiencia.

Por caminos cercanos discurren las intuiciones del sociólogo francés Auguste Comte (1967). La sociedad industrial y científica exige una dirección tecnológica y no política. La ideología tecnocrática se fundamenta en una

⁶ El ideal político de Saint-Simón incluye: 1) El industrialismo, la “tecnificación” y la producción industrial intensificada indefinidamente. 2) El mayor bien económico de la mayoría. 3) Un gobierno industrial jerarquizado de un modo piramidal. 4) Una acción de gobierno nula o casi nula. 5) Eficacia técnica. 6) Riqueza, bienestar material; y 7) Planificación económica.

concepción del radio de acción y del método de la ciencia, de las relaciones entre la ciencia y la técnica y del papel social de la técnica, según la cual es real solamente aquello que es cuantificable, empíricamente comprobable. Por lo tanto, todo aspecto de la realidad sociopolítica es investigable con los instrumentos de las ciencias exactas. De esta manera, según la visión entonces moderna de la estrecha relación entre la investigación teórica (la ciencia) y el dominio sobre el objeto investigado (la técnica), es ésta la que tendría una función de experimentación y de dirección social y política. Ya que la concepción tecnocrática es una visión simplificada de la realidad, apta para dirigir la acción, se la puede definir como una auténtica ideología.

D. Negro Pavón (1968: 135) ha señalado acertadamente los vínculos de ambos pensadores con John S. Mill, que habría presentado a la vez la justificación del cientifismo posterior de la tecnocracia y del respeto de las masas por el gobierno de los “expertos”. Este es uno de los puntos en que se separa de Marx –aunque su proceso intelectual es semejante– en cuanto a los métodos de gobierno, “la respuesta de Mill es el reverso de la de Marx”. Como Saint-Simon y Comte, Mill pensaba que en el estadio positivo el conocimiento, generalizado, convertiría la política en una ciencia razonable sobre la conveniencia social. La tecnocracia tendría así en Mill uno de sus mejores expositores, tal vez porque el filósofo inglés no penetró en la verdadera naturaleza de la técnica ni de la ciencia. La técnica es un orden autónomo, distinto de la economía y de la ciencia, que supone la actualización de determinadas *posibilidades* mediante la invención, por lo que es la imaginación la facultad que predomina en el campo de la técnica. Es, por eso, impropio denominar tecnocrático al sistema de gobierno que se basa en la confianza otorgada a individuos a quienes se reconocen determinados saberes, pues tal gobierno es precisamente lo más opuesto a la esencia de la técnica, ya que su misma lógica le lleva a desarrollarse de manera que paraliza las cualidades creadoras que aquella implica. Curiosamente, uno de los principios comunes a toda doctrina tecnocrática es la desconfianza en el individuo, corruptible y susceptible de manipulaciones, incompetencias o emocionalidades, apostando más bien por el imperio del conocimiento. Negro Pavón atribuye y acusa a Mill de haber identificado ciencia, técnica y economía. El sueño tecnocrático es lograr que el funcionamiento político responda a las leyes de lo exigido como lo hacen las máquinas o los procesos científicos, es decir, de manera controlada y predecible.

En el fondo de este planteamiento subyacía una cierta confusión entre la técnica, la tecnología y lo que después se denominaría tecnocracia, que no son tres conceptos sinónimos. La técnica, entendida como una metodización del trato con las cosas, no es lo mismo que la tecnología. La translación de la verdad científica y/o técnica al ámbito de la política, se convierte en tecnocracia: gobierno de sabios, científicos, expertos y gestores (De Lucas, 2003: 50). Y la mejor política es sólo una, la política del *one best way*. Los antagonismos

ideológicos quedan desactivados pues, ante la autoridad de la ciencia, no cabe discusión alguna.

Posteriormente, en el siglo XX, el ideal tecnocrático aparecerá con las primeras formulaciones corporativistas (del organicismo krausista al socialismo gremial), y en la época de entreguerras se difundirá como fórmula de gobierno para regímenes autoritarios/totalitarios antiliberales y antidemocráticos. Las teorías sobre la *Tectología (Organización universal de la ciencia)*, del bolchevique A. Bogdanov, será influencia en los burócratas del desarrollismo soviético estalinista. Mientras, el jurista español Luis E. Llorens descubrirá que la tendencia hacia la “tecnificación de la política” se daba tanto en gobiernos democráticos como autoritarios: por un lado la introducción de economistas desideologizados en gabinetes, que trasladaban el paradigma funcionalista derivado de la moderna división y maquinización del trabajo a la misma actividad política, como se asumía en cierta legislación norteamericana (*National Industrial Recovery*, 1932) y en la noción tecnocrática popularizada por Howard Scott, William H. Smyth y Thorstein Veblen, con la sacralización de la “Administración técnica” ante la idea de que “las ciencias físicas han superado a las sociales”; y por otro la inserción de cuerpos de burócratas directamente en parlamentos sin partidos políticos (con representaciones corporativas), como se intentó con la Asamblea nacional consultiva española bajo Miguel Primo de Rivera, o se consiguió brevemente en la Austria del canciller Dolfuss o en la Italia fascista. Sin olvidar a los teóricos de las elites (Gaetano Mosca y Wilfredo Pareto) que hicieron una crítica pionera del modelo tecnocrático.

El moderno concepto de tecnocracia se origina en los años 20 en Estados Unidos, de la mano de una progresiva expansión del poder de los técnicos de producción (físicos, ingenieros) basado en el supuesto de que quien está capacitado para gobernar el proceso industrial empresarial y enteros sectores productivos, también puede dirigir la sociedad industrial en su conjunto. La nueva clase de directivos de las empresas debían su ascenso a la separación de las funciones de propiedad (accionistas) y control (directivos) en los grandes grupos industriales. El control del día a día de las empresas fortalecería la posición del directivo asalariado, a quien no preocupa tanto el reparto de beneficios a los accionistas como el aumento de tamaño (y de su sueldo) de la empresa. Y la única credencial que puede presentar un gestor es su eficiencia.

La importancia de la gestión eficiente se verá reforzada con la creciente intervención del Estado en la vida económica, con la planificación económica y con la integración entre industria y sistema de defensa durante los periodos bélicos. El tecnócrata se abre a los altos niveles de la burocracia estatal y de los aparatos industrial-militares, además de las facultades universitarias científicas, tecnológicas y económicas. El proceso se hará imparabable en los años ochenta con la creciente importancia económica y social de los flujos financieros e

informativos, lo que determina una imponente aportación del mundo de las finanzas y de la comunicación en la formación mental del personal tecnocrático. No obstante, la calificación de tecnócrata se otorga al técnico no como especialista, sino como presunción de poseer los elementos para aplicar la técnica al gobierno de todo entorno humano.

En el inicio de la ideología tecnocrática está el grupo creado en la Universidad de Columbia en torno a H. Scott que se inspira en dos trabajos del talentoso economista T. Veblen: *Una política de reconstrucción* (1918) y *Memorandum sobre un soviét práctico de técnicos* (1921). El idealista Scott creó y puso en circulación el neologismo *technocracy* para describir lo que el grupo de ingenieros y economistas entendían que era la forma más eficiente de dirección, la técnica. Veblen combatió con dureza al capitalismo y la libre competencia, y escribió una diatriba contra la aristocracia financiera a la que denominó “clase ociosa”. Siguiendo postulados de Rousseau creía en la bondad natural del hombre, lo que le hizo rechazar todos los imperialismos y la participación de Estados Unidos en la I Guerra Mundial. Veblen postula la sustitución de los políticos y empresarios por equipos de ingenieros que controlen la vida económica. Estaba cercano a las ideas marxistas, y en una línea planificadora y totalitaria.

En Europa, uno de los primeros receptores de las ideas tecnocráticas fue Carl Schmitt (1991: 121) que en su conferencia de 1929 sobre *La época de las neutralizaciones y despolitizaciones*, señala el desplazamiento ocurrido en las primeras décadas del siglo XX desde la teología y la moral hacia la técnica y la economía. Eso le hacía vislumbrar un horizonte de despolitización absoluta, a través de una nueva *religión de la tecnicidad*. La consecuencia de esa modernidad técnica era claramente positiva, aunque por el camino hubiese quedado la esencia (Caspistegui, 2012: 104-5). La receta era clara: aceptar esa modernidad que, incluso pese a la pérdida del espíritu, había llevado a la supremacía, y tratar por todos los medios de mantener lo definitorio. Este conocido binomio racionalidad técnica/tradicionalismo religioso, sería admirado años después por el propio Schmitt en la España de Franco. Esta modernidad defensiva reactiva y conservadora servía para mantener los valores separados en el limbo de la tradición. No fue Schmitt el único que dio ese abrazo irracional a la tecnología, en el periodo de la República de Weimar. Otros como Jünger, Sombart, Splengler o Heidegger le siguieron en su aceptación de la técnica como instrumento de crítica a la modernidad. Como denunciara Thomas Mann esa peligrosa mezcla encajaba muy bien en la retórica del nacionalsindicalismo nazi y en el discurso de algunos autores alemanes de la posguerra en el marco del milagro alemán.

El tecnocratismo del grupo de profesores de Columbia llegó a su apogeo con la crisis de 1929. Su reacción contra los errores del sistema les llevó a proponer un robustecimiento del Estado y su aparato administrativo, dirigido por

técnicos independientes que fomentaran la modernización y el despegue económico. Pero el esplendor fue fugaz. El grupo universitario se disolvió pronto y las teorías económicas de Veblen fueron superadas por las de Keynes. La pésima experiencia del dirigismo soviético revalidó los títulos occidentales de la libre competencia y de la iniciativa privada. Hacia 1935 la tecnocracia como corriente teórica había muerto, pero se puede considerar el *New Deal* como el mayor éxito de planificación económica de los Estados Unidos. El capitalismo puro cedía ante los embates keynesianos y desembocó en una economía de mercado con fuerte intervención de los Estados para reducir las diferencias sociales. También se aceptó que el mejor programa de gobierno no lo era sin el asesoramiento de los expertos. Así, la socialización y la racionalización del Estado, que eran dos pretensiones tecnocráticas, las hicieron suyas casi todos los partidos políticos. Este fue el activo de la tecnocracia, en opinión de Gonzalo Fernández de la Mora (*ABC*, 21/VII/65).

Pero, dentro del ámbito occidental, la tecnocracia fracasó en dos aspectos: el totalitarismo y el apoliticismo. Y con razón. La fría y despótica planificación practicada en los países del Este era un modelo que nadie quería imitar, todos preferimos un cierto margen de libertad. El dirigismo tecnocrático implicaba esa alienación del hombre que se había impuesto en los países del otro lado del telón de acero. Quienes acusaban de reaccionarios a los tecnócratas parecían no advertir que su despotismo había triunfado en Moscú, y no en Washington. En cuanto al apoliticismo, la derrota fue absoluta. Los tecnócratas defendían la sustitución de la política por la tecnología. No era propiamente un materialismo, sino una eliminación de las humanidades. Tenían razón en que los nuevos tiempos requerían la intervención de expertos en los asuntos de la vida pública, pero se equivocaban al pretender jubilar a los profesionales de las disciplinas no científico-naturales. El apoliticismo extremo es una forma de amoralismo, puesto que la política, en cuanto saber de fines, no es sino una rama de la Ética. Una cosa es promocionar a los técnicos y otra muy distinta la implantación de su dictadura. “Buscando a un posible planificador, se descubre a un posible dictador”, previno Robbins. J. Burnham comete el error de elevar a categoría el mito del apoliticismo, que en Saint-Simon era una utopía. Esto no tiene que ver con el modo de designación de los “responsables políticos”: un régimen en el que sus responsables sean elegidos sólo en razón de su competencia técnica no sería un régimen tecnócrata, en el sentido que nosotros hemos aceptado, desde el momento en que subsistiría la distinción entre la función política y la atribuida a los “expertos” no provistos de mandato político.

Los tecnócratas aceleraron el “crepúsculo de las ideologías” al desprestigiar al retórico y exaltar los valores científicos. Pero su positivismo y radicalismo les impidieron ver que también hay ciencias del espíritu y especialistas en ellas como especialistas del Estado, los estadistas. La tecnología es tan solo un saber de medios, no de fines: esclarece el *cómo*, no el *para qué*. El

ingeniero nunca sabrá contestar a la pregunta sobre la importancia de la libertad. Pero es claro que el profesional resuelve mejor que el ideólogo cuestiones como llevar a cabo un plan de estabilización monetaria o una ley de seguridad social. Su error fue menospreciar el saber prudencial del político. Los tecnócratas hubieran tenido razón de haber postulado que cada problema –ya fuera económico, jurídico o de institucionalización política– fuera sometido a las personas preparadas para resolverlo, que es en lo que consiste el anti-ideologismo y la racionalización social. Pero redujeron todas las cuestiones a las estrictamente tecnológicas, fue un error esta mutilación de la realidad. Este es su pasivo.

La historia del grupo de Columbia, descrita por autores como Guerrero (2006), interesa sobre todo para identificar las ideas que han incorporado las diversas tecnocracias que le sucedieron. Aunque, de hecho, parece existir una brecha entre esta tecnocracia originaria y las de la segunda mitad del siglo XX, cuyos teóricos apenas aluden a estos antecedentes, porque estos últimos ignoran a Veblen, Scott y el grupo asociado a la Universidad de Columbia.

En el caso de España la discontinuidad es aún más fuerte. La doctrina tecnocrática era conocida en nuestro país desde los años 20 pero como algo extraño a la realidad nacional, vigente en grandes corporaciones norteamericanas y en países con economía centralmente planificada. Se hablaba de “mentalidad tecnocrática”, casi un sinónimo de burocracia, para designar actividades de planificación u ordenación, ya fuera urbanística, regional o de régimen administrativo. Se ha llegado a calificar la Dictadura de Primo de Rivera como nuestra primera experiencia tecnocrática. Esta implicación de la Dictadura con las ideas tecnocráticas fue percibida por un singular escritor balear, Gabriel Alomar (1873-1941) que encarna la tendencia más progresista del catalanismo cultural y político. Diputado durante las Cortes constituyentes de la II República, fue nombrado embajador en Italia (1932-34) y Egipto (1936-38). Ensayista y poeta, ejerció gran influencia en la obra de Eugenio D’Ors. A través de éste afianzó su amistad con Ramiro de Maeztu, el apóstol de la tecnocracia en nuestro país.

Alomar había intimado con Ramiro de Maeztu en 1897 cuando ambos se aprestaban a defender la isla de Mallorca de una fantasmagórica escuadra norteamericana. Dos años más tarde, el escritor vitoriano incluirá en su libro *Hacia otra España* (1899) una serie de artículos dedicados a personalidades intelectuales y políticas, como Joaquín Costa y Gabriel Alomar. También veremos a Alomar colaborando en *Juventud*, la revista que durante un tiempo sacaron adelante Baroja, Azorín y Maeztu, como ocurrirá igualmente en otro proyecto editorial de Maeztu, *La Mañana*, de vida efímera en 1909. Juntos aparecerán firmando en julio de 1915 el manifiesto de adhesión a las naciones aliadas. Finalmente encontramos a Ramiro participando en el homenaje a Gabriel al ser éste elegido diputado por Barcelona en las elecciones de 1919. Alomar y

Maeztu hablarían sobre el nuevo movimiento tecnocrático que se gestaba en Estados Unidos, y del que tenían opiniones tan dispares, aunque no quizá hasta que el alavés abrazase abiertamente una postura antiliberal en los años veinte.

Conocedor de la obra de Veblen, Alomar fue un pionero en el acercamiento del naciente ideario tecnocrático al público español. En el semanario *La Libertad* (11/VI/21) calificaba de pernicioso la exclusiva dirección política de los intelectuales. “La última manifestación es la tecnocracia, la advocación del gobierno de los técnicos o por los Parlamentos técnicos, que son siempre disimulados ataques a la plenitud democrática y liberal, últimas formas de la germanofilia”. Dos años después, publica otros dos artículos sobre la tecnocracia. En el primero anota que “la tecnocracia, o gobierno de técnicos, es la fórmula de los sistemas agotados, exhaustos, que quieren darse apariencias de categoría espiritual, como buscando un título a sus derechos desacreditados. Los técnicos son el camuflaje de los fuertes, son el disfraz de los regímenes sin razón, son la mano al servicio de la fuerza, la mano que firma o que bendice” (*La Libertad*, 9/VIII/23). Y después el artículo “La crisis del liberalismo” donde dice “abominar de todo profesionalismo diverso, intruso en la Política. No políticos profesionales, pero sí políticos de vocación han de ejercer el tecnicismo de la cosa pública. Y estos no pueden ser designados sino por el Pueblo” (*La Libertad*, 31/X/23). Apunta así Alomar a una de las notas que más negativamente se van a aplicar a los tecnócratas de todo tiempo: la falta de sustento popular de su mandato. Más vale un mal político que un buen tecnócrata, viene a decir.

Vino después la crisis de 1929, año en el que, por cierto, el 3 de agosto murió Veblen, sin haber podido asistir al colapso financiero internacional que él había predicho. El prestigio que cobró la tecnocracia con tan triste suceso fue extraordinario, al presentarse como la opción más viable para salir de la crisis. En España será de nuevo el diputado Alomar quien alerte de los peligros que para la joven República española representaba la tecnocracia que, junto al corporativismo, considera como peligros de la democracia. Así lo probaría el hecho de que “la primera vez que se habló de tecnocracia fue durante los tiempos de la Dictadura, y de ello habló aquel “oteador de catástrofes” que era Calvo Sotelo. Todo el mundo sabe lo que es un gobierno de técnicos, un gobierno de ultra-conservadores, y la actuación de los técnicos constituiría un constante sabotaje contra la República democrática” (*La Vanguardia*, 6/XI/31). Alomar afirmaba “no creer en más técnicos que en la realidad política de los propios políticos”. Merece la pena destacar este sesgo negativo que se atribuye a la tecnocracia, que aparece asociada con los experimentos totalitario soviético y el corporativismo italiano. Un gobierno de técnicos será siempre presa fácil de todo tipo de ideologías totalitarias al faltarle el refrendo democrático, que tan vivamente sentían los españoles ante esa república que solo tenía seis meses de vida.

Una de las primeras explicaciones para el público ilustrado la aporta en 1933 el corresponsal de *La Vanguardia* en la Conferencia de Ginebra, reunida para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la semana de 40 horas. Juan Roselló informa de las discusiones en la Sociedad de Naciones en su crónica “Tecnocracia y cuarenta horas”, en la que da cuenta de la resistencia patronal a la demanda sindical de una semana de cinco días y cuarenta horas. Los empresarios habían amenazado con retirarse de la Conferencia si ésta se oponía a “una reducción de salarios como medio de compensar la disminución de las horas de trabajo” (*La Vanguardia*, 15/I/33). La aspiración obrera encontró un aliado donde menos lo esperaba: en los Estados Unidos, y de la mano de la tecnocracia. “Los progresos económicos y gubernamentales norteamericanas realizados por la teoría tecnocrática, avalan científicamente el principio de la disminución de horas de trabajo, evolución que muchos consideraban como social”. Los trabajos de Scott y sus colegas de Columbia habían llegado a la conclusión de que bastarían 16 horas de trabajo semanal para subvenir a las necesidades productivas del país. Menos obreros, trabajando menos horas, con los medios técnicos apropiados. Si la productividad de un obrero metalúrgico era en 1930, argumentaba Scott, 650 veces superior a la de 1880, ¿qué no cabría esperar del futuro?

Exageraciones al margen (Scott calculó que 100 obreros eran suficientes para producir todos los ladrillos que necesitaba su país), lo cierto es que la nueva religión había ganado para su causa a varios de los consejeros económicos del presidente electo Roosevelt. Pero el desarrollo incesante de la técnica planteaba un problema gravísimo: “¿se podrá evitar que, por una paradoja fatal, la ciencia, instrumento de bienestar, se convierta en una fuente de miseria y de sufrimientos?”. Roselló pondera que el simple hecho de tener en cuenta estas consideraciones permitía “darse cuenta de que los debates ginebrinos sobre la semana de cinco días tienen quizás para la humanidad una trascendencia muy superior a la que puede presentar una simple querrela entre patronos y obreros”.

Trascendencia que el propio periódico quería poner de relieve porque una semana más tarde volvía en un largo artículo (“El hombre-hora”) a tratar de la racionalización del consumo propugnado por la tecnografía (así se le denominaba algunas veces), una corriente que “aspira a que sea la técnica, la que dirija la marcha de los pueblos” (*La Vanguardia*, 22/I/33). El artículo aludía a otros aspectos no conocidos por el público español: la valoración de los bienes y servicios de acuerdo con la energía que se ha empleado en su fabricación; la sustitución del dinero por “certificados de energía”. La idea de “secta cuyos adeptos están dispuestos a creerlo todo” será una nota que acompañe las tecnocracias posteriores (recordemos la misteriosa sinarquía implantada en el territorio de la Francia de Pétain, con sus connotaciones masónicas). Como bien apuntaba el rotativo barcelonés, no se sabe quién será capaz de medir “la energía equivalente a la habilidad de un obrero o a la inteligencia de un inventor; ni cómo

encontrarán los hombres, con categoría de santos, que libren justa y honradamente esos certificados que han de sustituir a los billetes de Banco”.

Otro artículo (*La Voz de Menorca*, 9/VI/33) anunciaba la publicación del libro *Francia en el mundo*, donde el ex primer ministro francés Herriot describía las ideas de Scott sobre la moneda y la semana laboral de 16 horas. El término tecnocracia pasó a los manuales académicos españoles. Ese mismo año el jurista Eduardo L. Llorens interpretaba la aparición de la mentalidad tecnocrática como “una de las manifestaciones de la mentalidad posbélica orientada hacia la dictadura”. Dos años más tarde, su colega A. Posada recogía los logros de la nueva doctrina en su *Tratado de Derecho Político* (1935), editado en Madrid por la editorial Victoriano Suárez.

Es el mismo año (1933) en que Allen Raymond en un libro titulado *¿Qué es la tecnocracia?* se dedicó a refutar una serie de ideales tecnocráticos, mostrando lo poco coherentes que resultaban. La tecnocracia, evidentemente, no puede presentarse nunca como forma política de gobierno. A estas alturas las teorías de la tecnocracia habían caído en descrédito en Estados Unidos como le ocurriera a las tesis de Stuart Chase. Los industriales habían vuelto la espalda a Howard Scott acusándole de ser un soñador que no aportaba soluciones, y lo mismo ocurrió con el proletariado que se apartó temeroso de las nuevas teorías: si hoy la lucha era contra los capitalistas, mañana tendrían que luchar contra el comité técnico tecnocrático para hacer prevalecer sus derechos. Tecócratas y economistas se quedan solos, sentencia el corresponsal de *La Vanguardia* (12/IV/34) en Washington.

2. Ramiro de Maeztu, precursor de la tecnocracia en España

Como hemos visto, España no fue ajena a la tradición del tecnicismo. Junto a antecedentes como el moderantismo tecnocrático de Bravo Murillo (1851-1852), en la segunda mitad del siglo XIX aparece una vía conservadora que integra la identidad católica con la modernidad técnica, en la estela de autores como Balmes⁷. Como señala Rincón (2005: 3) la fuente de inspiración es el nacionalismo reaccionario francés y su evolución en el contexto cultural finisecular. Con herramientas analíticas propias de la modernidad (el positivismo de Comte, el inspirador de la tecnocracia), desarrolla una crítica de esa modernidad, enfatizando que la verdadera nación francesa estaba encarnada en la Francia pre-revolucionaria, y abogando por una vuelta a esa estructura político-social, pero no la vuelta a los viejos parámetros socio-económicos. Esto es, el reaccionarismo de Maurras no supone el cuestionamiento del orden capitalista, sino todo lo contrario, su aceptación plena y categórica. Es la misma divisa que llega a España: tradicionales en lo político y religioso, modernos en lo económico.

La crisis del 98 despierta una deriva latente hacia una ética exaltadora de la producción y el trabajo, con un primer exponente en el *Idearium español* (1896) de Ángel Ganivet, precursor simbólico del movimiento del 98, año en que él muere en Riga. En las primeras décadas del XX la tradición del pensamiento tradicionalista español, desde Azorín a Calvo Sotelo, insistirá en la tesis de que el catolicismo tradicional siempre había mostrado una ética económica

⁷ Podemos recordar también al navarro Fermín Arteta, ingeniero militar, político, y ministro de Isabel II, colaborador del presidente y jefe político Bravo Murillo. Fue un talento en el arte de la administración. En su puesto ministerial desarrolló programas políticos muy relacionados con una tecnocracia que entonces asombraba, y aplicó modernos conceptos de organización al Cuerpo de Ingenieros Militares (ver Julio Trenas, *Fermín Arteta, la anticipación de un tecnócrata*, que comenta Pablo Vila San Juan en *La Vanguardia*, 9/XI/72).

productiva, ascética y muy diferente de la que representaba el espíritu liberal especulativo, cortesano, considerado una importación extranjera. El hilo conductor de la evolución de esta tendencia tecnocrática en España será Ramiro de Maeztu⁸, un típico representante de los noventayochistas que, habiendo sufrido tan vitalmente la crisis, se lanzará con la misma pasión a la solución de los males de la nación.

Maeztu dará expresión teórica a esta ética del catolicismo tradicional y generará la mitología necesaria: un espíritu de ahorro, de inversión, de producción de riqueza, considerados como elemento central de la política católico-social. Tal política será considerada la única forma de conseguir una base social preponderante frente a los oligárquicos intereses conservadores y los intentos revolucionarios de los socialistas. Hasta aquí no había diferencias con Calvo Sotelo, pero sí a partir de aquí. El ministro primorriverista optará por conseguir ese catolicismo social promoviendo estatalmente las posibilidades de la estructura económica española existente. El ensayista vasco preferirá, por su parte, seguir a Weber, justificando un espíritu del capitalismo superior moralmente al capitalista: un espíritu católico del capitalismo. Ramiro de Maeztu elaborará una vía para el capitalismo español compatible con la tradición religiosa, vinculando el capitalismo y la moral, a partir del ejemplo anglosajón. El vínculo moral y religioso del desarrollo capitalista es utilitario y al mismo tiempo trascendental. Es mejor multiplicar el dinero que gastarlo en caridad, así es útil socialmente. A. Botti (1992) ha planteado, justamente a partir de Maeztu, el tema de las relaciones entre nacionalcatolicismo y modernidad económica.

El contenido del programa que promueve Maeztu está inspirado en las ideas de Joaquín Costa y su Liga Nacional de Productores. Refiriéndose a 1898 escribe que “mi idea central era que la España nueva no ha de hacerse por los políticos; no incumbe a la política la capital empresa de mejorar la condición de nuestro suelo” (*El Sol*, 12/X/23), sino a los técnicos. Al intentar incorporar a Unamuno a este empeño regeneracionista se topará con la visión espiritualista de don Miguel, que le advierte que “ni entiendo de enseñanza agrícola nómada, ni de ligas de labradores, cooperativas de obreros campesinos, cajas de crédito agrícola y pantanos, ni creo que sea eso lo más necesario para modificar la situación económica y moral de nuestro pueblo” (Zaratiegui, 2006: 453-454). Maura, escéptico, les responde con un “ya maduraréis”. Tampoco pudo contar con el apoyo de Baroja que le espeta enfadado: “el día que venga esa nueva España con sus máquinas odiosas y chimeneas, me voy a Marruecos”. No estaba aún preparado el ambiente en el cambio de siglo para acoger ideas de corte tecnocrático.

⁸ Quizá la mejor biografía de Maeztu sea la de P.C. González Cuevas (*Maeztu. Biografía de un nacionalista español*, 2003).

La insistencia del escritor vasco en introducir el concepto hará que, a raíz de una conferencia en la Escuela Superior de Industrias de Vigo (VII/02), Valle-Inclán le ponga el apodo de *ingeniero literato*, que no disgustó a Maeztu. En esa conferencia apunta uno de sus temas favoritos: la innovación en maquinaria propia para no depender de patentes extranjeras. Cuando establece una división de clases sociales Maeztu se inclina por los técnicos. Las cuatro clases son “la propietaria irresponsable (accionismo), los parados (abismo), la gente que vive de las apariencias como políticos y periodistas (especuladores) y, por último, los ingenieros que acabarán imponiéndose”. Maeztu confía en los ingenieros como catalizador del esfuerzo regeneracionista en la industria y el comercio: “cuán pocos los ingenieros, los sociólogos, los economistas que alientan el espíritu de secesión! Imposible mantener el desarrollo industrial de Cataluña mientras no se enriquezca la tierra castellana; imposible el desenvolvimiento de Castilla mientras no la ayuden los capitales de los más adelantados” (3/III/03). Lamenta la poca inclinación que sienten hacia la industria y asocia a sus héroes de las máquinas con una futura “religión del patriotismo constructivo”. De nuevo le saldrá al paso Unamuno que critica la ilusión de fomentar la industria mediante el fomento de las ingenierías y las escuelas (Villacañas, 2000: 76). Esto equivaldría a confundir el efecto con sus causas, replica el escritor salmantino. La razón última de la vida económica, y de su lógica, es el tipo de hombre económico, que se atiene en todo momento a su propio interés. Sin este hombre, el único que despliega la genuina *ratio* económica, no es posible para Ramiro de Maeztu generar un proceso productivo dinámico que demande mayor número de licenciados en las carreras técnicas.

A ese *homo oeconomicus* abrirá paso Maeztu en su alegato del sentido reverencial del dinero, porque ese hombre dominará la realidad social española; de ahí la necesidad de difundir “los sanos elementos fundamentales de economía”, la comprensión real de cómo aumentar la riqueza. Maeztu cree que la pérdida de los mercados coloniales obligaría a una racionalización de la producción, y con ello a una radicalización de las exigencias políticas por parte de los industriales y el capital. Aunque tenga que aceptar las correcciones de Unamuno a sus opiniones sobre la industrialización de la meseta, esa es tarea de “las clases industriales, no los políticos, bohemia leguleya”; los poetas cantarán “la epopeya del negocio y del dividendo” (12/I/01). También los métodos serán capitalistas (bancos agrícolas, sindicatos capitalistas) para llevar el espíritu de empresa a la agricultura.

Maeztu asistirá como observador en noviembre de 1898 a la asamblea de Cámaras de Comercio en Zaragoza que despertó una gran expectación. Publica tres artículos en *Vida Nueva*. Cree que de la reunión surgirá “una acción concertada de industriales y comerciantes que, sin recurrir a las instancias políticas, mejoren la situación económica. No se hará la industrialización que requiere España por patriotismo o por equidad sino por espíritu de lucro, pero

¿qué importa? Lo práctico es hacer habitable el suelo español”. Todos los brazos son necesarios para levantar el país: quiere que “la Iglesia, la Ciencia, la Democracia, el Socialismo y el Anarquismo se unan en un acuerdo utópico de trabajo para la regeneración” (28/II/00). Lo que no había logrado Pablo Iglesias en veinte años de agitación obrera lo realizará en pocos años el nuevo espíritu de las clases conservadoras.

El desencuentro que observa entre la política y los intereses reales de la gente le lleva a rechazar la capacidad de liderazgo regenerador de cualquier grupo social que no sea el de los técnicos. El resurgimiento de España se basará en la laboriosidad de catalanes y vascos, “los que conocen su oficio”. El desarrollo industrial bilbaíno le impresiona vivamente (16/VII/97). Maeztu vibra con ese espíritu y, en una elaboración posterior de sus ideas, lo funde con el capitalismo y una ética puritana: “Industrialismo y capitalismo se condicionan mutuamente. Cierto que la necesidad de capitalización es intrínseca al industrialismo, pero también que la industria es un procedimiento más rápido que la agricultura de darle vueltas al dinero. No hay industria sin previo capital. Y el capitalismo lo encontraremos en una ética que tendrá que ser la del puritanismo u otra muy parecida” (26/XI/26).

La definición de una vía conservadora inserta dentro del proceso industrial contemporáneo, integrando la identidad católica con la modernidad técnica, inauguraba una pauta de acción que respondía al sentir del industrialismo católico-conservador. Se trataba de una combinación política enraizada en Balmes, que unía las esencias católicas del pasado con el modernismo industrial del futuro, en función de un eje conservador que tenía en los distintos sectores sociales su base principal. Pero el análisis que hace Maeztu de la crisis del 98 tiene un aire desconocido hasta entonces en la historia española. Califica el atraso como un problema de actitudes colectivas y no de recursos: “como todas las naciones viejas, España tiene abundancia de capitales, pero capitales improductivos”. No falta dinero, pero sí capacidad y empuje empresarial: “faltan en España los hombres de gran iniciativa y profundos conocimientos financieros que se encarguen de encauzar la corriente de capitales hacia las empresas beneficiosas para el capitalista y para la sociedad”. Son ideas tecnocráticas expuestas años antes de la aparición de este movimiento en los Estados Unidos.

En 1901 publica su serie de artículos titulada *Bilbao*, fundamental para entender el regeneracionismo de Maeztu orientado por completo al desarrollo financiero, industrial y comercial del país. El título del primero (*Bilbao. La capital de la nueva España*, 3/VIII/01) marca la pauta de los siguientes: a la parálisis de la vieja España opone la actividad financiera e industrial de la nueva de “septentrionales músculos de acero”. La nueva aristocracia son los hombres de negocios, “que deben llegar al poder” (Santervás, 1987: 500). Anhela una revolución económica nacional que “arranque la propiedad a los actuales

terratenientes y accionistas” y anima a los empresarios vascos a desarrollar el resto de España, a “regar los llanos, industrializar la agricultura, nuestros intereses están en toda España”. Esos hombres son el prototipo del hombre que se hace a sí mismo forjado en el trabajo: siempre hablará con “reverencia de las grandes figuras de los negocios en Vizcaya”. El vigor bilbaíno contrasta con la atonía de Madrid, parásito de la economía española: la capital consume pero no produce y su inoperante casta política se está derrumbando ante la presión de las nuevas formas económicas vasca y catalana. España no ha conocido el individualismo económico moderno, y es en Madrid donde se atrincheran estos tipos humanos estériles (Villacañas, 2000: 64). La España que trabaja es Bilbao y Barcelona, los únicos que han aceptado la ley ineludible de la modernidad con nobleza.

Tras trabajar como corresponsal de prensa en Londres entre 1905 y 1919, en 1925 Maeztu marchó a Estados Unidos donde elabora su teoría del *sentido reverencial del dinero*. Ha leído las obras de Veblen y Scott y marcha allí para responder a una pregunta: ¿en qué consiste la superioridad de los anglosajones? Influidor por la obra de Max Weber, de quien Maeztu fue uno de los primeros lectores españoles, quiere comprobar si la teología calvinista ha dado allí frutos en forma de laboriosidad de sus obreros. Marcha con prejuicios porque América es “los medios sin el fin, la economía sin la ética”: para él, no existe otra forma de espiritualizar el dinero que situarlo en la cercanía de la ética, actividad que debe regir una política de inversiones.

Nada más llegar, hace notar Maeztu que la calidad de los Estados Unidos no reside en su riqueza natural sino de la eficacia de sus gentes que él atribuye a la adecuada dirección técnica (15/IX/25). Es el capitalismo ordenado el que ha traído la prosperidad, pero desconfía de los experimentos tecnocráticos de primera hora. El programa socialista había sido incapaz de dar a los obreros los beneficios que sí recibían cuando cooperan con los patronos (Zuleta, 2000: 15). La lucha de clases aleja el capital de la industria y debe intervenir el Estado con riesgo de la libertad. Apela al patriotismo común de empresarios y obreros, que debía dictarles una política económica cooperativa, como única garantía de la paz social. Alejando los intereses partidistas han sabido los americanos basar su actividad en “la organización, la racionalidad, el trabajo. El capitalismo de empresa ha aparecido donde se ha sabido o se ha podido organizar racionalmente el trabajo libre” (13/IX/25). La cita sigue literalmente a Max Weber: el capitalismo se basa en la organización racional y voluntaria del trabajo.

Es capitalista porque cree que el dinero lo utiliza mejor el sector privado que “la sima sin fondo del Estado, para multiplicar las oficinas o los empleos públicos” (8/III/26). La iniciativa privada es creadora mientras que el Estado es económicamente parasitario. Con argumentos weberianos (“la clase burocrática monopoliza la cultura y la enseñanza”) ve difícil salvar esta desventaja de Europa.

Plantea la dicotomía entre una riqueza *mala* (la de Astor especulando con acciones e inmuebles) y otra *buen*a (Ford pagando altos salarios), distinción popular muy extendida en esos años por influencia de Veblen entre lo físico (*producción*) y lo pecuniario (*especulación*). La actividad puramente financiera no supone ganancia para nadie.

Maeztu intenta trasplantar el sentido del dinero a una versión castiza de capitalismo español enraizado en las *Sociedades Económicas de Amigos del País*, que él ve animadas por un aliento religioso. Pese a reconocer que “la España de Cánovas y Sagasta era un país agrícola que no conocía ni el capitalismo industrial, ni apenas el financiero”, se muestra esperanzado porque “en los pueblos hispanos se han dado ya los elementos de que puede surgir una síntesis salvadora de religión y economía” (9/III/26). Dentro de un programa más amplio de modernización económica y social, Ramiro de Maeztu se pregunta: ¿Dónde están los hombres de las sociedades económicas?, y describe su terreno de juego en términos de dinamismo económico, de lucha de clases, de industrialización burguesa. Comparte la identificación con unas clases medias interesadas en la potenciación económica del país dentro del orden. Sus proyectos reformistas coinciden en lo social y lo económico con los de Costa y las clases que apoyarán al Directorio de Primo de Rivera (3/II/27). Aspira a configurar así una burguesía nacional, junto a sus empresarios que son la nueva aristocracia.

Maeztu fue uno de los intelectuales de la España de principios del XX que más al corriente estuvo de las corrientes europeas y que influyó allende nuestras fronteras. Villacañas (2000) apunta a varios epígonos europeos de Maeztu: Gentile en Italia, Schmitt en Alemania, Chesterton en Reino Unido, y el francés Maurras. Desde *Acción Francesa* éste defenderá un modelo monárquico, antiliberal y antiparlamentario. Nadie mejor que Maeztu para dar expresión a esa conjunción: aversión a las masas, miedo a la modernidad, defensa de la jerarquía y tradición españolista. Maeztu pretendía europeizar el diagnóstico del déficit de modernidad español y europeizar también las soluciones. De esta doctrina hará lema Pérez-Embid (1953: 46): “españolización de los fines, europeización de los medios”. Esto es, mantenimiento de los logros de la victoria militar en la guerra civil, y solución tecnocrática de los problemas de crecimiento económico (CSIC, planes de desarrollo). Maeztu no abandona el fondo regeneracionista-modernizador de su pensamiento en su particular evolución desde un socialismo no marxista a una democracia organicista medievalista. Sus ideas, aderezadas con los escritos de Costa, sugieren una despolitización de lo público y el recurso a los técnicos que la Dictadura acogerá.

3. La Dictadura de Primo de Rivera: primer experimento tecnocrático

Estos planteamientos teóricos técnicos encontrarían campo de acción en la Dictadura (1923-30) que Maeztu acogerá con grandes esperanzas, y que vino a rectificar el fracaso regeneracionista del gobierno conservador de Antonio Maura. Ramiro de Maeztu fue un gran valedor intelectual de Primo de Rivera al que justifica como una intervención constituyente capaz de configurar un sistema social y político ordenado. Con resonancias regeneracionistas, afirma que ese sistema social debía ser expresión de una nueva sociedad liderada por una burguesía también nueva que fuera productiva, responsable, y económicamente creativa (Villacañas, 2000). Era el programa político y social de la burguesía vasca y catalana, pero la dictadura no duró lo suficiente para llevar a cumplimiento su programa de acción.

Este programa de socialización conservadora que salvase los intereses de la propia burguesía, será recuperado posteriormente con fuerza durante el régimen de Franco como mecanismo de legitimación del Estado tradicional, de acuerdo con la elaboración teórica autoritaria formulada durante la Dictadura de 1923 por los herederos del maurismo. Para Cañellas (2007: 25-31) la posterior actividad política de López Rodó se enmarcaría dentro de esta pauta ideológica, que desde 1962 expresará al frente de la Comisaría del Plan de Desarrollo. No en vano se ha identificado dos periodos en el régimen franquista, separados hacia 1960, en función del tipo de legitimidad que sucesivamente se esgrimió: la de origen (una guerra ganada contra la anti-España), la de ejercicio (las realizaciones prácticas en lo económico y administrativo). Existe cierto paralelismo entre esta segunda etapa del franquismo y la dictadura de Primo que nació y pudo mantenerse mientras fue capaz de solventar los problemas sociales y económicos del país. En este factor estriba la debilidad y ruina de ambos regímenes, toda vez que se torna difícil alcanzar de continuo nuevos retos en materia de desarrollo.

Antonio Maura fue uno de los políticos que mejor percibió que la crisis del 98 y las transformaciones que la sociedad española había sufrido durante la época alfonsina, significaban el final del sistema de turno de partidos (Villacañas, 2000: 108-113). Mucho más agudamente que sus críticos, Maura supo ver la profunda veta conservadora de la protesta del 98 y confesó su afinidad electiva y sentimental con ella. Como señala Juliá (2009: 51) ninguna representación del pasado es inocente: los del 98 inventaron una España rural, moribunda, desviada de la corriente general de la civilización europea con objeto de empezar de nuevo la historia de una España caída en el marasmo. Esta conciencia de Maura, que procedía de la misma fuente que la de Costa, le llevó a su consigna de revolución desde arriba como única alternativa a la revolución desde abajo (anarquista, socialista), que amenazaría a la nación española con su disolución. Pero desde su propio partido conservador, desde el liberal de Canalejas y desde el Palacio Real, le hicieron la vida imposible ya que todos se sabían amenazados por su política. El maurismo acabó derivando hacia posiciones autoritarias a partir de 1913, constituyéndose en el principal soporte político de Primo. El maurismo fue decisivo como puente entre el reformismo de la Restauración, el industrialismo de Maeztu y la política de obras públicas y gobierno de técnicos en la Dictadura. Maura converge con el ideario que va a configurar Maeztu desde 1915, y que podemos llamar “regeneracionismo conservador y tradicionalista”, donde es el catolicismo la única posibilidad de hacer frente a los conflictos sociales. En ese anti-anarquismo hunde sus raíces la lógica que aproximará a Maeztu hacia este cosmos político.

La debilidad del liberalismo es esencial para comprender la génesis y apogeo del autoritarismo en nuestro país. Una sociedad atrasada, con un fuerte peso del clericalismo, con una burguesía débil, con escasos sectores ilustrados, era el ambiente ideal para el dominio de la derecha católica, la cual impidió la construcción autónoma de un complejo de ideas liberales democráticas (Del Olmo, 2005). La crisis del régimen de la Restauración, patente desde comienzos del XX, preparó el terreno para la hegemonía de la derecha católica. Se generó un precipitado donde las ideas moderadas y los compromisos fueron rechazadas en beneficio de unos rasgos dominantes autoritarios, antiliberales, católicos y nacionalistas españoles. Ese final del régimen impidió la aparición de una derecha liberal-democrática “a la europea” y abrió el camino a una derecha reaccionaria. Esa situación enraizaba con una crisis de la conciencia de España, relacionada con el fracaso histórico del liberalismo. Así, resulta significativo que la generación del 98 no fuera capaz de encauzar en un sentido liberal-democrático su perspectiva y permaneciera presa de perspectivas elitistas y antidemocráticas. Pensemos en el antiliberalismo de Maeztu, Baroja o Azorín, todos ellos enemigos notorios del sufragio universal. Recordemos la “intrahistoria” de Unamuno, que enraíza con una búsqueda del *Volkgeist* español (que la derecha relacionará con el catolicismo). Incluso el tímido liberalismo elitista de Ortega está asentado en

una desconfianza de la democracia, entendida como riesgo para la continuidad de la nación. Ortega no advierte que estos técnicos no pueden tomar el poder, pues en su esencia no está mantener una cultura. Después de haber accedido a ella súbitamente con el resto de la masa, no la conoce, no la comprende (De Lucas, 2003: 51). Si en el marxismo se considera a los tecnócratas como servidores del capital, no es menos cierto que en el planteamiento liberal se criticó a los tecnócratas por ser unos irresponsables de ideas alejadas de la realidad.

La vinculación de los mauristas con el catolicismo, sobre todo en las juventudes (Ossorio y Gallardo, Goicoechea), se expresa en fórmulas claras que reflejan su disposición a colaborar con esta democracia conservadora católica. Al mismo tiempo, erigido en estandarte del nacionalismo económico, el maurismo propugna la participación del Estado en el impulso industrializador y el fomento de la iniciativa privada. Configurar el entramado de una economía moderna requería de una administración dirigida por técnicos especialistas en las tareas del Estado, dando un sentido empresarial a la Administración. Esta combinación será nota distintiva del tradicionalismo tecnocrático de la derecha española del siglo XX: conservador, incluso retrógrado, en la cuestión política, cultural y religiosa; y moderno en la organización práctica del Estado, en la administración y la economía.

Estas tesis se harán explícitas en *La crisis del humanismo* de Maeztu que dibuja un catolicismo social y democrático, antiparlamentario y organicista, tradicional y al mismo tiempo moderno, expresión del código del movimiento regeneracionista conservador. Muchas de las consignas del libro proceden del carlismo, con el que secretamente Maeztu no había dejado de vincularse, pero se les dota de un lenguaje moderno que hace pie en ciertas posiciones filosóficas y jurídicas de la época. De la misma manera, estos elementos del maurismo también intentan unificar un programa mínimo con Vázquez de Mella para llenar de contenido político un catolicismo social y popular. La llegada de la primera guerra mundial fue vista, tanto por Maeztu como por los mauristas, como el símbolo del final de una época marcada por el liberalismo y el parlamentarismo. Esto dejaba una salida única: la concesión a un gobernante de poderes excepcionales para hacer la revolución desde arriba y organizar un nuevo partido político capaz de disputar la hegemonía a las fuerzas ajenas al sistema dinástico.

La Dictadura advino con el consenso tácito de intelectuales tanto liberales (Ortega) como conservadores (Calvo Sotelo) sobre la necesidad de una cirugía transitoria que erradicara los obstáculos que se oponían al progreso del país. Se presenta aquella como neutra en política, dispuesta a terminar con la crisis socioeconómica, poniendo coto a una ineficacia administrativa cuyo programa resultó atractivo para las clases dirigentes y del mundo empresarial (Cañellas, 2007: 29-30). La febril disposición de medidas de gobierno dadas a golpe de decreto en los albores de la Dictadura, estaba también de acuerdo con el objetivo

expuesto reiteradamente de *hacer más administración y menos política*. En realidad, se trataba de culminar a efectos prácticos las tesis autoritarias que sobre la organización del Estado se venían gestando desde la crisis del 98.

Por eso, resulta razonable que los articuladores de la Dictadura encontraran su continuidad durante el régimen político surgido de la guerra civil. Como escribió Cambó (1930: 196) la gestión técnica resultaría esencial en los gobiernos dictatoriales como contrapartida a la dinámica política partidista: “Un dictador tiene bastante con técnicos para regir los servicios del Estado; no necesita ni puede admitir temperamentos políticos porque ello es completamente contrario al régimen dictatorial”. En los años veinte Francesc Cambó fue uno de los políticos mejor informados sobre la cuestión. Franco, a quien López Rodó (1990: 101) califica de precursor de la tecnocracia, no hizo sino seguir los pasos de Primo al crear gobiernos de técnicos; de hecho, el primero de Franco fue una *Junta Técnica* y buscó técnicos para esos cargos, en una muestra clara de su reticencia hacia los políticos.

El discurso corporativo primorriverista de una política de actuaciones más que de declaraciones, tendrá sus principales exponentes en Eduardo Aunós y José Calvo Sotelo, que se habían formado en el regeneracionismo autoritario de Costa, Ortega y Maeztu. De cara a la posterior institucionalización del franquismo, Calvo Sotelo constituiría el referente de las nuevas generaciones tradicionalistas, integradas por personajes como Calvo Serer, Pérez Embid o López Rodó. En el plano teórico debemos añadir la aportación de José María Pemán, por cuanto vino a configurar tanto el precedente fundamental de la articulación ideológica del futuro movimiento contrarrevolucionario, como la base para la configuración tecnocrática del modelo político tradicional.

Ortega y Calvo Sotelo pertenecían a dos posiciones (liberal y conservadora) de larga tradición en nuestro país desde el siglo XIX. La tradición liberal de Ortega es la que había servido de soporte a los primeros gobiernos no autoritarios de la historia de nuestro país, pero en la década de los treinta los movimientos modernos (fascismo, comunismo) habían desplazado a los liberales. En Calvo Sotelo están los presupuestos ideológicos y técnicos presentes en Primo de Rivera y plenamente acogidos por futuros tecnócratas como López Rodó. Cañellas (2007: 41-45) muestra cómo el futuro Comisario del Plan de Desarrollo vio en la Dictadura un ejemplo de revolución conservadora desde arriba, alejada del control de los políticos, a través de un benévolo “cirujano de hierro”, del que Franco vendría a ser una reedición mejorada. Los teóricos de la Dictadura también se dispusieron a inaugurar un Estado Nuevo, edificado sobre el trabajo y la técnica como piezas de su modernización. Factores actualizados por los

ideólogos primorriveristas (Pemán, Pemartín⁹) o, en otra línea, Calvo Sotelo, insistiendo en la eficacia técnica de la autoridad del orden político sobre la base del desarrollo socioeconómico. Éste constituiría el principio nivelador de un régimen asentado sobre los pilares del ideario tradicional y conservador, inspirador de los futuros patrones tecnocráticos durante el franquismo.

Se trataba, pues, de aplicar una reforma que, recuperando la estructura política tradicional-corporativa como medio de gestión de intereses sociales y de servicio público, reorganizase bajo el eje de la autoridad la racionalización económica y social a través del saneamiento de la administración, el aumento del aparato burocrático y el intervencionismo económico como regulador del crecimiento y la promoción social. Establecer las premisas que hiciesen viable el ideal de la modernización conservadora, controlado por las elites tradicionales. El proyecto maurista de modernización social y tradición nacional no sólo no se contradecía, sino que era complementario, puesto que ese programa de desarrollo tecno-burocrático necesitaba de la protección de las instituciones del Estado. La Dictadura siguió un modelo tecnócrata de gobiernos elitistas formados por técnicos y especialistas en cada área de gestión (en la tradición de Saint-Simon y Comte). Imbuidos de estos precedentes primorriveristas, los tecnócratas de los años 60 usarán el legado para legitimar el Estado tradicional, respaldados por otras aportaciones teóricas de origen anglosajón que reforzaron su posición inicial. El ideal regeneracionista del maurismo, representado durante la Dictadura por personajes como Goicoechea o Calvo Sotelo, participaba, en su vertiente tradicionalista, alejada del sector más liberal, de una concepción esencialista de la nación, tomada de Menéndez Pelayo: en la Monarquía y el catolicismo descansa el ser de la nación, seña irrenunciable de la identidad de España. No era otro el credo del franquismo.

Puede deducirse, por tanto, la existencia de precedentes de gran peso ideológico que habrían de impregnar el futuro modelo tecnocrático del régimen franquista. No debe extrañar tal continuidad, si percibimos la influencia ideológica de aquellos hombres forjadores de una mentalidad reformista, a la vez católica y conservadora (Cañellas, 2007: 44-5). La recuperación del ideal regeneracionista de la modernización socioeconómica postulado por la intelectualidad finisecular, pretendía combinarlo con aquel entramado político tradicional: así fundarían un régimen que debía apoyarse no sólo en la dirección de la clase dirigente, sino en las amplias clases medias como elemento clave de su socialización. Esta idea básica y trascendental, alimentada desde el maurismo

⁹ Para los precursores históricos del tecnocratismo franquista se pueden consultar los trabajos de Pedro Carlos González Cuevas sobre Maeztu, María Jesús González sobre el maurismo, Alfonso Bullón de Mendoza sobre Calvo Sotelo, Gonzalo Álvarez Chillida sobre Pemán, y Alejandro Quiroga sobre Pemartín.

y perfilada por la Dictadura de 1923, se desarrollaría a partir de 1957 de la mano de los equipos técnicos.

La República advino en 1931 como regalo de primavera pero también como fruto maduro esperado por las clases medias y obreras. No era un simple cambio de gobierno, traía un programa ambicioso que afectaba a las relaciones de clases, a la vida desde la cuna a la tumba. Era en el imaginario popular “un cambio de vida”. De estas grandes expectativas, pasados dos años, no quedaban más que rescoldos (Juliá, 2009: 57). El gobierno Azaña se metió en reformas para las que no tenía apoyos, y el Ejército y los monárquicos comenzaron a conspirar. Los teóricos tradicionalistas (Maeztu, Pradera) hicieron al Ejército depositario de los intereses de la comunidad nacional y de los valores tradicionales. Esta idea fue secundada por continuadores del primorriverismo como José María Albiñana o José Antonio Primo de Rivera, que contribuyeron a renovar el discurso contrarrevolucionario bajo el influjo de una retórica filo-fascista. Cañellas (2007: 49, 59-60) lo llama *legalismo de resistencia*, propio de un conservadurismo reacio a transformaciones profundas de la sociedad y del Estado, unido al auge de la nueva derecha autoritaria, en torno al grupo político-cultural de la revista *Acción Española*. Maeztu era el director de la publicación que pronto se convirtió en el principal órgano intelectual difusor del ideario tradicional y monárquico. Calvo Sotelo elabora allí los cimientos del nuevo Estado: a la Monarquía se sumarían los principios de competencia, entendida como gobierno de los mejores; eficacia, esto es, decisión y rapidez; continuidad, ligada al hecho monárquico y autoridad de base moral.

Un hombre clave en la línea ideológica que sigue la revista durante los años republicanos es José María Pemán. A partir de la praxis esgrimida durante la Dictadura sobre la selección responsable de las minorías dirigentes, elabora una técnica de gobierno como elemento funcional dirigido por una jerarquía especializada, alejada del tumulto de la masa, dentro del armazón teórico del mando único. Esta cuestión es de capital importancia debido a los precedentes de una tecnocracia que, forjada en las teorías regeneracionistas de finales del XIX, van cobrando fuerza en el campo conservador como palanca ideológica de contrapeso a las tesis demo-liberales, en el contexto del auge político del autoritarismo. De ahí que el aporte intelectual europeo, especialmente italiano, alemán y portugués, perfeccione en los años treinta los encuadres ideológicos de la derecha contrarrevolucionaria dentro de la nueva adaptación, posibilitada por el moderno lenguaje del doctrinarismo fascista (Cañellas, 2007: 62-3). Dicho acomodo circunstancial habría de encontrar su razonable continuidad durante el franquismo al calor de las nuevas tendencias sobre la eficacia técnica, fundadas sobre las bases teóricas antecedentes, cuyo testigo recogería Ullastres, Navarro Rubio y López Rodó. En un escrito que parece premonitorio de futuros desarrollos escribirá Pemán (1937: 58):

“En estos tiempos en que, cada vez más, todo conocimiento se hace técnica y especialidad, las Democracias se empeñan en elaborar sus jerarquías de mando en un sentido inverso a las jerarquías de técnica. En Madrid, en los Ministerios, los ingenieros son mandados por un abogado, los militares por un novelista, los marinos por un boticario. Y cuando han logrado estos improvisados adquirir en sus departamentos un principio de especialidad y técnica, han de ir a responder de sus actos ante cuatrocientos señores reunidos en una Asamblea de enciclopédica indocumentación, donde, para cada asunto que se trate, si hay diez técnicos, hay enfrente trescientos noventa ignorantes para que ahoguen su voz. Es más lógico llevar al mando supremo a un *técnico del Poder*, como es el Príncipe, educado, desde niño, para su difícil misión”.

Otro ideólogo de la Dictadura que tendrá una continuidad en *Acción Española* y, tras la guerra civil, en la futura construcción del entramado franquista, es José Pemartín. Empeño que, en lo que se refiere a la cuestión monárquica, recogerán los hombres del grupo *Arbor* en los años 1948-53. Como depositario de ese legado político-cultural cabe recordar la activa colaboración del autor con Primo de Rivera, al que Pemartín aporta su idea de la modernización técnica del país, dentro del entramado sociopolítico tradicional, como apunta en su obra *Los valores históricos de la Dictadura* (1929). El recurso a las minorías selectas respondía a una actitud eminentemente técnica en la acción de gobierno en la que, por otra parte, subyacía una clara finalidad política opuesta a la concepción liberal (Cañellas, 2007: 79-80). Las instituciones monárquicas habrían de impulsar, a un tiempo, el desarrollo económico para la promoción social, favoreciendo así el asentimiento generalizado del régimen tradicional. Es la reelaboración de un pensamiento ya esgrimido a finales de los años veinte en el que la preocupación por el bien nacional, desde su perspectiva tradicionalista, atribuía la imperiosa necesidad de estimular el crecimiento económico como seguro fundamental del orden social, dirigido por la autoridad monárquica. La similitud con el programa tecnócrata de los años sesenta hace pensar en la no poca influencia de esta obra en aquellos personajes que, como López Rodó, resultaban afines a esa renovada concepción del tradicionalismo. La construcción y concreción del discurso de Pemartín vendría a coincidir con el ideario desarrollista elaborado por López Rodó.

A pesar de lo que venimos diciendo, el conde de los Andes creía que “*Acción Española* mantuvo una postura contraria a la tecnocracia. Los tecnócratas deben estar subordinados a los políticos. Opino que los tecnócratas son malos políticos y que lo que necesitan los países es buena política. Los políticos ya sabrán llamar a los técnicos competentes” (*ABC*, 14/VII/68). Otro antiguo colaborador de la revista, Yanguas, mantenía una postura muy crítica con la tecnocracia: “No cabe prescindir de los valores espirituales que son los que dominan el curso de la historia. Subordinar estos valores ideales a los puramente económicos, sería tanto como incurrir en el mismo fundamental error materialista del marxismo. El progreso económico ha de ser consecuencia pero no causa del

total progreso humano”. Que ambos personajes representaran el sector juanista menos colaboracionista con el régimen de Franco, ayuda a entender su actitud hacia el grupo de López Rodó, el tecnócrata por excelencia y, al mismo tiempo, exponente del monarquismo colaboracionista que veía en Juan Carlos una apuesta más fiable que la de don Juan, preconizada por el conde de los Andes y Yanguas.

4. La idea de la “planificación” en la Europa de posguerra¹⁰

A partir de 1945, en toda Europa, las autoridades se mostraron proclives a lograr acuerdos políticos, especialmente en materia de reformas sociales y económicas. De Gaulle lo denomina “transición ordenada”. Dado que este era el deseo de las fuerzas ocupantes aliadas, no es extraño que comenzaran a florecer planificadores. En la Europa del Este, los nuevos países ahora bajo la órbita soviética, fueron integrados en la gran hermandad productora de bienes y servicios, con sus planes quinquenales (Judt, 2005: 108-112). En el Oeste, los desastres de las décadas del periodo de entreguerras¹¹ (las oportunidades perdidas a partir de 1918, la gran depresión que siguió al desplome de la bolsa en 1929, las pérdidas ocasionadas por el desempleo, las desigualdades, injusticias e ineficiencias generadas por el capitalismo del *laissez-faire* que habían hecho caer a muchos en la tentación del autoritarismo, la descarada indiferencia y arrogancia de la élite gobernante, y la incompetencia de una clase política inadecuada) parecían estar todos relacionados con el absoluto fracaso a la hora de organizar mejor la sociedad. Para que la democracia funcionara, para que recuperara su atractivo, debía planificarse.

La fe en la planificación, la religión política de la Europa de la postguerra, no obedecía al ejemplo de la URSS, del que casi nada se sabía en Occidente. La idea misma de los planes es anterior a 1945. Durante la depresión de entreguerras surgen voces partidarias desde Hungría hasta Gran Bretaña. Algunas ideas

10 Una versión previa de los capítulos 5, 6 y 7 de esta obra, apareció en el libro *La tecnocracia hispánica*, coordinado por Antonio Cañellas.

¹¹ Un predecesor interesante es Henri de Man (1885-1953), un político y teórico revisionista belga, proponente del planismo durante el periodo de entreguerras, que colaboró con los nazis en la ocupación de Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial.

planteadas en Austria y por los fabianos ingleses, procedían de la antigua tradición socialista, y otras tenían sus orígenes en el reformismo liberal anterior a 1914. Aunque solo fuera por prevenir la agitación política, ahora se hacía necesaria intervenir en los asuntos económicos para regular los desequilibrios, eliminar las ineficiencias y compensar las desigualdades e injusticias del mercado. El colapso de la economía internacional y la guerra provocó que la planificación se viera como más urgente y de mayor alcance. Así, las propuestas de un plan nacional vinieron a ser populares entre los jóvenes ingenieros, economistas y funcionarios públicos de Francia y Alemania.

Este era un cambio notable respecto al periodo entreguerras cuando los aspirantes a planificadores languidecían de frustración en la marginalidad política: la idea de que se podía “planificar” una economía capitalista parecía absurda a la izquierda socialista y a la derecha conservadora. Se acercaron entonces a los partidos autoritarios de la derecha radical. Oswald Mosley y otros laboristas británicos se volvieron hacia el fascismo. Los seguidores de Mussolini en Francia y Bélgica envidiaban su gran éxito al superar las desventajas económicas de Italia a través de una planificación dirigida por el Estado y el establecimiento de organismos “paraguas” bajo cuya tutela se encontraban sectores económicos enteros. Albert Speer, el administrador del nuevo orden de Hitler, era admirado en el extranjero por su programa de dirección y regulación económica. Speer y Bichelonne, el ministro de Industria de Vichy, elaboraron (IX/43) un sistema de reducciones de aranceles basado en ideas planificadoras que presagiaban con bastante exactitud las relaciones comerciales europeas y la coordinación franco-alemana de años posteriores. En una entrevista años después se calificaba a Speer de “primer tecnócrata del mundo moderno” (*La Vanguardia*, 11/XII/69), una especie de precursor alemán de Robert McNamara o Jean Monnet. Speer no fue jamás un político y esto es lo que le daba –y le da– su extraordinaria perspectiva (aunque sus *Memorias* sean un ejemplo de manipulación histórica, como él mismo reconoció años después).

La guerra mundial impuso un silencio sobre la tecnocracia que fue criticada en el plano teórico y superada en el práctico por las soluciones keynesianas. La referencia obligada para el periodo bélico será *La revolución de los managers*, que J. Burnham publica en 1941. De modo intencionado su autor asume las profecías desde Saint-Simon hasta Scott. El libro incorpora un nuevo materialismo dialéctico, pero opuesto al de Marx. Antiguo marxista, Burnham profetiza la muerte del capitalismo por no haber podido evitar el paro masivo y las crisis periódicas, mostrándose impotente para aprovechar la técnica moderna pero, a diferencia de Marx, Burnham considera al proletariado incapaz de ser la clase dirigente de la sociedad del futuro. Ve en la tecnocracia de Scott la teoría con más potencial para sacar a Estados Unidos de la depresión y asegura que el poder se concentrará en manos de un pequeño grupo de *managers*, que en nombre del Estado planificará las actividades económicas y ejercerá, con asentimiento de

los capitalistas, las tareas vitales de la dirección técnica en el seno de grandes empresas. Vista de esta forma, la tecnocracia, bajo sus distintos aspectos, se opone con más o menos fuerza a la democracia, en tanto que tiende a elegir a los responsables políticos por vías distintas del sufragio. O, cuando menos, abre una incógnita sobre la posible deriva totalitaria de las ideas tecnocráticas.

Muchos defensores de la “planificación” tecnocrática que apunta Burnham tuvieron sus primeras experiencias, como funcionarios y administradores de empresas, en los regímenes de ocupación de la guerra (Francia, Bélgica, Checoslovaquia) por no hablar de Alemania e Italia. En Gran Bretaña la guerra introdujo la hasta entonces extraña idea de la “planificación” gubernamental. Fue la guerra la que situó en Gran Bretaña al Gobierno en el centro de la vida económica. Las medidas del laborista Attlee entre 1945 y 1951, más que la adopción de medidas socialistas, era simplemente el legado de un Estado que se había organizado para la lucha en una guerra total (Judt, 2005: 113-114). El fascismo y la guerra son el puente que enlaza los conceptos controvertidos de la planificación económica con la política económica dominante en la posguerra. Pero no hubiera tenido el éxito que alcanzó de no haberse percibido como claramente desvinculada de la desacreditada política del periodo de entreguerras. La planificación consistía en realidad en la fe en el Estado: la guerra había mostrado que, en ausencia de otras instancias de regulación, solo el Estado podía actuar como barrera entre el individuo y la pobreza. Attlee captó bien ese ambiente: lo que Gran Bretaña necesitaba eran “ciudades, parques y campos de deportes, casas y escuelas, fábricas y tiendas bien planificadas y bien construidas”. Existía una gran fe (y no solo deber) del Gobierno de resolver problemas a gran escala movilizandoy destinando personas y recursos a fines útiles para la colectividad. Ideas que resultaban atractivas para los socialistas pero también para los democristianos que dominaban en Europa.

Este fortalecimiento del papel del Estado en materia social y económica tenía en cada país sus matices: en Gran Bretaña la nacionalización de bienes y servicios; en Italia bastó seguir el legado institucional fascista, ahora con otros administradores; en Alemania se instauró un nuevo modelo de cogestión de las fábricas entre el Estado, los empresarios y los trabajadores; en Holanda la planificación central comportaba un conjunto de decretos tanto predictivos como prescriptivos para el uso de la empresa privada. Pero fue en Francia donde produjeron hechos más tangibles. Para empezar nacionalizaron hasta un quinto de la capacidad industrial. Jean Monnet presentó (XII/45) a De Gaulle el plan de modernización, se creó el Comisariado del Plan, con Monnet a la cabeza, y el Consejo de Ministros francés aprobó (I/47) el primer plan nacional.

Jean Monnet había pasado la II Guerra Mundial en Estados Unidos negociando suministros de armas para Inglaterra y Francia. Su contribución a la planificación económica en el Plan Schumann para la cooperación económica

Europea se basaba en un grado de conocimiento de la organización a gran escala y la colaboración entre Estados que pocos tenían (Judt, 2005: 116). El Plan era producto de una cultura política que ya se hallaba dispuesta a la toma de decisiones autoritarias y a la construcción de consensos mediante orden gubernamental. Francia fue el primer país en comprometerse absolutamente con el crecimiento económico y la modernización como política pública. El Plan dependía del acceso a las materias primas y a los mercados alemanes. La planificación francesa nunca fue más que indicativa: lo que hacía era fijar objetivos, no cuotas de producción. Nada que ver con la planificación soviética, cuyo principal rasgo y defecto era la insistencia en unas cifras arbitrarias y rígidas para cada sector y artículo. El Plan daba al Gobierno una estrategia y unas palancas para promover ciertos objetivos. Era ciertamente muy original.

En toda Europa ganaba terreno la fórmula tecnocrática o planificadora a través de la inversión pública: adónde destinar los recursos del Estado y a qué coste. En 1947 Checoslovaquia había nacionalizado tres cuartas partes de su producción, y al año siguiente crea la Oficina de Planificación Estatal. Significaba aceptar años de austeridad para pagar la recuperación económica. En Francia o Italia, donde casi no existía un mercado de capital privado, todas las inversiones importantes tuvieron que ser financiadas con dinero público, razón por la que el Plan Monnet se centró en la inversión de capital en las industrias, a costa del consumo doméstico, con el resultado conocido de la oleada de huelgas y crecimiento del PC en Francia e Italia. Era justificable a largo plazo, pero constituía una estrategia de alto riesgo.

La economía de la planificación se inspiraba en las lecciones aprendidas de la crisis del 29 (excluir cualquier retorno al proteccionismo y al desempleo) que eran el substrato en la creación del Estado de bienestar. Según la ortodoxia de los 40, las polarizaciones políticas de los 30 eran consecuencia directa de la depresión económica y de sus costes sociales (Judt, 2005: 118-120). Fascismo y comunismo proliferaban con la desesperación social. Pero el Estado de bienestar (la planificación social) era algo más que un antídoto contra la agitación política. Existía un amplio consenso sobre que el estado físico y moral de la ciudadanía era un asunto de interés público, responsabilidad del Estado. Alemania había establecido ya a finales del siglo XIX planes médicos y de pensiones. Gran Bretaña y Francia le imitaron y tenían ministerios de sanidad al acabar la I Guerra Mundial. El seguro de desempleo obligatorio, introducido primero en Gran Bretaña (1911) se extendió a casi toda Europa. Ayudas familiares para aumentar la natalidad, primero en Bélgica (1930) y Francia (1932). Pero no eran sistemas de bienestar completo sino de reformas acumulativas. Fue la II Guerra Mundial la que lo cambió todo. En Gran Bretaña con el impulso de Keynes comenzó a pensarse que “guerra y bienestar van de la mano”. La seguridad social de posguerra consistió en seguros por parte del Estado contra la enfermedad, el

desempleo, los accidentes y los riesgos de la vejez. Todo implicaba una iniciativa radical: la redistribución a través de impuestos.

Este conjunto de ideas se abrieron camino en Gran Bretaña cuando se presente en 1944 el llamado *Informe Beveridge* sobre la provisión por parte del Estado de seguros sociales, origen del moderno estado del bienestar, que proponía entregar la gestión de la seguridad social a un comité independiente de expertos. El autor del informe toma la emblemática expresión “de la cuna a la tumba” del escritor socialista E. Bellamy, en su novela *Mirando atrás* (1888). El Informe planteaba incorporar cuatro servicios: salud, pensiones, ayuda familiar y empleo. La piedra angular (el Servicio Nacional de Salud) fue aprobada en julio de 1948. La propuesta chocaba con la tradición británica de que “los servicios sociales son algo que no puede estar fuera de la política”, postura que defendía el semanario *The Economist* (12/VIII/44) para quien un comité no ministerial (excepto en materias puramente técnicas) sería algo ineficaz. “Los expertos sin responsabilidad de ministros suscitan recelos políticos fundados, pero como son indispensables, un problema de práctica política se ha transformado en un dilema técnico”. Así había ocurrido con la sanidad pública (NHS) dentro de un proceso de inserción de técnicos en los servicios públicos. El semanario apuntaba al fondo de la cuestión: “los hechos nos ponen ante la elección entre democracia y tecnocracia”, si la primera no gana en eficiencia, “el Gobierno deberá dejar el paso a la autoridad o régimen de los expertos”. Ya se ve que seguía existiendo una cierta prevención contra las proclividades autoritarias de la tecnocracia.

Por supuesto, el Estado de bienestar no salió barato: en 1949 Francia destinaba el 8 % del PIB a servicios sociales y en Gran Bretaña el 17 % del gasto público era para la seguridad social. La clave de su éxito estuvo en que todos consideraron que eran tareas propias del Estado. Para la generación de 1945 el único camino sensato para salir del abismo era encontrar un equilibrio viable entre las libertades políticas y la intervención racional distributiva del Estado. En 1945, los viejos estadistas de Europa, independientemente de la etiqueta de su partido, eran sin excepción profesionales escépticos y pragmáticos del arte de lo posible. Una era post-ideologizada estaba comenzando (Judt, 2005: 133-4). Y el objetivo era claro porque muchos sectores estaban devastados: la vivienda (habían desaparecido el 40 % de las viviendas alemanas, el 30 de las inglesas y el 20 de las francesas), el transporte (entre París y el mar ni un solo puente quedó en pie), la industria (este sector salió reforzado de la guerra). Era el turno de la planificación y de los tecnócratas.

Pero la tecnocracia tuvo que lidiar muy pronto con las consecuencias de su vinculación con los regímenes totalitarios. Terminada la guerra, será en el mundo anglosajón donde se plantee a lo vivo esta difícil convivencia entre tecnocracia y democracia. Los pioneros del pensamiento tecnocrático (Saint-Simon y Comte) ya habían propuesto crear un “Estado administrativo” a cargo de una elite de

expertos y empresarios con el objetivo de mantener el orden social y la gestión “positiva” o científica de los asuntos de Estado, pasando por encima de la libertad individual, la participación popular y la democracia (Jones, 1998). Una serie de experiencias tecnocráticas en Europa y América durante el siglo XX reafirmarían la creciente relación entre tecnócratas y regímenes de ideología autoritaria. El movimiento tecnocrático de los años 20 en Estados Unidos desembocaría en los 30 en otro de corte fascista (Bell, 1960), la experiencia de los socialismos reales en Europa oriental y la Unión Soviética (Konrad y Szeleny, 1981), y el experimento de la Alemania nazi¹² (Herf, 1984). J. Herf usa el término “modernismo reaccionario” para dar cuenta de la actitud de los nazis radicales que abrazaron incondicionalmente la tecnocracia moderna.

La cobertura que recibió en prensa y revistas españolas adelantaba las críticas contra los tecnócratas y las medidas que a partir de los años 50 pondrá en práctica el grupo elegido por Franco para llevar a cabo sus políticas de industrialización y modernización (Fernández de la Mora, 1986). A esta relación entre democracia y tecnocracia se referirá Gil Robles en una nota (I/65) sobre el futuro político de España. Una época de “empuje creciente de la técnica, que invade sin cesar dominios que en otro tiempo se consideraban como exclusivamente políticos”, plantea un nuevo dilema: “¿Estamos ante la alternativa insoslayable de una política dirigida por los técnicos o de una técnica al servicio de la acción política?”. Ya que la intervención estatal en materia económica trae la planificación, se pregunta, “¿cómo podrán articularse, de manera orgánica, la indispensable intervención de los técnicos y las facultades de decisión que corresponden a los órganos que encarnan la representación popular? ¿A qué nivel y por medio de qué instrumentos debe establecerse la coordinación?”. Que los técnicos no tuvieran que dar cuenta a los organismos democráticamente elegidos –o dictatoriales, como en el caso español – arroja para el político salmantino una duda razonable sobre la legitimidad de la tecnocracia.

Que Carl Schmitt sea uno de los receptores pioneros de las doctrinas tecnocráticas en el continente, dice mucho sobre su proclividad a encarnarse en regímenes de fuerza, en el marco de la tradición ordenancista y de intervención estatal en su patria alemana, y originó un tipo de burocracia bélica ligada a la

¹² La imagen del alemán en cuanto constructor y tecnócrata aparece en un apartado de *Mi lucha sobre La nación y la raza*. Otro nazi tapado (Jünger) ofrecía su visión tecnocrática del nuevo hombre en sus libros *Movilización total* (1930) y *El trabajador* (1932). Otro (Heidegger) alude al nazismo como creador de una nueva síntesis entre la tecnocracia globalizada y la necesidad humana de raíces y de vida metafísica. Jünger dotó al nazismo de un atractivo para muchos académicos: la esperanza de que surgiera una nueva tecnocracia espiritual y vitalista (...). Todos habían sufrido la miseria de la crisis del 29 y el nazismo era una forma de reconciliar el conocimiento positivista y la experiencia tecnológica con una sensación de espiritualidad. Un equivalente tecnocrático de la bonifica fascista fueron los planes de transformación de territorios polacos en nuevas zonas de cultivo.

disciplina nacionalsocialista que no superó el umbral de 1945. Sin embargo, fue en Francia donde arraigaría con más fuerza el hacer tecnocrático, a partir de las condiciones favorables creadas por la brumosa *sinarquía* en el régimen de Pétain. Desde 1944 la irrupción del poder tecnocrático en Francia es evidente no sólo en los estratos del sector público, sino también en los grandes negocios privados. La desastrosa experiencia de la III República, antes y durante la II Guerra Mundial, con sus continuas crisis políticas y gobiernos de corta duración, reforzó el poder de los altos funcionarios estatales y avivó el desprestigio que la clase política francesa arrastraba desde comienzos de siglo. La IV República (1946-58) no mejoró la situación, sufrió los mismos problemas endémicos de la III, y preparó el camino para la emergencia de la nunca olvidada tradición bonapartista de gobiernos fuertes, en la persona del general De Gaulle. El correlato a esta intensificación del poder de los altos funcionarios y los consejos de expertos en la V República, fue la limitación de los poderes del Parlamento.

5. Las primeras manifestaciones de la tecnocracia castiza en España

La guerra mundial y la posterior reconstrucción de Europa dieron paso a un pragmatismo cansado de las viejas utopías sociales heredadas del XIX: liberalismo, marxismo, capitalismo. En ese contexto se plantea la controversia sobre el fin de las ideologías que en torno a 1950 avivaron R. Aron y D. Bell, en Francia y Estados Unidos. Una evolución del pensamiento de Aron le llevó a plantear la convergencia de los sistemas que pugnaban por hacerse con la dirección del mundo: el soviético y el occidental. La ideología se encontraba intelectualmente desvitalizada (González Cuevas, 2007: 25). Ni Aron ni Bell eran partidarios de la tecnocracia. Bell la juzga severamente como propia de pueblos subdesarrollados, inventada por políticos en búsqueda del desarrollo económico y del poder nacional, en contraste con los ideales del XIX: espíritu universalista y humanitario, libertad, igualdad social (Meynaud, 1964: 85). Por su parte, Aron apuntará a la oposición latente entre técnicos y políticos: unos se preocupan de la eficacia, los otros de la opinión pública y de su popularidad. Es muy difícil conciliar el interés de los grupos privados y el nacional. Los funcionarios sueñan con verse libres de los políticos e inaugurar una tecnocracia. Los tecnócratas creen estar en posesión de los objetivos que hay que realizar, y están convencidos de que el día que ellos pudieran manejar el poder, se haría lo necesario. Olvidan que toda sociedad humana implica un principio de legitimidad (la racionalidad burocrática no es un principio). Olvidan, además, que no se puede elegir un modo de gobierno sin contar con el deseo de los hombres. Los políticos, en cambio, aceptan el no tener siempre razón y enfrentarse con opiniones contrarias. No obstante, en España estos planteamientos fueron interpretados como una apología indirecta de la tecnocracia. Liberales militantes como eran, al menos en el plano económico, para ellos el fin de las ideologías era reinterpretado en nuestro país como el triunfo definitivo del sistema político liberal y del capitalismo sobre el modelo soviético.

En los años posteriores a la II Guerra Mundial se publicaron las primeras síntesis de expertos en tecnocracia. En la *Revista de Estudios Políticos* o en *Arbor* aparecerán recensiones de esas obras sobre los experimentos de planificación económica que se llevaban a cabo en Holanda y Francia. Los términos “tecnocracia” o “tecnócrata” son rarezas en la prensa de los años 50, hasta la entrada en el Gobierno de dos ministros calificados como tecnócratas –nos referimos a Ullastres y Navarro Rubio–. Unían ambos dos características: no ser políticos de oficio sino profesionales (académico uno, Letrado del Consejo de Estado otro), y pertenecer al Opus Dei, una institución de la Iglesia que predicaba la búsqueda de la santidad personal en medio del mundo. Como hablaban de eficiencia, de ser más productivos, de ordenar las exportaciones, no es extraño que en la prensa del Movimiento se comenzara a hablar de “los tecnócratas del Opus Dei”. Sin embargo, cuando J. Ruiz-Giménez se refiere a la entrada en el Gobierno de dos ministros del “grupo Opus” en la crisis de 1957, para nada alude a la tecnocracia, que para él es cosa bien distinta. En el imaginario del antiguo ministro de Educación y de muchos otros falangistas (Laín, Tovar, Fraga) el Opus Dei aparecía más ligado al tradicionalismo de Calvo Serer que a la tecnocracia de López Rodó.

Aquí aparece un problema de continuidad. Es un lugar común en la historiografía señalar que la ideología de los tecnócratas (López Rodó, Ullastres) hunde sus raíces en la acción cultural del “grupo *Arbor*” que entre 1948 y 1953 se aglutina en torno a Calvo Serer y Pérez-Embid. Es obvio que dentro del grupo hay un contraste entre una corriente cientifista (Albareda, Fernández de la Mora) y otra de perfil más cultural (Pérez-Embid, Fontán). Calvo Serer estableció relaciones de amistad y colaboración con intelectuales cercanos a la tecnocracia, como Marcel de Corte o Miguel F. Sciacca. Pero no parece que pueda establecerse una línea de continuidad basándose exclusivamente en la convergencia sobre ciertos principios de la tecnocracia. Otra cosa es que compartieran el tradicionalismo político, cultural y religioso que era moneda común en la intelectualidad cercana al régimen. El término cayó en desuso durante casi diez años: entre 1957 y 1966 son escasas las referencias en prensa a la tecnocracia o a los tecnócratas. Será en los años 1969-74 cuando ambas expresiones se utilicen con profusión. Veamos esta evolución con cierto detalle.

Un recuento de la ocurrencia de los términos “tecnocracia” y “tecnócrata” en la prensa diario confirma esta percepción. Se han elegido dos periódicos, uno de la capital (*ABC*) y otro de Barcelona (*La Vanguardia*) entre los años 1950 y 1980. En ese tiempo aparece 628 veces el término “tecnocracia” en *ABC*, de acuerdo con la siguiente secuencia: 1950-52 (3), 1953-55 (5), 1956-58 (18), 1959-61 (7), 1962-64 (33), 1965-67 (100), 1968-70 (100), 1971-73 (158), 1974-76 (146), 1977-79 (58). Los años con mayor número de ocurrencias son: 1971 (61), 1972 (51), 1976 (51), 1974 (49), 1973 (46), 1975 (46). Si nos fijamos en el diario catalán son 365 ocurrencias, con esta distribución: 1950-52 (2), 1953-55

(2), 1956-58 (9), 1959-61 (11), 1962-64 (20), 1965-67 (46), 1968-70 (83), 1971-73 (118), 1974-76 (57), 1977-79 (22). Los años con mayor número de referencias en *La Vanguardia* son 1972 (42), 1971 (39), 1973 (37), 1970 (32), 1968 (31), 1976 (22). El mismo patrón en ambas publicaciones.

Esto nos permite adelantar algunas conclusiones:

1) El término “tecnocracia” o “tecnócrata” apenas se usa en los años 50 y primeros 60, con la particularidad de que se refiere casi siempre a la burocracia de Bruselas o a los países de la órbita comunista; cuando los llamados “tecnócratas” entren en el gabinete de 1957 casi nadie los llama así, y lo mismo se puede decir de los años posteriores, en pleno Plan de Estabilización (una referencia en *ABC* en 1960 y 1961, 4 en 1957; también una referencia en *La Vanguardia* en 1957 y 1959);

2) Es a partir de 1964 (I Plan de Desarrollo) cuando aumenta la frecuencia de uso y, sobre todo, se aplica con mayor abundancia a los españoles (aunque en 1964-70 la proporción es de un 50 % en relación con los tecnócratas rusos y del Mercado Común); no hay un uso extendido del término en los años en que son ministros Ullastres y Navarro Rubio, rara vez se les califica de tecnócratas; cosa distinta es el grupo de técnicos en torno a López Rodó en la Comisaría del Plan, eso sí hace crecer las referencias; tampoco el gobierno monocolor de 1968 es calificado con unanimidad de esa forma;

3) Cuando el término se utiliza con profusión es en los años 1971-73: el 33 % del total de *La Vanguardia*, y el 25 % de *ABC*. Si tomamos el periodo 1971-76, son el 48 % en ambos diarios, es decir, casi la mitad del total de referencias.

En España el tecnócrata por excelencia será Laureano López Rodó, y a ello alude cuando en fecha tan temprana como 1956 remita al ministro Iturmendi un plan de coordinación administrativa, que Carrero hizo suyo. Decía el futuro ministro del Plan de Desarrollo: “Francia, que ha tenido casi siempre malos gobiernos, no se ha hundido en el caos porque tiene buena Administración. Ello explica que la organización administrativa francesa haya servido de pauta para todos los países del Continente”. El implícito era que López Rodó (1990: 68) seguiría esa pauta en su proyectada reforma, de la que era pieza clave la Secretaría General Técnica del Gobierno, “organismo de coordinación administrativa, creado asimismo en Francia, que se ocupa de todo lo relativo a los funcionarios (estatuto, escuelas de formación), del servicio de documentación y del planeamiento y ejecución de los programas de ordenación económico-social”. La ordenación económica sería una emanación natural de este organismo, radicado en la Presidencia del Gobierno, y no de los ministerios económicos (Hacienda, Industria, Comercio). La propuesta era audaz por cuanto se hacía depender toda la política económica de los departamentos administrativos del Estado. Este punto provocará en 1962 la violenta ruptura del administrativista con Navarro Rubio

que aspiraba a dirigir desde el ministerio de Hacienda la planificación indicativa que suponían los planes de desarrollo.

Que el apelativo “tecnócrata” como nota insultante es en España de tardía aparición, en su sentido político de persona sin ideología, lo ponía de manifiesto Augusto Assía a comienzos de 1971 en su colaboración para *La Vanguardia* (18/III/71). “¿Estamos a punto, en este país, de inventar otro de esos anatemas sin los que, para tirárselos unos a la cara de otros, los españoles parecen estar siempre tan incómodos? ¿Vamos a hacer ahora con “tecnócrata” lo que hicimos con masón, clerical, fascista, rojo? “¿Quién es masón?: el que está delante de ti en el escalafón” ¿Es tecnócrata el que está en el puesto que yo quería?”. La inflación y los peligros de la tecnocracia parecían ser los dos peligros que amenazaban a Europa. Era sorprendente que, “excepto en los despechados labios del general De Gaulle, la palabra “tecnócrata” no ha tenido un silbido tan flagelante en Europa como le imprimen muchos españoles”. De Gaulle la aplica a extranjeros, a los que llamaba apátridas, servidores de un ideal bastardo, cuya intención era oscurecer la gloria de Francia desde edificios aerodinámicos de Bruselas. Y eso que De Gaulle había tenido con tacha de tecnócrata el ministro quizá más capaz de la Europa de posguerra, Couve de Murville. En España no ocurría lo mismo, pues el ámbito de todos ellos (tecnócratas y detractores de ella) sería el mismo Movimiento Nacional.

La planificación indicativa había nacido en Francia cuando De Gaulle encargó en 1946 a Jean Monnet la puesta en marcha de un plan de desarrollo, aunque es cuestionable que Monnet fuera algo más que un burócrata. Esto es lo que niega Jacques Billy (1963): 15 años después de arrancar el primer plan francés (1948) las fuerzas tradicionales no se habían eclipsado, y en todo el país núcleos de elites burguesas tradicionales seguían conservando íntegramente sus viejos poderes: la era de los tecnócratas y de los directores dueños del poder aún no habría llegado a Francia. Con todo, en las instituciones comunitarias de tipo económico, el grupo de los tecnócratas sí gozaría de un verdadero poder de dirección. Argumenta Billy que en la Francia de su tiempo faltaba una doctrina económica y social, es decir, la moderna versión de la *riqueza de las naciones*, que permitiera poner al servicio de los hombres y de su causa las posibilidades del “gobierno de las cosas”, propio de la tecnocracia.

J. Billy no es una excepción y durante los años cincuenta llegarán a España obras francesas relacionadas con la tecnocracia, tanto críticas como favorables, mostrando con ello la fuente de inspiración que finalmente adoptará el equipo de López Rodó (“se nos pidió imitar el modelo francés”, dirá F. Estapé). Entre los partidarios de la tecnocracia destacan G. Ardant, J. Fourastié, M. Lauré, Dubreuil, y A. Sauvy; entre los críticos R. M. Grégoire, F. Gaucher, L. Moulin, G. Lavau, y J. Meynaud. En el mundo anglosajón están, en campos opuestos, a C. Clark y A. Frisch; y a R. Aron, J. Djordjevic, y J. Ellul, como opositores. En su momento

pasaremos revista a estos autores pero por ahora baste con destacar el fuerte sesgo crítico que tendrá en nuestro país la recepción de la doctrina tecnocrática.

Una temprana muestra de esta aversión a la tecnocracia la encontramos en la conferencia que en 1946 pronunciaba en Buenos Aires el catedrático español Luis de Sosa sobre los “Caracteres culturales de nuestro tiempo”, donde reivindica los valores medievales del caballero cristiano, como opuestos al héroe clásico. Esto era especialmente necesario en un mundo en el cual “la máquina llega hasta crear una clase dirigente: los técnicos, que imponen el régimen económico y una desvalorización, del hombre medio, reducido a no pensar y no hacer por la fuerza de la tecnocracia. No hay más solución posible ante la edad que parece nacer que la revalorización del hombre y de la cultura” (*La Vanguardia*, 20/IX/46). Sosa subraya el elemento negativo del ideario tecnocrático: el desprecio de las humanidades y el arte, eclipsadas por el poder arrollador de la técnica. La cultura, o es humanística, o no es. El rechazo a todo maquinismo o tecnicismo, de resonancias totalitarias, alentaba una vuelta a los genuinos valores españoles, que se suponían de raíz humanística en la gran tradición de nuestro país.

Tres años más tarde, un experto en la obra de Joaquín Costa, el Abogado del Estado Cirilo Martín Retortillo (1949: 353-361), señala otro exceso tecnocrático: la proliferación de organismos técnicos en la Administración Pública. Martín hace un elogio de la autarquía, “un régimen de economía planificada, impuesta por las circunstancias imperantes en el mundo, que sagazmente han captado nuestros hombres de Gobierno con el nobilísimo y patriótico afán de defensa de los intereses económicos nacionales, que evite los desastres que pudieran sobrevenir con el juego libre y un tanto arbitrario de los valores económicos si se mantuviese la inhibición del poder público”. Pero en los departamentos técnicos (Obras Públicas, Industria, Comercio) observa ese paulatino deslizamiento hacia la tecnocracia que, en aras de una eficacia en la gestión “se ha excedido llegando a eliminar toda intervención de los representantes de los intereses locales, sean éstos municipales o provinciales. Se crea un estado de opinión en el mundo que suspira por un claro predominio de los técnicos que se traduzca en un sistema político, denominado tecnocracia”. Subyugados por los cantos de sirena de la empresa privada, se llega al misticismo de creer que la intervención técnica todo lo soluciona, “y se consuma la casi total eliminación de los Organismos políticos, concretamente de los Municipios y de las Diputaciones”. Martín Retortillo reivindica el papel conjunto de políticos y técnicos. “La tiranía de la técnica ha llegado en estos últimos años a límites verdaderamente excesivos. El técnico se encastilla en su técnica y su afán lo concreta a la realización más perfecta y eficiente de la obra o del servicio que tiene a su cargo, pero lo demás le trae sin cuidado. Es más obligado el que se le oiga, el que junto a los criterios técnicos operen también las razones de conveniencia social”. Sitúa el origen del problema en los tiempos de la República,

pero silencia el influjo de su admirado Costa en las políticas económicas de la Dictadura y en la composición de sus gabinetes, trufados de técnicos.

Martín Retortillo pertenecía a una escuela derivada de las políticas de *fomento* impulsadas en la España Moderna. Esta tradición española del *fomento* se centraba en el estímulo de la actividad económica mediante una amplia gama de instrumentos interventores, y tenía su primer hito en los proyectos de los arbitristas del siglo XVII y de los ilustrados del siglo XVIII, continuaba con los planteamientos administrativistas del XIX, y enlazaba finalmente con la elaboración posterior de “planes” hidráulicos, forestales, ferroviarios o de reforma agraria. El entusiasmo con que Primo de Rivera acometió estos planes de reconstrucción del tejido productivo nacional enlazaba de modo natural con las numerosas iniciativas que intentó poner en marcha la II República: eliminación del latifundismo, una nueva reforma agraria, y un ambicioso proyecto de reconstrucción de la red de caminos y carreteras.

Aunque este autor veía con suspicacia el creciente papel de la planificación indicativa, no faltaran en nuestro país los partidarios de imitar el recién estrenado plan francés de Monnet. Así el economista París Eguílaz (1947: 8) proponía “influir sobre el mercado en direcciones previamente planeadas” mediante medidas de corte keynesiano y con un horizonte temporal de quince años. Como señalan Ramos y Pires (2009: 4), París dejaba traslucir dos argumentos a favor de la planificación: la existencia de sectores clave para la economía que era preciso impulsar desde una visión de conjunto, a fin de lograr un desarrollo nacional de bases firmes; y la idea de que era necesario imponer orden en el sistema de mercado pues la competencia tendía a generar desequilibrios socioeconómicos y no daba lugar a un desenvolvimiento armónico de la economía. Ambos razonamientos se mantendrían en lo esencial como base de la retórica desarrollista de los años sesenta la hora de justificar los planes.

En los años cincuenta, el término tecnócrata se empleará profusamente en España para describir a los dirigentes de las nacientes entidades del *pool* del carbón y del acero que creara el estadista M. Schuman, con el beneplácito francés y alemán. El corresponsal de *La Vanguardia* (20/V/50) apunta el temor existente en otros países a “que esta colosal superestructura pueda degenerar en una “tecnocracia dirigista” de sentido totalitario, mientras en los países socialistas se piensa lo contrario, es decir, en el riesgo de que represente un renacimiento del capitalismo internacional”. Por su parte *Le Monde* (19/V/50) recogía la inquietud de los Estados Unidos ante un movimiento que parecía alejar a Europa de su influencia directa. Cuando se plantee poco después la creación de un ejército europeo, el argumento en contra será que “se convertiría de hecho en una tecnocracia regida por el Pentágono y dominada por los militares alemanes” (*La Vanguardia*, 6/II/53), en palabras del diputado gaullista León Noel. Y en un debate celebrado en la asamblea francesa pocos días antes de nacer el Mercado

Común, el diputado Morica afirmará: “La Europa unida no ha de estar dominada por la tecnocracia; las seis naciones han de adoptar la misma legislación en lo social antes de entrar en la segunda fase del mercado” (*La Vanguardia*, 23/I/57). Qué lejos quedaba la ilusión de primavera que había suscitado la tecnocracia de la Escuela de Columbia en los años treinta.

Sobre esto tenía mucho que decir un anti europeísta confeso, el economista Pedro Gual Villalbí, futuro director del *Consejo de Economía Nacional*, órgano creado en 1940 para asesorar al Gobierno, y que tomaba su nombre del precedente que funcionara durante la dictadura de Primo de Rivera. El CEN promovió una de las primeras cuantificaciones de la Renta Nacional española, preparada por Manuel de Torres e inspirada en la obra de Kuznets (Ramos, Pires, 2009: 7). En la conferencia (*Un problema de desarmonía en la dinámica economía: Inquietud de la técnica y vacilaciones de la economía*) que Gual impartió en la Asociación de Estudios Metalúrgicos (Barcelona) apunta el peligro de una creciente tecnocracia en los primeros pasos de la integración europea. Frente a las tesis de Scott, aseguró que “no hay correlación entre progreso técnico y progreso económico. El primero marcha demasiado deprisa y no da tiempo al segundo para asimilar los avances” (*La Vanguardia*, 16/XI/51). La tecnocracia tendría el peligro de aplicar conceptos demasiado técnicos en la universalidad de las ciencias sociales, cuando los problemas pueden ser resueltos “bajo el criterio de armonía y concordancia entre técnica y economía”. Gual reiteró el carácter técnico pero no tecnocrático del CEN, muy distinto de los consejos que, durante la República, se ensayaron para ejercer una labor de control técnico sobre el Parlamento. El CEN podría cumplir esa misión “sin caer en una tecnocracia”. No pensaba lo mismo López Rodó (1990: 498) que en 1965 se opuso a dar por buena la estimación de la renta nacional calculada por París Eguílaz, Secretario del CEN, y que difería de la elaborada por el INE.

Es curioso cómo en esos años se atribuía al exceso tecnocrático todos los males que aquejaban a la sociedad. Desde la profesión de escritor que, “como tantas cosas democráticas, es un oficio en quiebra por la naciente tecnocracia” (*La Vanguardia*, 21/I/53), hasta los males del fútbol español que el presidente del Betis F. C. achacaba a “la tecnocracia deportiva, demasiada gente que sabe de fútbol” (*Diario de Navarra*, 10/VIII/61). El futbolista alemán Günter Netzer era calificado de “gran técnico, un ejecutivo del fútbol, un tecnócrata del balón”. Tampoco eran buenos tiempos para la doctrina tecnocrática en su país de origen. Desde Washington, Augusto Assía en “Malos vientos para la inmunidad burocrática” citaba la sentencia de un juez federal declarando removibles a todos los funcionarios: “Los tecnócratas se consideraban como los cimientos de la continuidad, colocados sobre los vaivenes de la suerte, una especie de vacas sagradas de la religión estatal, instalados tras una ventanilla para ser adorados como los iconos en las hornacinas de los templos bizantinos. Desde ahora el lema de todos los funcionarios, cualesquiera que sean su origen o clase, será aquel que

el presidente Eisenhower proclamó en su primer discurso desde la Presidencia: “Servir al Estado no es un derecho, sino un privilegio al que hay que hacerse acreedor de nuevo cada día” (*La Vanguardia*, 18/XIII/53). También en las páginas de un órgano libertario como *Solidaridad Obrera* (25/XII/58) Vicente Artes describía los “tres monstruos modernos (Estatismo, Racismo, Tecnocracia) (...) Quemando etapas la tecnocracia se va situando. Los potentados de nuestra época han hecho formar a la tecnocracia una milicia disciplinada que marcha en fila india”. Remitía así a los peligros del maquinismo de Chicago, símbolo de la deshumanización de la sociedad contemporánea. Hasta la publicidad de los televisores Iberia destaca que “Su familia es una de las más distinguidas de la tecnocracia mundial: los tubos de rayos catódicos”.

6. La “teoría” de la tecnocracia en la Francia de los años 50

Pero volvamos a fijar nuestra atención en la Francia de la posguerra porque fue allí donde a partir de 1953-54 el término “tecnocracia” se aplicó por primera vez en un sentido preciso, tras años de usar peyorativamente el término tanto en Francia como en Estados Unidos y la Unión Soviética. Hay una cuestión semántica y de significado que explica el arraigo del concepto en la burocrática Francia. En francés, la palabra “tecnocracia” evoca todas las controversias sobre el futuro de la ciencia, la naturaleza del Estado y el origen del poder; su homólogo en inglés no lleva consigo tal carga de inquietudes y pasiones (es de uso poco frecuente). Depende donde se acentúe: en francés, sobre los “problemas” en su generalidad filosófica y política; en inglés, sobre los hechos, tal como están determinados por el funcionamiento de las instituciones (Grégoire, 1963: 139). En los Estados Unidos, donde se acuñó la palabra “tecnocracia” en los años veinte, no hacía referencia al experto externo para asuntos puntuales, que los americanos llaman “consultivo”; sino al respectivo papel del experto y del funcionario: por eso, pronto desapareció el concepto en América.

Similar distinción en el uso del término se puede establecer entre Inglaterra y los Países Bajos, y Francia. En los dos primeros países, los expertos deben estar preparados, pero no en el gobierno, y es corriente la autonomía entre el punto de vista del especialista, limitado y defensivo por definición, y la función del dirigente, árbitro y conciliador. En consecuencia, se prefiere ver en los puestos clave a un aficionado instruido antes que a un “experto”. En Francia se da la postura opuesta: la “política”, en el sentido tradicional del término, pierde en todos los casos. Esta actitud se dirime en beneficio de la “política” entendida como una técnica superior de los grandes hombres (los tecnócratas). Esto se explica porque en sentido etimológico, tecnocracia designa una forma utópica de gobierno, una concepción del poder: aquella en que la decisión debe emanar del que está técnicamente capacitado para establecer los supuestos. Esta concepción

toma formas variadas, desde los abogados en favor de los ministros técnicos, hasta el análisis de la sociedad dictatorial, donde, según Burnham, los *managers* se convierten en el Estado. Vista de esta forma, la tecnocracia se opone, con más o menos fuerza, a la democracia, en tanto que tiende a elegir a los responsables políticos por vías distintas del sufragio.

La palabra tecnocracia se utilizaba igualmente para evocar no tanto una concepción de poder, sino más bien una concepción sobre la dirección de los asuntos públicos: aquella que asimila la decisión política al resultado de un análisis científico, y por consiguiente, tiende a excluir los factores ideológicos, afectivos o morales. Se supone que el “experto” conoce mejor los límites de su acción que el responsable político nacido del sufragio (Grégoire, 1963: 140-3). Cuanto más lejano está el jefe, más posibilidades hay de que los recién llegados al poder se comporten como tecnócratas. Por eso la palabra “tecnocracia” debe tomarse en su acepción práctica: se trata de la “desposesión” de los “responsables políticos” en beneficio de los expertos. El “experto” es un “tecnócrata en potencia”, alguien que, apoyado en su reputación y competencia profesional podría, si las circunstancias lo exigen, intentar imponer su voluntad en campos reservados a los detentadores de un mandato político.

En todos los países, los “expertos” se encargan de la ejecución de las decisiones importantes. Pero su participación plantea un problema. Gastón Berger (1966), recordando la solución clásica –“a los hombres políticos les compete elegir los fines; a los técnicos, proponer toda la gama posible de medios, indicando de cuáles se dispone, qué precio sería necesario pagar por aquéllos que se quisiera emplear y qué consecuencias pueden esperarse”– criticaba su aparente simplicidad. Esta, no corresponde a un comportamiento real: los principios justifican los actos más que inspirarlos; de los medios utilizables dependen los fines accesibles. Y desconoce la existencia de “técnicos políticos”, desde la planificación hasta la acción sobre la opinión pública. No puede dissociarse política y técnica, lo que no significa que la primera sea, de ahora en adelante, absorbida por la segunda.

El cambio se hizo evidente cuando Jean Monnet comenzó a ser tildado de tecnócrata por pretender guiar la política económica francesa en nombre de principios técnicos: una persona no elegida democráticamente tomaba el poder en nombre de la técnica. El juicio carecía de fundamento. El Plan Monnet de 1946 no era el proyecto de un técnico ni estaba inspirado en los planes quinquenales soviéticos. La idea de modernizar el país podría habersele ocurrido a cualquier ciudadano un poco atento a los acontecimientos. Lo que nos interesa destacar ahora es el cambio de matiz. En el periodo de entreguerras el “tecnócrata” modelo era el financiero, que arbitraba los intereses privados utilizando el presupuesto de gastos o los repartos de impuestos (Sauvy, 1956: 34-5). Después de la II Guerra Mundial, la tecnocracia no es tan financiera como antes, pero resulta más

económica. Se trata, para cada cual, de obtener una parte lo más elevada posible de la renta nacional.

El proceso venía de atrás ya que desde el final de la I Guerra Mundial se asistió a la crisis de la democracia parlamentaria aunque después de 1945 se vuelva a moldes democráticos. La subsiguiente situación social y económica de los países europeos no tiene nada que ver con la de los años 20: declive de la agricultura, automatización que transforma la industria, desaparición de las antiguas clases medias. La vida económica de la nación gira en torno a unas pocas empresas, los individuos se masifican y des-individualizan. Las actividades políticas se hicieron complejas y fueron desbordadas por los aspectos económicos y sociales. Era el caldo de cultivo idóneo para los especialistas, los tecnócratas.

La participación de los expertos en la definición de los objetivos políticos se hizo indispensable en razón de la creciente complejidad de los asuntos públicos. En primer lugar, la extensión del papel del Estado. Jacques Ellul (1954) alude al momento en que el uso de las técnicas supera las posibilidades privadas y necesita la intervención del poder y de los recursos públicos. La orientación de las nuevas actividades estatales está, por definición, ligada a opciones que sólo los expertos pueden plantear. En segundo lugar, los responsables públicos disponen de nuevos medios de información y de acción: estadísticas económicas, sondeos de opinión y técnicas de propaganda. Esto implica que las “técnicas políticas” modernas no pueden ser aplicadas más que por expertos. El progreso de la ciencia hace que un número creciente de problemas pueden resolverse por métodos científicamente precisos. Para cada uno de esos problemas no existe más que una solución científicamente exacta. Según esto, la cuestión no consiste en elegir, sino más bien en constatar una evidencia. Esta constatación –que debe remplazar a la opción que corresponde a una edad pre-científica– no es accesible más que a “expertos” avezados, tanto en el razonamiento científico como en la práctica de técnicas, esencialmente matemáticas, y de los instrumentos –como las máquinas calculadoras– que permitan emplearlas a fondo (Grégoire, 1963: 148). Puede irse más lejos, y después de haber afirmado que la cibernética está en trance de remplazar a la política, en el sentido tradicional, anunciar la Era de la “máquina de gobierno”. Pero eso sería entrar en el campo de la política-ficción.

A los argumentos tradicionales (venalidad de los políticos, incompetencia, y permeabilidad ante los intereses particulares) pueden añadirse otros basados en la negación de la validez de las elecciones como sistema de acceso al poder: así fue utilizado por la propaganda franquista para justificar la irrupción tecnocrática. Frente a estos se esgrimieron otros que defendían la existencia de una función política, distinta de la técnica: los actos humanos no son cuantificables; para que un problema deba ser planteado no es suficiente el que se pueda resolver científicamente; plantear un problema significa hacer ya una elección: plantear la relación del Estado con la enseñanza privada es optar por la existencia de tal

enseñanza; la “despolitización” de los problemas es o un mito o una operación política. La búsqueda de un equilibrio que tenga en cuenta el progreso de las ciencias y de las técnicas no podía ser emprendida ni por los políticos puros ni por los tecnócratas. Aunque Ellul se decante por los primeros, llega a afirmar que “sólo la acción del político retrasa verdaderamente la transformación del Estado, un aparato exclusivamente técnico”, una clara apuesta por la racionalidad tecnocrática.

Compartir el poder de decisión implica, por tanto, la subordinación de los segundos a los primeros. Sólo la aplicación de las medidas es a escala técnica, debiendo estar fijadas las disposiciones de principio a nivel político (Grégoire, 1963: 151-3). Lo cual plantea otro problema: el de la distancia que los “responsables políticos” deben guardar respecto de todo asunto no fundamental, y por consiguiente, de la necesidad que tienen de dejar en manos de los “expertos” la regulación de esas cuestiones. Las “cuestiones fundamentales” caen en el campo del político pero, una vez tomadas, pueden pasar a los técnicos. Así, por ejemplo, la implantación de las grandes obras públicas una vez que se han decidido las líneas clave de un plan de desarrollo económico. La decisión sobre los planes de desarrollo es, argumenta López Rodó, asunto político que debe tomar el Gobierno, pero no la concreción y la realización práctica, que los técnicos saben realizar mucho mejor. Pero deja sin resolver el gran problema de fondo: ¿ante quién rinde cuentas el técnico?, ¿puede sentirse, de alguna manera, inmune a las “maniobras” políticas? La tentación es muy fuerte y entre 1964 y 1973 producirá conflictos de hondo calado en España entre políticos y tecnócratas.

Esta disyuntiva entre política o tecnocracia ya la había apuntado Frisch (1954) que ve la tecnocracia como la consecuencia necesaria de la estructura de la sociedad occidental. No se trata de construir una tecnocracia, sino de adoptarla como el modo más adecuado de resolver la necesidad de la época, muy compleja y orientada hacia la administración de los intereses de las masas. La mejora en las condiciones de vida de la gente no significa retraso espiritual ni cultural, al contrario, las “cosas”, los productos técnicos, civilizan, y civilizar es un verbo que no se puede interpretar exactamente si no se conjuga a la vez el de *tecnificar*. La tecnocracia es, pues, una necesidad. Un funcionalismo en el que las constantes y las variables se adecuan de un modo perfecto para el logro del mayor rendimiento con el esfuerzo compatible con la felicidad individual y colectiva. Esto permite la superación de las ideologías derivadas del capitalismo, bien por adhesión, bien por oposición. El tecnócrata aparece, por consiguiente, como un superador de las ideologías. Su trabajo, perfecto, acabado, sostenido por el convencimiento de que trabajar más y mejor en la organización de los esfuerzos conjuntos es ya un bien en sí, le satisface de un modo tan pleno que hace de la propia actividad un ideal. La idea recuerda el “sentido reverencial del trabajo” de Ramiro de Maeztu, aunque en versión laica. Esta inevitabilidad del recurso a la

tecnocracia es uno de los argumentos que exaspera a críticos de esa ideología técnica como Fraga, Gómez de Aranda o Vallet de Goytisolo ¿Quién ha dado tal poder a esos nuevos hombres?, se preguntarán ¿En virtud de qué dogma de la eficiencia pretender suplantar a los hombres elegidos por el pueblo? Aunque esto era incierto en la España de los 60, no por ello dejaba sin resolver la pregunta. Es difícil que esta fórmula nueva no encuentre la oposición de la política entendida como expresión de los intereses de grupo, de ideologías caducas o de viejas fórmulas. Y contra ese carácter inevitable se rebelarán.

Laureano López Rodó llevará hasta sus últimas consecuencias esta conversión de la política en una administración eficiente, llegando a la disyuntiva: política o efectividad. El trabajo de unos eficientes tecnócratas persuadidos de que trabajan por el bien de la humanidad, es quizá el único medio de superar el pasado ideológico y político (liberal) que nos abrumba. Pero entre funcionarios y políticos existe una oposición latente: unos se preocupan de la eficacia, otros de las relaciones públicas (Aron, 1954: 469). Es difícil el compromiso entre el interés de los grupos privados y el interés nacional. Los funcionarios sueñan con verse libres de los políticos e instaurar una tecnocracia. Los tecnócratas creen conocer los objetivos que hay que realizar y, en consecuencia, están convencidos de que el día que ellos pudieran manejar el poder, se haría lo mejor. Olvidan que toda sociedad humana implica un principio de legitimidad (la racionalidad burocrática no es un principio). Olvidan, además, que no se puede elegir un modo de gobierno sin contar con el deseo de los hombres. Los políticos, en cambio, aceptan el no tener siempre razón y enfrentarse con opiniones contrarias. Pero el caso de nuestro administrativista se aleja del prototipo que presenta Aron: el político-tecnócrata siempre tiene razón, porque sus juicios se refieren a hechos contrastables, no a opiniones. La deriva autoritaria es evidente.

Contra tan grave peligro previene Frisch: la conversión de la tecnocracia en un neo-fascismo. Es un hecho verificado que las dictaduras tienden a aparecer como tecnocracias y a usar el slogan de la eficiencia como máscara. La tecnocracia bien entendida es una administración eficiente también en el plano de los valores superiores: el tecnócrata no es un burócrata ciego y desalmado, sino un espíritu que ha encontrado en el orden del trabajo y de la eficacia, el camino para la liberación hacia valores superiores. La profunda aversión de los europeos hacia las dictaduras, es resultado del convencimiento de que la tecnocracia puede ser un modo racional de evitar tal peligro. Aunque Molitor apunta que resulta difícil saber si ciertos regímenes dictatoriales favorecen el crecimiento de la tecnocracia. Puede decirse que hasta ahora en ninguno de los regímenes contemporáneos la tecnocracia ha “ocupado” el poder en las instituciones de forma preponderante. La política se defiende, y se defiende bien.

Es problema espinoso el de la organización política de la tecnocracia, erigida en poder propio. La democracia, por haber querido ser económica y social

no sería en breve más que una pantalla que cubre a la tecnocracia. Ya P. M. Grégoire (1954) había denunciado el oscurantismo del estilo administrativo. Gaucher (1959: 167-185) aborda este problema que acuciaba a la precaria República francesa. Los gobiernos inestables o un Parlamento incompetente tienen muchas dificultades para imponerse a esta tecnocracia en potencia que agrupa a los grandes especialistas del Estado y a los *managers*. Un Estado autoritario no está a salvo de las consecuencias de esta evolución. Aunque la España de Franco no tenía que ver con Italia, conviene recordar que Mussolini no pudo controlar su Estado Mayor militar y resultó decepcionado por él. Porque la tecnocracia dejada sin directrices y sin control tiende a considerar los instrumentos de que dispone como un fin y no como un medio. Así nacieron los poderes feudales, más de la debilidad del soberano que de la ambición de sus señores. Se hace necesario alzar una autoridad superior por encima de los tecnócratas; y es preciso llevarlos a colaborar voluntariamente, integrándolos en una corriente política. La sociedad burguesa europea necesitaba un choque que le hiciera comprender el imperativo de la primacía de lo político. De otra manera, bajo la máscara de la democracia clásica, abandonaría el poder real a los tecnócratas del Estado económico. Estos sólo tendrían dificultades con los demagogos que harían correr el riesgo de desequilibrar la economía con el pretexto de perfeccionar el Estado-Providencia. Urgía imponer el “¡política primero!”.

7. La “práctica” tecnocrática francesa

Hemos acudido hasta ahora sobre todo a autores franceses ya que es en ese país donde primero se desarrolla un corpus doctrinal sobre la nueva tecnocracia. Será en el libro de Maurice Duverger, *La V República y el régimen presidencial* (1961) donde aparece la justificación del poder fuerte que abre las puertas a la tecnocracia. En lo que parece una justificación del régimen del general De Gaulle, afirma la necesidad técnica de un ejecutivo fuerte para asegurar la gestión de un aparato de producción mixto público y privado. Por flexible y por “indicativa” que fuere, la planificación francesa exigía un gobierno firme y estable. “El ejecutivo sin poder ni prestigio en el que sueñan los republicanos tradicionales hace el juego de las fuerzas económicas privadas o de las camarillas tecnocráticas. La tecnocracia que algunos denuncian es el resultado de la carencia de ejecutivo”. Hasta entonces, la orientación global de la economía y la gestión del sector público eran aseguradas por altos funcionarios que tomaban las decisiones en lugar del Estado. Mientras estos funcionarios, por sus orígenes o alianzas estén vinculados a los intereses privados, tal suplencia del decadente gobierno no levantará oposición alguna por parte de los medios de negocios y de la prensa que de éstos depende. Pero si se liberan de aquellas ataduras y obran en interés general, se denuncia su acción nefasta. Para Duverger (1961: 82-3) el apodo de “tecnócrata” era un insulto de los intereses privados cuando los grandes técnicos públicos dirigían los servicios y las empresas del Estado en provecho de la colectividad; los técnicos de la industria y del comercio que gestionan firmas privadas no son denunciados como tecnócratas; ni los técnicos públicos cuando son dóciles a las presiones de las fuerzas capitalistas. Evidentemente, esta asunción por los altos funcionarios de los poderes gubernamentales, cuyos titulares políticos son demasiado débiles para ejercer, no se hace sin peligro. Pero es inevitable, en el siglo XX, en los Estados de economía mixta sólo se podía escoger entre un ejecutivo fuerte democrático y un ejecutivo fuerte tecnocrático. La ausencia del primero entraña necesariamente la aparición del segundo.

La práctica de confiar a un grupo de expertos independientes la realización de un proyecto de reforma es antigua en Francia. Parece que esta práctica se generalizó bajo la influencia de organismos internacionales, donde los expertos se eligen generalmente de tal forma que su prestigio personal garantiza la aceptación de sus recomendaciones por la opinión pública. Este es el límite extremo de lo que puede considerarse como cooperación entre “expertos” y “responsables políticos”: a menos que se puedan rechazar las propuestas de los primeros, los segundos corren peligro de ser despojados de hecho de sus poderes y hace su aparición el “peligro tecnocrático”.

Esta deriva tecnocrática se había consolidado en los años cincuenta, de la mano del poujadismo, la corriente social y política que impulsada por Pierre Poujade, revolucionó al país y contribuyó al hundimiento de la IV República y al acceso al poder del general De Gaulle. Todo comenzó en 1953, como una rebelión anti-fiscalista de los trabajadores independientes, los artesanos y comerciantes, la Francia “de abajo”, contra las “200 familias” (Souillac, 2007). Poujade se puso al frente de un movimiento de protesta de quienes veían con inquietud un país en el que ingenieros y técnicos (los tecnócratas) desplazaban a mecánicos y soldados, en la que los supermercados hundían los pequeños comercios. Su llamada al boicot fiscal se mezclaba con un discurso patriótico, autárquico y antiparlamentario, en nombre de la “independencia apolítica”. En 1955, en media Francia era imposible efectuar un control fiscal debido al respaldo popular a las tesis de Poujade. En 1956, Poujade presentó una formación a las elecciones legislativas y se hizo con el 12% de los votos: 53 escaños, y 2 millones y medio de sufragios. La clase política tradicional se sintió asustada, descubrió que el orador al que tachaban de payaso era más escuchado que los líderes de la decena de partidos que componían el inestable mosaico de la IV República. Entre esos 53 diputados figuraba un joven Jean-Marie Le Pen que pronto se enroló como paracaidista voluntario en Argelia. En 1958, las legislativas que sucedieron al golpe de Estado que llevó a De Gaulle al poder, fueron el canto de cisne del poujadismo. Sólo obtuvo 600.000 votos. De Gaulle asumió parte de su discurso al potenciar el presidencialismo por encima del parlamentarismo, y enterró a Poujade al modernizar el Estado y apoyarse en las clases emergentes en vez de hacerlo en la Francia rural o de pequeños comerciantes que se desvanecía.

Lo que De Gaulle no pudo enterrar es el sentido que cargó desde entonces la palabra tecnócrata. En francés, “tecnócrata” es a “técnico” lo que “burócrata” es a “funcionario”. La palabra tecnócrata en el lenguaje vulgar corresponde a la imagen del técnico vista por un poujadista. Un especialista es considerado como “tecnócrata” cuando se le quiere denigrar. Podría sorprender el carácter despectivo de la palabra tecnócrata en un país donde se tiene tanta fe en los especialistas y en los técnicos. Pero se trataba de una expresión puramente idiomática que no debe tomarse en cuenta para definir la opinión general sobre la “tecnocracia” (Vedel, 1963: 175). Juan Aparicio denunció que “la tecnocracia ha

invadido Francia, no clandestinamente como la sinarquía, sino paladinamente por medio de esos cerebros racionalizados que son los pies y las manos del general de Gaulle, ocupando los puestos de confianza y de choque”. Frente a una situación en apariencia liberal, aunque tiene la dureza del cartesianismo, se levantó gente como Pujade. En “Cursos contra tecnócratas” (*La Vanguardia*, 6/XI/59) previene que “los servidores del Estado han ido creciendo y aumentando su intervención irresponsable y sus exigencias. Los covachuelistas de antaño, con el riesgo luego de quedar cesantes, se afianzaron en la burocracia y estos burócratas obtuvieron una postura ventajosa al implantarse la tecnocracia”. La tecnocracia fracasó estrepitosamente queriendo resolver matemáticamente el problema de Argelia.

La destitución del ministro Pinay por De Gaulle abrió así un intenso debate sobre las relaciones entre economistas y políticos en la vida pública. Otros gobiernos habían tomado medidas similares y esto daba pie a un artículo de Manuel Jiménez de Parga sobre la “Primacía de la política” (*La Vanguardia*, 16/I/60). Algunos comentaristas se apoyaban en estos hechos para proclamar la supeditación de la política a la economía, y para pedir la entrada de técnicos económicos en los altos organismos de los Estados. Era algo más que remozar las tesis marxistas acerca de la determinación de la política por la economía: los expertos, que habían invadido todos los terrenos, eran alentados a asaltar el castillo de los políticos. Jiménez de Parga publicó un ciclo de artículos decididamente críticos con la tecnocracia, una corriente que encontraba acogida favorable en la gente. Por un lado, el político profesional era un personaje poco estimado. Por otro, los Estados aumentaban día a día la esfera de sus asuntos interviniendo en materias que decenios atrás quedaban en manos de los particulares. Por una causa y otra, por la infravaloración del político y por la creciente complejidad de la vida estatal, parecía obligado que las personas conocedoras de las empresas privadas, los hombres de negocios y los especialistas asumieran también la dirección de las cosas públicas. La opinión pública aplaudía este cambio que postergaba a los políticos. “El técnico debe no sólo informar, sino gobernar” ¿Será bueno admitir, sin más, ese postulado?, se pregunta Jiménez de Parga.

“Los especialistas en ramas concretas del saber y de la actividad humana son – salvo excepciones – hombres inflexibles, dogmáticos, inevitablemente aprisionados tras las rejas lógicas de su propio razonamiento. Juegan con esquemas y con ideas; apartan de su pensamiento otras consideraciones. El político, en cambio, el buen político, es más comprensivo. Abarca con su mirada las vertientes psicológicas e intuye las consecuencias de un determinado programa en el desarrollo general del país. El político tal vez no sepa seguir las deducciones matemáticas del experto pero llega antes que él a entrever la solución”.

El articulista recordaba la inflación generada en 1950 a raíz de la guerra de Corea y cómo los economistas aconsejaron correctamente volver al control de

precios y de salarios, con cartillas de racionamiento. El político receptor del informe advirtió las ventajas económicas del sistema, pero también sus inconvenientes: el mal efecto en la opinión pública de la vuelta a un sistema de control de precios que evocaba los años del hambre. “El político pesa en la balanza de su intuición y de su buen sentido los pros económicos y los contras políticos. Y decide. Contra el postulado de los tecnócratas hay que reivindicar, pues, la primacía de la política”. Jiménez de Parga postula que la ciencia económica no puede formular conclusiones indiscutibles: “todo el mundo recuerda el fracaso de los técnicos de Harvard en vísperas de la gran crisis norteamericana de 1929” (y todo el mundo recuerda la incapacidad de los técnicos de prever la recesión iniciada en 2008).

Otros muchos expertos fracasaron en sus gestiones públicas, pero Antoine Pinay era un caso especial porque el ministro francés destituido era, además de un técnico de la economía, un destacado político. Quizá por la connatural intransigencia de todo especialista que haya salido del Gobierno. Como ejemplos franceses se pueden citar los del plan de rectificación económica y financiera establecido a petición del Gobierno a finales de 1958 por M. Jacques Rueff, y más tarde, el informe emitido por un Comité presidido por el mismo experto, sobre las medidas para impulsar el desarrollo económico. En este caso, el gobierno francés se cubrió las espaldas dejando muy claro que no se consideraba en ninguna forma obligado por sus conclusiones.

Esto se entiende porque la tecnocracia no hace su aparición hasta el momento en que los expertos acceden a la función que normalmente les debe ser atribuida en la dirección de los asuntos públicos. Pero es un hecho, en la Francia de los años 50, la creciente influencia de los técnicos en las decisiones políticas, así como la necesidad que sentían los “responsables políticos” de concentrar sus esfuerzos en las “opciones fundamentales”. Por otra parte, el hecho de elegir los “responsables políticos” en distintas condiciones de las que resultan del juego democrático, denota necesariamente una tendencia tecnocrática: no parece peor nombrar técnicos que no sean de los que ocupan puestos ministeriales. Deberíamos ser prudentes en la denuncia del peligro tecnocrático.

La desposesión de los “responsables políticos” no se podría establecer más que examinando caso por caso el efectivo papel desempeñado por los “expertos” en la adopción de decisiones fundamentales. Vedel proporciona indicaciones interesantes a este respecto: “La planificación [en Francia] ha sido el trabajo de un equipo: las decisiones importantes en materia económica y financiera (a menudo oficialmente imputadas a los políticos) y las decisiones en materia atómica que se han tomado en la IV República han tenido origen técnico”. Aunque no distingue claramente entre el origen de los proyectos –es decir, la iniciativa de los “expertos” que proponen a los gobernantes las medidas a tomar– y el procedimiento de decisión. Vedel anota una serie de opciones capitales que

se hicieron en Francia tras la II Guerra Mundial, y nos desafía a evaluar en cada caso el peso de las presiones ejercidas por los “expertos” sobre los “políticos”. La lista de potenciales pesquisas incluía: la suspensión de la política de austeridad en 1944-45; las Constituciones de 1946 y de 1958; el Plan de Seguridad Social; el Plan Monnet; la conclusión del Pacto Atlántico; el pool carbón-acero y los tratados del Mercado Común y del EURATOM; las leyes sobre la enseñanza privada de la IV y V Repúblicas (Grégoire, 1963: 157).

Un ejemplo característico es el acuerdo del Mercado Común, proyecto que encontró una resistencia muy fuerte en numerosos medios técnicos. Si salió adelante fue debido a la excelente organización del *lobby* europeo en el plano ideológico y político y de la utilización de grupos de interés en beneficio del Mercado Común (un dato decisivo vital fueron las organizaciones agrícolas). En declaraciones a la prensa decía De Gaulle que “hemos solicitado activamente que la Unión Europea saliese del campo de la ideología y de la tecnocracia, para situarla en el campo de la realidad, es decir, de la política. Por ejemplo, no consentimos desarrollar un Mercado Común que no incluya la agricultura, en el cual Francia, que es un país agrícola e industrial, hubiese visto desorganizado de arriba abajo su equilibrio económico, social y financiero. Por ello, insistimos en que se rectificase la grave misión que a este respecto figuraba en el Tratado de Roma” (*EFE*, 6/II/62), pero los Organismos técnicos eran lo suficientemente poderosos para exigir un “derecho de peaje”. Así, el Tratado del EURATOM se hizo realidad gracias a ciertos “tributos” (sobre todo, la decisión de fabricar la bomba atómica).

Este ensanchamiento del campo de acción de los técnicos era consecuencia del desprestigio en que había caído la IV República y repercutió sobre el “gobierno de aficionados” que implica el parlamentarismo. Se extendió la idea de que los “políticos” no tienen nada que ver en las cuestiones “técnicas” (economía, finanzas, Ejército), y que existe una técnica de la política, reservada a las personas “informadas”. La afición a lo secreto que caracterizó el régimen político francés ha reforzado la idea de que la política sería una *súper-técnica*, descansando sobre el acceso a fuentes de información secretas. Mientras que, bajo la IV República, los proyectos cuidadosamente preparados estaban sujetos al capricho o al interés partidista, bajo la V República lo que se presentaba al Gobierno eran “planes”, “diseños”, con fuerza coercitiva. Los políticos entregaron el relevo a los técnicos.

En este sentido, la política, tomada en el sentido tradicional de su expresión, lleva todas las de perder. Se vacía por un extremo en provecho de la “política” concebida como una técnica superior y secreta de los grandes sabios. Se vacía por otro extremo en provecho de la “técnica” (Vedel, 1963: 174). A los franceses siempre les ha impresionado favorablemente la “tecnicidad” de los gobernantes. El nombramiento de un prefecto para Interior, de un médico para Sanidad, etc., es siempre bien acogido. No hay nada que extrañe más al francés

medio que la idea de una dirección “política”, de una administración, del cometido de un ministro que no sea técnico. Todavía es más extraño para ellos la realidad frecuentemente comprobada de que las reformas rara vez son obra de ministros “técnicos”.

Años después se preguntará Josep Meliá: “¿Puede llamarse tecnocracia, con un mínimo de rigor semántico, a un sistema de distribución de las responsabilidades públicas con arreglo al cual resulta que un ingeniero naval gobierna la diplomacia, un diplomático administra las obras públicas, un ingeniero de Caminos define la política industrial y un catedrático de Derecho Administrativo programa el desarrollo económico?” (*Nuevo Diario*, 28/IV/70). Y concluye que, cuando menos, se trataría de una muy peculiar forma de tecnocracia.

La inhibición de los “políticos” en favor de los “expertos” se refiere a materias que son de vital importancia, bien por su carácter marcadamente técnico, bien por la necesidad del secreto. Los ejemplos más sorprendentes se refieren a la política de desarrollo económico, a la gestión de empresas nacionalizadas, y a la orientación de la investigación científica. El desarrollo económico es materia en donde las decisiones fundamentales se dejan con gusto a los “expertos”. En muchos países la política monetaria y crediticia depende tradicionalmente de los Bancos centrales, con cierta independencia respecto al poder político. Ocurría así en Inglaterra y en Francia, y en España a partir de los años 60.

Los órganos de planificación funcionaron al margen del aparato político-administrativo. Los dos primeros planes franceses de modernización se concibieron no sólo independientemente de todo control parlamentario, sino, aparentemente, con independencia de toda directriz gubernamental. Ni siquiera la presentación del tercer plan a la aprobación del Parlamento tuvo un verdadero alcance político, fue una simple formalidad. Además, como ha escrito un jurista francés: “Existe una contradicción entre el concepto clásico de la ley y la significación política y económica de la planificación que es hacer de los planes súper leyes” (Rivero, 1950). Moulin va más lejos cuando afirma: “Toda forma de planificación económica –si es “flexible”– sería la tecnocracia misma, si pudiera ser compensada con ciertas formas de tecnocracia industrial”.

Es cosa probada la inhibición de los políticos franceses en favor de los técnicos, con formas variadas. El uso por los técnicos de los poderes excepcionales conferidos a los gobernantes en materia de legislación (el gobierno por decreto que excluía un examen por parte de los políticos). La influencia de los gabinetes ministeriales que cada día se parecían más a estados mayores técnicos (en España tenemos las comisiones delegadas). La resistencia de los técnicos que no esperan a las directrices gubernamentales y presentan a los políticos hechos consumados; esgrimir la imposibilidad técnica de hacer algo, que solo el técnico puede juzgar (Grégoire, 1963: 162). Según Vedel las

condiciones que prevalecían en Francia eran “favorables a la constitución de una tecnocracia”. La Escuela Nacional de Administración que goza de un casi monopolio en cuanto a la formación de altos funcionarios, ¿tiende a formar tecnócratas en potencia? Todas (incluso la de Alcalá) intentan, a causa de la evolución técnica, organizar sistemáticamente la formación de sus funcionarios.

En países como Francia y España, los funcionarios se sienten más servidores del “soberano” que agentes del poder público. Consideran su actuación más como un oficio que como profesión, y suelen confundir el interés general con el propio. En la medida en que la función pública francesa está impregnada de este espíritu es permeable a las tentaciones tecnocráticas. A pesar de la similitud institucional, el servicio civil británico no ha conocido estas reacciones de tipo psicológico, por la cual no busca erigirse en juez del bien común (Grégoire, 1963: 167-168). El estudio de los “problemas de la tecnocracia” conduce a establecer una distinción esencial: la del respectivo papel que, en los estados modernos *deben* tener los “expertos” y los que detentan el poder político. Sobre este punto, ¿nos basta con la experiencia de los países socialistas? Desde luego, la de las democracias occidentales no lo es.

Otros autores introducen nuevas aristas del problema tecnocrático. Así para B. Tabbah (1959) el problema de la técnica es que, vaciada de alma, indiferente, se constituya en una forma de idolatría: la tecnocracia sería, entonces, por excelencia, el mal del siglo XX. Tras examinar una serie de cuestiones sobre las relaciones entre técnica y ciencia, técnica y cultura, concluye con la demanda de un humanismo científico y la necesidad de impregnar la civilización material de una cultura humana.

En los años 1960 y hasta la crisis energética de 1973 –la época de las planificaciones globales– la influencia de los tecnócratas se extiende junto a la expansión del aparato estatal tras la creación de nuevos organismos como las Oficinas de Planificación y la estructura administrativa que surgió a raíz de las nacionalizaciones a fines de los sesenta. En ese período, los tecnócratas también funcionan como ideólogos de las reformas de corte desarrollista a través de las universidades, defendiendo el “estructuralismo” que apoyaba una activa acción del Estado. Este fenómeno afectó por igual a los países occidentales y al bloque socialista. En diciembre de 1957, organizado por la UNESCO, se celebró en Múnich una reunión internacional de expertos en ciencia política. La base de la discusión fue un informe de Jean Meynaud, el gran experto en la tecnocracia, sobre las consecuencias del progreso técnico en los sistemas políticos. Al año siguiente en 1958, con cierto mimetismo, se organizó en Varsovia el “Coloquio sobre el concepto de legalidad en los países socialistas”, que llegó a la conclusión de que, a pesar de aparentes diferencias, las civilizaciones del Este y del Oeste sufrían la misma enfermedad: burocracia, tecnocracia, intervencionismo. La

relación entre técnica y política tendrá ocupados a los sociólogos tres lustros. Al querer hacerse científica, la sociología quería también ser práctica; así, pues, por una parte, no se hacía la sociología de la tecnocracia, y por otra, se quería, mediante la sociología, preparar a los tecnócratas (Gurvitch, 1959: 168). La sociología se encontraba en una encrucijada y su suerte como ciencia dependió de su capacidad para resistir a su propia tecnocratización.

En un alarde de capacidad de trabajo, J. Meynaud escribió 26 obras entre 1958 y 1964. Se le ha criticado por su rapidez, el estilo –escribe sin efectos ni búsquedas premiosas –, pero de hecho elige temas difíciles que no sólo sintetiza, sino alumbrando nuevas orientaciones, y su expresión es siempre directa, clara, adaptada al propósito. No cede a la tentación del “compromiso intelectual”. Acusa a la tecnocracia de conservadora: los grupos de presión han alentado la tendencia de ciertos partidos a “aguar” la acción política, y esto ha favorecido a los conservadores. Desconfía de las organizaciones profesionales, afirmando la preeminencia del poder político. El delirio de los tecnócratas le hizo “sentir cierta simpatía hacia los políticos, lo que ha hecho pensar en la supervivencia de los aparatos políticos de la democracia”. La palabra *combate* es clave en él y martillea con ella en las páginas de *La tecnocracia, ¿mito o realidad?* y en *La rebelión campesina*. Meynaud aboga por la vigencia de apelar al “combate político”, a plegarse a una regla de legitimidad. Sus obras podrían dedicarse a Diderot.

J. Djordjevic (1960) es el publicista de las ideas –y temores – de Meynaud sobre la tecnocracia. Se remonta a la noción de técnica que tenían los griegos, pero lamenta que haya sido engullida en el campo de la política, pudiendo decir que la técnica es una política y la política una técnica. La política sería la ideología y la fuerza motriz de las actividades humanas, la técnica y las relaciones institucionalizadas entre los hombres. Por tanto, las relaciones entre política y técnica son el problema central de una sociedad humana antinómica, de tal forma que, si se da la primacía a la política, caemos en un dirigismo caprichoso, inestable, pero si damos prioridad a la técnica, nos encontraremos en el otro extremo, es decir, en la justificación de una tecnocracia, de la burocracia y del gobierno de los expertos; y caemos en un absolutismo, autocracia, dictadura o en cualquier otro régimen arbitrario.

La virtud está en el punto medio, una democracia verdadera no es sino la instauración de un equilibrio adecuado entre política y técnica. De esta forma, concebiremos al sistema político no solamente como un problema de organización del poder, sino como un conjunto de factores y relaciones políticas, asociaciones, grupos de interés, órganos jurisdiccionales, derechos de ciudadanos, opinión pública, etc. Por otra parte, tampoco se puede justificar las teorías tecnocráticas en política simplemente a causa del progreso de la técnica moderna. Por consiguiente, establecida la necesidad de apartarse de los extremos, la única conclusión posible es la de aceptar la necesidad de una mayor

colaboración y coordinación entre técnica y política, ya que ni ésta sería posible sin aquélla ni aquélla sin ésta. Queda así establecido el gran principio rector de Meynaud, el de una justa compenetración entre técnicos y políticos, pero siempre mediada por la primacía del saber político sobre el técnico.

En continuidad con Múnich (1957) y Varsovia (1958) tuvo lugar en París (1961) el V Congreso Mundial de Ciencia Política. A pesar de los avances, seguía en pie el problema del significado de las palabras: ¿Qué matiz separa al experto del técnico o el especialista, al director del *manager* y el administrador, el sabio respecto al erudito, el intelectual al universitario? ¿Qué es, hablando con propiedad, la tecnocracia? Sin aventurarnos en este laberinto lingüístico, nos atenemos a las definiciones de R. M. Grégoire en su documento base del congreso: “Especialista es el hombre que poseyendo, por formación o por experiencia, conocimientos y métodos de pensar adecuados para proponer y resolver cuestiones determinadas, es llamado a título de tal para intervenir en la dirección de los asuntos públicos”. El otro referente del congreso de París fue Leo Moulin, profesor de Historia y Sociología en la Universidad de Bruselas, masón y prestigioso intelectual con decenas de libros a sus espaldas, Moulin (1962: 91-92) inspiró la definición propuesta por el grupo belga que entendía por tecnocracia el “sistema de gobierno que cree conveniente confiar la dirección de los medios de producción y, si fuera necesario, el gobierno del Estado a técnicos, ingenieros, hombres de ciencia, economistas, etc.”.

Tanto Grégoire como Moulin (1962: 94) reconocen el creciente papel de los expertos en la vida pública en todas las sociedades, liberales o totalitarias, e irrevocable porque está ligado a la naturaleza de las cosas. Las causas de esa evolución tenían que ver con la creciente racionalización económica de los asuntos públicos, que tendía a eliminar el empirismo popular. Moulin afirma que “toda planificación económica, por muy *flexible* que sea, es tecnocrática, incluso si pudiera ser compensada por ciertas formas de democracia industrial”. Como no existen hechos químicamente puros tampoco existen situaciones tales, cuya solución, contrariamente a la cómoda ilusión tecnocrática, pueda ser dictada por los hechos “independientemente de toda verdadera elección política”, es decir, en último término, independientemente de toda libertad. En el fondo, actuando así se abandona al hombre, igual que un objeto, al imperialismo de las cosas. De ahí el error fundamental de las aproximaciones puramente técnicas que caen en el mismo error que muchos economistas de considerar que hay una solución única a los problemas, siguiendo el método de las matemáticas, e ignorando que intervienen multitud de factores socio-religiosos, etnográficos y políticos.

Con esas premisas, se deduce que el grado de competencia técnica del político tiene escasa importancia, y hace falta ser ingenuo para querer resolver, como algunos esperan, los problemas que suscita la dialéctica del político y del técnico, especializando la política y politizando la técnica ¡hasta que se

encuentren! Lo importante no es que el legislador sea en alguna materia o de alguna forma un técnico; lo importante es que sea un político perspicaz. De hecho, existen situaciones en la vida social en que no compensa utilizar la lucidez del especialista, en que la sociedad entera y aun los mismos especialistas necesitan su ración de mentiras e ilusiones, como bien ha ilustrado A. Sauvy.

Provistos de más espíritu geométrico que de espíritu de finura, seguros de sí mismos, los ministros técnicos se han mostrado a veces políticamente incapaces de controlar su administración. Su situación ha sido siempre ambigua. Solo un miope cree que un “calculador” vale más que un “político”, pues el calculador puede ser interesado, lo es casi por naturaleza, mientras que el político puede tener habilidad para aprender nuevos oficios. Desde el momento en que los técnicos han gustado del poder, están tan inclinados como los que no lo son a politizarse (y a veces en el peor sentido de la expresión). Moulin (1962: 107-8) denuncia que el especialista no es nunca neutro ni apolítico. Es ésta una ilusión muy extendida en los medios técnicos, pero que no resiste la crítica. Pues en realidad todo especialista ha optado, por una filosofía política que se inserta en su visión del mundo, por un método político que casi siempre responde al espíritu racionalista, o empírico, o experimental, de su propia disciplina.

Esto es lo que no parece entender López Rodó cuando evoca unas palabras de Salvador Pániker (1988: 259): “Lo que no comprendo es por qué a López Rodó le llamaban tecnócrata. Él era, ante todo, un político. Uno de los hombres más espontáneamente políticos que he conocido, alguien para quien hacer política era casi tan natural como respirar. E hizo mucha política, porque tenía una enorme capacidad organizadora, porque no descuidaba ningún detalle, porque trabajaba como un condenado, porque creía de verdad en lo que estaba haciendo”. No entiende que López Rodó había optado por una cierta filosofía política con la visión del mundo que respondía a su formación administrativista. Y eso, lo quiera o no el Comisario del Plan de Desarrollo, es tecnocracia.

Los especialistas están politizados, lo quieran o no. Basta observarlos en períodos de tensión social, huelgas o turbulencias políticas. Se constata entonces hasta qué punto su apoliticismo no era sino una máscara que escondía una adhesión tácita o inconsciente a cierta visión política de las cosas. Hasta qué punto las pasiones más elementales afloran en esos hombres que se dicen científicos y objetivos, y les inducen a tomar partido con extrema subjetividad, fuera de toda particular competencia y sin tener el cuidado de documentarse. El tecnócrata está siempre más o menos politizado, afirma Moulin. Sólo su ignorancia de las exigencias de la cosa pública, que confunde con la “política”, y su hostilidad latente respecto a los políticos, que encarnan a sus ojos un tipo humano situado en los antípodas del que el mismo es, quiere y cree ser, pueden hacerle pensar que es apolítico. De hecho, el apoliticismo, la voluntad de despolitizar los problemas del Estado, son a menudo torpes manifestaciones de una actitud política bien

definida, subyacente al tecnicismo de los propósitos y del trabajo profesionales, actitud que consiste en confundir los compromisos de la vida política (con frecuencia lamentables, hay que reconocerlo) con las altas exigencias del gobierno de los hombres.

Este tipo híbrido sueña con acumular las cualidades del especialista y del político. Competente en grado suficiente como para parecer indispensable, podría ser no obstante lo bastante independiente para oponerse, llegado el caso, a ciertas opciones políticas. Demasiado comprometido por estar en la corriente de pensamiento del partido que le hace ser elegido, se mostraría demasiado apolítico para tener un verdadero sentido del Estado. Tantas exigencias contradictorias no facilitan la aparición de personas así. Pero suponiendo que existiese, ¿se puede creer que en un régimen politizado como el nuestro este especialista nombrado por un partido a causa de los servicios prestados en ese partido, podría jamás, puesto al servicio de una política de la que el partido hubiese definido las razones, los objetivos y los medios, ser otra cosa sino representante del partido? ¿Puede creerse que, nombrado gracias al partido, estaría en condiciones de mantener las distancias respecto a él, de conservar su libertad de espíritu y su objetividad profesional, de practicar una suerte de fidelidad incondicional pero con eclipses hacia ese partido? ¿Puede creerse que no produjeran estas proposiciones, a los ojos de los técnicos del otro bando, el tufillo de una sospechosa politización?

Supongamos ahora que un experto en problemas económicos, por ejemplo, vea desarticulado su plan por una decisión política; o que a un gobierno planificador suceda una mayoría poco favorable al principio de la planificación; o, en fin, que el experto nombrado por los sindicatos entre en conflicto con los expertos nombrados por el ministro de Hacienda: ¿qué sucedería entonces? Si el político acepta que las exigencias de la planificación son hasta tal punto irrecusables que ninguna decisión política podría modificar en ellas, entonces se trata de tecnocracia pura y dura. Si el político cede a las injerencias de los sindicatos, se trata de una abdicación del poder ejecutivo ante las exigencias de un grupo de presión. Y si el político, razonando a base de razones políticas, opta por una solución política que no integra la solución de los especialistas (o que la modifica de cabo a rabo), nos encontramos ante una situación que podríamos llamar clásica: el gobierno se sale con la suya, con las consecuencias que se deducen de semejante victoria, especialmente la eliminación de los expertos (Moulin, 1962: 109-110). Es lo que pasó en España con el ejecutivo estrenado en enero de 1974.

8. Recepción de la teoría tecnocrática en España (1950-1962)

Esta convergencia de política y técnica, y los problemas que estaba planteando, era tema que ya había abordado en España, Francisco J. Conde (1950) y Manuel Fraga (1955), en las páginas de la *Revista de Estudios Políticos*, de la que Conde era director. Ambos autores presentaban la tecnocracia como una forma de dictadura técnica encubierta. Una visión más matizada y positiva del nuevo fenómeno aparecía en las páginas de *Arbor* y el grupo de Rafael Calvo Serer y Florentino Pérez Embid, enfrentados al falangismo de Conde y Fraga. Las páginas de *Arbor* servirían de cauce para la recepción de las ideas de un conservadurismo técnico y ligado a la religión, procedentes del legado de *Acción Española*, Maeztu y los principales teóricos europeos del tradicionalismo.

La pérdida de sustancia política del régimen franquista transmutado ahora en Movimiento, convirtió la década de los cincuenta en un periodo de progresivo declive de los postulados “azules” que habían sido el elemento fundamental en los primeros años de posguerra. Contra esta deriva técnica y administrativa esgrimía sus armas intelectuales el grupo de Conde y Fraga. Dentro de los supuestos del saber científico, la técnica tiende a dejar de ser un modo de “saber” para convertirse en un “hacer”. Para Conde, el esfuerzo por positivar la realidad política habría provocado la paralela reducción del saber político de un saber “práctico” a un saber “operativo” o “técnico”. Con lo que se olvidaba que la lucha política no se realiza por razón de la verdad, sino en nombre de “ideologías”. Metido en el callejón de la técnica, el político tiene que hacer frente a la voracidad de saber pragmático que aqueja a la sociedad. Conde (1950: 27-28) lamenta que los intelectuales de su tiempo formen un ejército inconexo de funcionarios burocratizados. Consecuencia del intervencionismo que propugnan “tanto el bolchevismo como el fascismo y la democracia occidental, la elección de la sociedad del mañana irá a parar a manos de los directores de las grandes asociaciones económicas. Empezarán por determinar la política económica y

acabarán sujetando la política general a las exigencias de los objetivos económicos. El político del mañana será un economista “politizado”. Una vez encaramado en el poder, ya se encargará de asegurarse en él”. Así consumaría la burocratización del político como “intelectual”¹³. Funcionario del Estado o asesor técnico de los poderes privados; burócrata, con oficio y beneficio. Quedaba por ver si la misión política acabaría agotada en la dirección del proceso productivo y en el planeamiento de la economía; habría que pechar con la técnica, pero la ciencia y la técnica no agotan las posibilidades del saber político. Más allá de los pronósticos sobre el dominio de los expertos en la creciente tecnocracia estaba en juego el porvenir de la inteligencia, el futuro del saber intelectual.

En la misma línea argumental sentaría interesantes principios Manuel Fraga (1955: 3-60) en su “Planificación y orden jurídico-político”. El tema clave de la política y la administración en esos años era la *planificación* como en otro tiempo lo fue la soberanía del Estado o la igualdad ante la ley. La moda planificadora sería consecuencia de los defectos del sistema capitalista como organización económica, y de la revolución de las organizaciones (Burnham). La democratización traía consigo la sustitución de una administración *estamental* por otra *burocrática*. Pero la burocracia habría ido sustituyendo la política por la gestión, y capacitándose para una progresiva intervención en la vida económica y social, hasta llegar a *dirigirla*. La formación de los dirigentes era cada vez *menos humanística y más tecnológica*, creando hombres uniformes. Fraga se apoya en un ensayo de J. Ellul (1954) en el que analiza los efectos negativos de la obsesión por la eficiencia (frente a la visión optimista de Clark, Fourastié o Dubreuil). El problema era determinar qué grado de planificación social es inseparable de la planificación económica. Teme que la planificación desemboque necesariamente en burocratización y estancamiento, negación del espíritu de empresa y de lo que suponga “experimentación económica vigorosa”; y que, en el plano político, sea inevitable la opresión y la desaparición de toda facultad de crítica. En definitiva, para Fraga, la planificación no sería inevitable ni conveniente, y llevaría a un Estado servil, donde no habría sitio para la libertad y la cultura.

Lo que identifica al tecnócrata es que tiende a sustituir o debilitar al político ya que aparecen en los ámbitos de decisión de los ejecutivos como políticos de la

¹³ “¡Cuidado con aquellos intelectuales que en aras del progreso económica, técnico o social, proclaman la necesidad de disminuir los derechos individuales! ¡Cuidado con aquellos intelectuales que so pretexto de defender el bien y la paz, os hablan de limitar vuestras libertades y, sobre todo, vuestro pensamiento! ¡Cuidado con aquellos intelectuales que más que luchar por la cultura, pugnan por su obra! Esos jamás crearán el cuerpo y la conciencia intelectual que precisa, desde hace tiempo, España ¡Cuidado con aquellos intelectuales que cantan “El amanecer de la tecnocracia”, porque la tecnocracia sólo se preocupa de mejorar las rosas. El tecnócrata, además, es peligroso, decía el poeta y detesta las ideologías, por su obsesión en mejorar al hombre” (*El Noticiero Universal*, 8/II/67, por Pedro Peñalba).

eficacia o como tecno-estructura que no decide, pero orienta con sus recursos técnicos. El político y el tecnócrata acaban por encontrarse en el poder, ya que el primero se orienta hacia el ejercicio y conservación del poder y el segundo funda su poder en la técnica que es consustancial a toda acción de gobierno, al menos en las presentes democracias (De Lucas, 2003: 52). Los problemas de gobierno de las naciones necesitan, invariablemente, de especialistas en las técnicas de organización.

Fraga volvería sobre esas ideas en su conferencia de ingreso en la Academia de Ciencias Económicas de Barcelona, donde habló sobre “Política y economía” (*La Vanguardia*, 4/V/62). Se centró en los “factores no económicos del desarrollo”, que no puede entenderse más que desde una teoría general del “cambio social”, y de la “función política” en relación con éste. El desarrollo económico no puede lograrse sólo con inversiones económicas, hacen falta cambios en las personas, en sus conocimientos y actitudes; en las inversiones “sociales” (educación, higiene, sanidad) y de “infraestructura” (transportes, energía, riegos), muy distintos de la inversión capitalista. Ello supone todos los elementos de “una gran empresa política”, de un movimiento nacional, que ninguna tecnocracia o grupo de empresarios puede sustituir. Para él, es posible una planificación moderada, al servicio del bien común, dentro de los cauces que señala la doctrina social de la Iglesia, equidistante del capitalismo individualista y del totalitarismo marxista, y en la cual se basan los principios del Movimiento. Al fin, es “más allá de la economía y de la política” donde se asientan los fines de la vida social del hombre. Más importante que el “tener” es el “ser”.

La ofensiva que contra la tecnocracia habían iniciado Conde y Fraga a comienzos de los años 50, cobró fuerza con un hecho que inauguraría una nueva etapa en la historia económica de España: la llegada al gobierno de los primeros ministros tecnocráticos, en febrero de 1957. Dos meses antes, en diciembre de 1956, Agustín de Semir adelantaba algunos problemas que había provocado la aplicación de una praxis tecnocrática, a raíz de la entrada en vigor del III Plan francés. El profesor de la Facultad de Derecho, abordó los problemas que planteaba la relación entre justicia y poder. ¿Cómo organizar el ejercicio de un poder tecnocrático que se concentra por las necesidades de la producción y conciliar la relación entre este poder económico y los principios de responsabilidad personal y libertad radical del hombre? (*La Vanguardia*, 23/XIII/56). Semir comparaba los planes de desarrollo de otros países, sobre todo el francés, y concluía que, con independencia de los sistemas políticos e ideológicos respectivos, las circunstancias técnicas y económicas generales imponían la planificación de la distribución de la riqueza, mediante una intervención del poder público en ella.

Todo esto ocurría mientras el proyecto falangista de Arrese daba sus últimos coletazos ante la resistencia de la jerarquía eclesiástica y del entorno de

Carrero. López Rodó había sido nombrado Secretario General Técnico de la Presidencia del Gobierno, y Semir sabía que trabajaba en el proyecto de reorganización tecnocrática de la Administración. A nadie se le ocultaba el sesgo que tendría esa reforma ya que López Rodó había publicado las líneas principales en la revista *Nuestro Tiempo*. El 17 de enero Franco recibió los 22 folios de su “Informe acerca de la reorganización de la Administración Central del Estado”, que acabarían como Decreto-Ley el 25 de febrero de 1957, al tiempo que se constituía el gobierno en que Franco abrió la puerta a los tecnócratas. Dos ministros del gabinete tendrían ese marchamo “tecnocrático”, M. Navarro Rubio en Hacienda, y A. Ullastres en Comercio.

La novedad reside en que a partir de ahora la crítica a la tecnocracia no será tanto política como referida a valores: la tecnocracia como opuesta a los valores espirituales. El gran problema no sería la influencia de la tecnocracia en la vida social o política sino, sobre todo, que haya calado en la vida de muchas personas, dado que afecta también a la “comprensión misma del ser humano”. Más que valoración negativa de la tecno-ciencia, el paradigma tecnocrático describiría una situación en la que se distorsiona el sentido de la técnica para utilizarla no tanto al servicio del ser humano o de sus propios bienes internos como de los intereses espurios, frecuentemente ideológicos aunque camuflados como neutralidad, en los cuales suelen primar factores como la mera utilidad, la funcionalidad o el poder. Esto lo puso de manifiesto Michael Bedoyere, director de *The Catholic Herald* de Londres, en la conferencia que impartió en el Ateneo de Madrid sobre “La revolución industrial y técnica europea a la luz de los valores cristianos”. El cristianismo resolvió la revolución económica del siglo XVI con el principio de que la riqueza debe servir al destino espiritual de los hombres. “El mundo se enfrenta con un nuevo peligro: el inherente a la revolución técnica, a la tecnocracia, al poder de la máquina y, por tanto, de lo impersonal. Pero los problemas no radican en la máquina en sí, sino en su relación con el individuo” (*ABC*, 23/III/57). El error está en el abandono de una verdad básica: que la economía y la política deben ser sometidas a la ley del espíritu. Hay que insertar en la base de la técnica que el hombre ha sido creado a imagen de Dios: buscar lo divino en las acciones diarias. Ideas que repetirá Luis Ruiz del Castillo en el Congreso de Historia Municipal (*Madrid*, X/57). Interesa, dijo, precaverse contra los excesos de los tecnicismos, que conducen a la tecnocracia. Hay que situar, por encima de la neutralidad de los medios técnicos, una política que sirva al bien común y que sólo puede ser una política del espíritu, que forja la solidaridad que deparan los ideales y evite que dominen los apetitos.

Como doctrina resultante de una importación extranjera, la tecnocracia seguía gozando de escasa popularidad en España. La idea de una técnica elevada a la categoría de nueva religión pagana, se compadecía mal con los postulados oficiales del tradicionalismo católico que buscaba sus fuentes de inspiración en la España de los Reyes Católicos. Sólo por esa vía tan españolísima del espíritu,

podría tener carta de naturaleza en nuestro país la doctrina tecnocrática. Y será el ministro de Obras Públicas, Jorge Vigón, quien, en vísperas de lanzarse el Plan de Estabilización, aborde en octubre de 1958 la tarea de espiritualizar la técnica para darle así entrada en el universo conceptual del franquismo. Vigón tiene una paradójica trayectoria ya que había entrado en el gobierno de 1957 como representante del grupo monárquico de Calvo Serer y Pérez-Embid, a los que pronto traicionará, pasándose al campo de los ministros económicos (tecnocráticos). La candidatura de Juan de Borbón perdía así un valioso activo en El Pardo.

Pues bien, en la clausura del XVII Congreso Internacional de Ferrocarriles, en la Casa Sindical de Madrid, en presencia de Franco, alertó Vigón contra una confabulación internacional de científicos basada en la técnica, que sería “una peligrosa incitación para la credulidad de las masas, que acabarían por plegarse dócilmente al gobierno y a las exigencias de la tecnocracia; y la tecnocracia sería la forma brillante y espectacular de una nueva barbarie” (*ABC*, 8/X/58). Una búsqueda del goce material, una apelación al gobierno de los medios sobre los fines que llevaría a una nueva moral, la de la esclavitud de las cosas. Para Vigón la técnica era buena pero “ha creado los grandes problemas sociales de nuestro tiempo al crear la figura agobiada y multitudinaria del productor esclavo de la máquina. Y es a la técnica, puesta al servicio del espíritu, a la que tenemos que pedir la redención de estos esclavos”. La técnica es una infatigable creadora de necesidades que pueden ahogar al hombre.

Al día siguiente, un artículo del diario *ABC* significativamente titulado “Tecnocracia”, abundaba en las palabras de Vigón, ejemplo de “moral social”. La técnica no sería la panacea que todo lo logra. Plegarse a la tecnocracia sería imitar a Rusia. Sólo la doctrina cristiana serviría como antídoto de la marxista, “madre de la adoración de la técnica: el hombre no es un instrumento más, ni un número en la masa, consumidor y productor: es un alma, es el portador de valores eternos (...) Los medios, la técnica, no deben aniquilar a los fines sobrenaturales”. La solución es transformar “a la técnica de señora absoluta en sierva de lo espiritual”. Esta es la “verdad española”, espina dorsal del Movimiento. La técnica es respetada, pero “no se le permite yugular el fondo religioso, ético, que evitan al hombre caer en la nueva esclavitud: en la reverencia al becerro de acero”¹⁴. Un año después, en octubre de 1959, vemos de nuevo a Vigón criticando la tecnocracia, quizá resultado del descontento popular por la crisis posterior a la

¹⁴ Es significativa la relación de audiencias que concedía Franco ese día 8 de octubre: Damme, director general de la empresa holandesa Weskpoor, con el encargado de negocios en Madrid, Schoch, y Manuel Cano, consejero delegado de la empresa en España; E. Childers, ministro de Pesca y Reforma Agraria de Irlanda; el embajador de la RAU, Alí Marei; el consejero delegado de la Federación de Industrias alemanas, W. Beutler, y el encargado de negocios alemán L. Werz (entre otros). Nadie hacía ascos a negociar con una dictadura.

puesta en marcha del Plan de Estabilización. En el VIII congreso del CEDI dijo: “Esta Europa a la que os entregáis es la Europa de las Patrias, la que respeta los rasgos de toda nacionalidad lentamente configurado por los siglos, lejos de los estrechos nacionalismos políticos cargados de incompreensión y de recelos”. Pero corre el peligro de endiosar a los técnicos que están embaucando a hombres ingenuos con la funesta tecnocracia. “Cuando toda Europa se tambalea amenazando derrumbarse porque todo el orden cristiano esté en peligro, España se lanza a la agotadora aventura de intentar apuntalarla” (*ABC*, 1/X/59). De nuevo sería la “verdad española” dique contra la influencia de la tecnocracia ante una Europa descristianizada. Como recordaría Juan L. Calleja en su artículo “¿De qué te quejas, Europa?”, en enero de 1962: “¿Quién te mandó ridiculizar la autoridad, discutir a los pocos sabios y coronar el número? Menosprecias cuanto no sea aritmética, geometría, cálculo o media. Así contrajiste tu gran enfermedad: la tecnocracia”.

Pero, al margen de valoraciones positivas o negativas, no podía ignorarse la importancia decisiva de los técnicos para el mejor funcionamiento de la sociedad. Durante años prevaleció una actitud pasiva frente a los problemas del bienestar material de los pueblos, una corriente conformista, que destacaba el peso de los recursos naturales, hasta el extremo de atribuirles el carácter de límites infranqueables. En realidad el sujeto responsable de las transformaciones económicas ha sido siempre el hombre. La civilización técnica es un producto humano, una resultante del proceso de conocimientos técnicos acumulados y transmitidos de una generación a otra. En el acto de licenciatura de la 1ª promoción de la Facultad de Económicas de Barcelona, Fabián Estapé destacó este valor de “Técnica y economía” en la vida cotidiana. Aludía a la tecnocracia, un movimiento destinado a resaltar que el disfrute de los conocimientos técnicos exige la formación y utilización intensivas de personal técnico. La II Guerra Mundial hizo patente la necesidad de movilizar conocimientos y personas. “Los economistas, especialmente calificados para resolver los problemas de la distribución de medios escasos para lograr fines determinados, acreditaron su utilidad social en tiempos de guerra” (*La Vanguardia*, 23/I/60). Al acabar la guerra la demanda de técnicos en todos los países era exorbitante, con la proliferación de organizaciones internacionales de cooperación económica, los planes de desarrollo nacional y regional en diversos países, la necesidad de divulgar los principios y métodos de las decisiones económicas. Ninguna Administración pública podría plantearse en adelante sin contar con los técnicos.

La visión negativa de la tecnocracia seguiría siendo la tónica de la vida española en los años 60. La conferencia del P. Colomer sobre el olvido del ser de Heidegger, del que se derivan dos peligros para el mundo: el nihilismo y la tecnocracia (*La Vanguardia*, 24/III/60). En el ámbito militar, el Tte. Gral. López Valencia habló en *Fomento del Trabajo Nacional* sobre “La administración y la defensa nacional”, con el peligro de que la creciente intervención del Estado

derive en tecnocracia. Habría que basar las reformas administrativas en “principios espiritualistas que se opusieran a una técnica ensoberbecida cuyo mayor peligro es la deshumanización de la vida. Así la administración culminaría “su evolución frente a la técnica, a la que reduciría a su misión instrumental, y, al lado de la Política, a la que daría concreción y contenido funcional ejecutivo” (*La Vanguardia*, 30/IV/60). También Alexis Carrell en el III Coloquio Hispano-francés de Barcelona se centró en el abuso de la técnica. “Se olvida que por encima de ello están los valores humanos, cuyo descuido en una sociedad tecnificada como la nuestra conduciría a la tiranía de las máquinas, mucho peor que la de los hombres. Sin la concurrencia de lo que Platón llamó el arte de hacer mejores a los hombres, la tecnocracia es la puerta del más irracional de los despotismos. De ahí la imperiosa necesidad de dar al técnico una formación humanista. En nuestro mundo tecnificado, se hace cada vez más imperioso cuidar de las virtudes de orden moral y reconocer el carácter subordinado de los conocimientos técnicos” (*La Vanguardia*, 17/VII/60).

La tecnocracia era el tema estrella del momento y F. Pérez Embid fue encargado de coordinar el curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (1960) titulado “Las nuevas orientaciones del pensamiento social y económico”, centrado de nuevo en los retos que planteaba la planificación. Participaron Fernández de la Mora (“Realidades sociales y representación política”), Calvo Serer (“Libertad y democracia en el mundo de la última posguerra”), Manuel Alonso García (“La democracia industrial y las transformaciones de la empresa”), Joseph Hoffner (“Crisis y renovación de la propiedad en la sociedad industrializada”), Gaspar Bayón (“La nueva esclavitud del individuo ante la técnica”), Jesús Fueyo (“El impacto de la técnica sobre las formas de vida”), Antonio Perpiñá (“Doctrina católica y pensamiento pontificio ante los problemas sociales”), Fuentes Quintana (“Capitalismo y comunismo en su eficacia ante el desarrollo económico”) y André Pietre (“Evolución del comunismo en Rusia y en China”) (Sánchez, 2004: 880). Completado el Plan de Estabilización (1959), ya los ministros económicos habían comenzado a referirse al nuevo horizonte de la planificación económica que se sustanciaría en el I Plan de Desarrollo (1964).

En una España quintaesencia del catolicismo, las palabras de condena de la tecnocracia por parte de Juan XXIII en el discurso de inauguración del Concilio Vaticano II, encontraron un especial eco. “Se puede desear que la eterna verdad del Evangelio sea repensada y formulada con una mentalidad al día para hacer frente al positivismo de la tecnocracia. Es deseable que las dificultades que encuentra la verdad cristiana sean consideradas de manera que no acarreen a la humanidad de hoy más dificultades y oscuridades que las inevitables” (*ABC*, 14/X/62). Similar punto de vista había expresado poco antes Gabriel Marcel en una entrevista en la que afirmó: “el mayor peligro del mundo actual es la tecnocracia” (*ABC*, 2/VIII/62). Para él, “la tecnocracia puede ahogar la libertad

(...) El hombre de izquierdas se encuentra irresistiblemente atraído por la tecnocracia, siendo así que en realidad la tecnocracia corre el riesgo de rebelarse contra lo que han sido los valores tradicionales de la izquierda, la libertad”. La tecnocracia es “una fórmula que, abandonada a sí misma, puede ser peligrosísima”. El único problema que interesa a Marcel es qué tipo de hombre creará “el desarrollo de la técnica”.

En el seno del *Instituto de Estudios Políticos*, bastión de los detractores de la tecnocracia, donde había sido subdirector Manuel Fraga, se preparó un libro colectivo recogiendo una serie de conferencias del Instituto Belga, de autores como Chevalier, Milliband, Duverger, Aron, Chambre y otros, y traducidas por Luis González Seara en el libro *Ideología y realidad en el siglo XX*. Nuestro tiempo, dice, “está produciendo un tipo de mentalidad política que se pretende desideologizada; mentalidad que se atiene a los hechos, a los problemas concretos, a la realidad, huyendo de los ideólogos, de los teóricos, de los idealistas o moralistas revolucionarios. Se exalta, en cambio, al hombre práctico, al hombre de empresa, al técnico; la política se tecnifica, la política la llevan los profesionales técnicos, expertos, especialistas; la nueva clase dominante es la tecnocracia”. El tema común de estos estudios era el papel que podrían desempeñar las ideologías, lo que serviría de inspiración para el *Crepúsculo de las ideologías* (1965) de Gonzalo Fernández de la Mora.

La desideologización de la política estaba llevando a la reducción de la política a técnica: política neutra, indiferente ideológicamente, política en manos de expertos, de técnicos que dicen saber lo que hay que hacer: el único problema sería –como en toda técnica– la investigación de los medios y su correcta aplicación. La reforma agraria, el problema de las huelgas, la reforma universitaria no serían problemas políticos en el sentido clásico, sino problemas técnicos a resolver con expertos, con profesionales bien preparados. Elías Díaz argumenta que nadie quiere volver al diletantismo político y que los técnicos son insustituibles. Pero, afirmado esto, cabe preguntar: ¿La pretendida desideologización no será una nueva ideología, concretamente la de los conservadores tecnócratas? Hay base para pensar que sí. La política no puede reducirse a técnica; la reforma agraria no es un problema exclusivamente técnico, sino de intereses; la reforma universitaria lo mismo.

El libro de González Seara (1964) adelanta la tesis, tan querida por la derecha, de la muerte de las ideologías, de Fernández de la Mora. Mientras que la izquierda busca reconducir las ideologías a la realidad, pero sin hacerse la ilusión de que las tensiones sociales se han limitado hasta el punto de permitir esa disolución de la política en técnica. Jeanne Hersch lo dice en su trabajo: “Uno de los grandes peligros de una exposición como ésta, es que nos inclina a creer que todo el ataque socialista ya ha sido superado, que todo va bien y que, en lo sucesivo, todos los hombres se irán reconciliado entre sí. Nada más lejos de la

verdad”. O como escribe Raymond Aron: “La descomposición de una democracia pluralista puede acabar en el absolutismo de una ideología o en la represión de todas las ideologías, proclamándose el Estado ideológicamente neutro, en el que ejercen el poder los militares o los técnicos, en nombre de las necesidades del orden y sin declararse partidarios de una doctrina definida”. Para él, la V República francesa era una forma atenuada de este Estado neutro, técnico o militar. Pero “es dudoso que cuando falte una personalidad de excepción [De Gaulle], o un héroe, la V República pueda mantener la actual despolitización”.

Este problema de la sucesión del sistema político gaullista, con las elecciones de 1965 a la vista, es el que se planteaba G. Martinet (1964). La desaparición del general no significaría, a su juicio, la vuelta a la IV República: los cuadros tradicionales parlamentarios, por causas socioeconómicas y tecnocráticas, habían desaparecido o perdido operatividad. La tecnocracia autoritaria, el proceso de despolitización y los temas de la seguridad, crearon un clima psicológico difícil de eliminar. El gaullismo no era tanto un sistema político reaccionario, como un sistema político conservador, contradictorio y fundamentalmente tecnocrático. La alternativa es la socialista: democracia que se opone a tecnocratizar la economía y defiende la participación de los trabajadores en los niveles de gestión y de decisión.

El problema lo plantea S. Groussard: “En toda Europa, incluida Rusia, vemos subir a los tecnócratas. Son hijos de sus obras. Representan una evolución en la civilización capitalista pues ni la cuna, ni la fortuna, ni las relaciones cuentan en su ascensión más que en forma secundaria” (*L’Aurore*, 26/III/63). Era una forma nueva de acceso al poder, alejada de la militancia en los partidos políticos o el favor de grupos de poder. Ahora se justificaban por sus realizaciones: tanto haces, tanto vales.

9. La respuesta a los (tecnocráticos) planes de desarrollo: Lucas Verdú, Negro Pavón, Uscatescu y Gómez Aranda

A lo largo de 1963 el equipo de López Rodó ultimó los detalles del I Plan de Desarrollo Económico y Social, que se iniciaría al comenzar 1964. Los críticos del Ministro Comisario atacaron tanto la reforma administrativa, ya implantada desde 1957, como los nacientes planes de desarrollo, contestando su errada raíz tecnocrática. Guillermo Fernández (1963: 40-48) prevenía que “se hacen valer los conceptos de productividad y eficacia, y el vehículo adoptado por la Administración pública para conformarse con arreglo a este nuevo modo de ser no ha sido otro que el de la progresiva tecnificación de todo el aparato administrativo. Bajo este signo se inician las reformas administrativas en Europa y aún se llega más lejos: se pretende construir una nueva ciencia de la Administración sobre la base fundamental de la técnica”. En el caso de España, “los órganos de la reforma –las Secretarías Generales Técnicas – no pueden abrirse un camino de confianza con el solo argumento de la técnica. Se cree que se han súper-valorizado técnicas materiales de administrar, en detrimento de los últimos fines de la organización”. El destinatario último de la crítica era obviamente López Rodó, impulsor de esos instrumentos de control en los ministerios. Para Fernández, las técnicas de organización y el afán de productividad han olvidado el factor humano: “el plan mejor concebido de poco han de valer si falta el factor “hombre”. La Administración no puede revalorizarse sobre la base única de técnicas organizativas, de espaldas al elemento humano”. Las reformas tecnocráticas, concluye, no pueden tener virtualidad propia, desconectadas de la política.

A esa mirada de corto alcance hacía alusión el artículo “Feo juego paquistaní” (*La Vanguardia*, 4/IX/63) porque todo se reducía a tecnocracia política y tecnocracia económica “¿Dónde quedó el vuelo de las águilas que

dieron estilo y poesía a la cosa pública y a las relaciones entre Estados e inter-pueblos?” Desde luego, no en los gobiernos: como Gual Villalbí señaló ante los ingenieros industriales (1/XIII/63), “los gobiernos que hoy se forman son tecnócratas”.

Con más razón, porque les tocaba muy de cerca, la reforma administrativa de raíz tecnocrática, preocupaba, y mucho, a los funcionarios que veían venir la reforma de su estatuto. En la revista *Documentación administrativa* (1964), no se discutía los criterios de racionalidad y la atención a los ciudadanos, que venían avalados por la opinión del gran hacendista francés Rueff: “La reforma de la Administración es una condición indispensable para el desarrollo económico”; lo que se había trasladado al borrador de la nueva Ley: “La materia de funcionarios exige de modo urgente e inaplazable no ya retoques parciales, sino una total renovación”, que se hacía condición inexcusable para el éxito del naciente Plan. Sobre lo mismo insistirá poco después el catedrático de la Universidad de Madrid, Eduardo García de Enterría, en su conferencia sobre “La administración en España”, que impartió (20/II/65) en el C. M. Pío XII. Comenzó recordando las raíces napoleónicas de nuestro sistema administrativo; a partir de 1939 siguió un proceso de tecnificación que corría el riesgo de transformarse en una tecnocracia, con lo que el poder quedaría en manos de gente sin representatividad ni responsabilidad política. La Administración sería un mero instrumento al servicio de la clase política.

La entrada en vigor del I Plan de Desarrollo y la firma (10/I/64) del acuerdo agrícola franco-alemán que se hacía extensivo a todo el Mercado Común, abrieron una nueva etapa, que España aprovechó para reiterar su ninguneada solicitud de integración de 1962. En el discurso de firma del Acuerdo el canciller alemán L. Erhard recordó que “la integración económica no basta para unir Europa y es preciso una voluntad política original para conseguir una Europa que sea política y no tecnocrática”. Eran necesarios políticos y no tecnócratas, y en los medios de ambos países se barajaba la posibilidad de formar un Gobierno europeo de políticos. Las ideas de Erhard, que coincidían con las de Italia y el Benelux, son perfectamente conocidas: “El hecho es que cada día nuestro país y los otros cinco estamos cediendo más trozos de nuestra soberanía sin saber muy bien a quién se los cedemos o sabiendo solamente que se los cedemos a un organismo compuesto por tecnócratas que no representan a nadie más que a sí mismos y que no están sujetos al control de nadie ni en el fondo a crítica o escrutinio algunos”. Y en Offenburg diría (25/II) el canciller alemán que sería erróneo esperar que la unión política europea pueda surgir automáticamente del éxito económico y mucho menos de la acción tecnocrática. “En política nada surge espontáneamente ni por casualidad, no puede esperarse que los valores económicos o tecnocráticos se conviertan en políticos, si no los dirigen una voluntad y una idea políticas”, anotó el canciller, que agregó: “lo que puede pasar es que, a falta de un condensador político, la cooperación económica y técnica se

pierda”. Unos pocos días después (1/II) era De Gaulle quien aseguró que “las decisiones tenían que salir de los Estados, pues no podían ser tomadas por la tecnocracia”. Insistió en la improcedencia de crear un ejecutivo de funcionarios internacionales. Y, finalmente, J. Monnet precisó que “urge el paso del actual Mercado Común a la unión política europea si ha de evitarse que la marcha de Europa caiga en manos de los tecnócratas de Bruselas”, punto en el que coincide con Erhard.

En España la ascensión de los técnicos al control de los planes de desarrollo era combatida por autores como J. Echeverría (1964) que escribía: “En toda disposición de carácter público no es el técnico quien tiene la última palabra. El técnico sirve a la Administración con su estudio y consejo, pero su cometido no va más allá. La última palabra estará, porque así debe ser, reservada al representante del poder ejecutivo”. La técnica aparece así condicionada, por la política, es decir, por la ideología.

Pero fue desde el campo de los azules desde donde llegaron las críticas más acervas a estos “hombres nuevos” que creían más en la técnica que en la política. José Solís, Ministro Secretario General del Movimiento, se refería a la aparición en el horizonte español de “un raro ejemplar de personas que repiten que no son políticos, pese a ocupar cargos de responsabilidad política” (*Diario de Navarra*, 29/I/64). Alguien así, que no siente la pasión política, “está incapacitado para el servicio de la misma o, lo que es peor, se trata de un enemigo encubierto que no tiene la valentía de pregonarlo”. A la rueda de la encendida oración política de Solís saltaron dos periódicos (*Arriba* y *Pueblo*) para glosar en varios artículos editoriales la inconsecuente actitud de quienes juegan a la política sin querer aparecer como políticos. Su tesis era que dentro del grupo de personas que integran los altos puestos de la Administración del Estado español existía una tensión entre los tecnócratas –especialistas en economía, industria, planes de promoción social o reforma administrativa– y los políticos puros o poetas de la política, aquellos que, según la conocida expresión de José Antonio, son capaces de mover con sus palabras a los pueblos y a los hombres. Solís había afirmado también: “Nos duele que esos intentos contrarios a lo que representa la España de hoy, contrarios a la unidad y al entendimiento entre todos los españoles, contrarios a lo que representa aquel espíritu vibrante del 18 de julio, se lleven a cabo con aportaciones económicas del propio Estado”. La prensa se rasgó farisaicamente las vestiduras ante esta grave acusación de orden estrictamente político: “los españoles tenemos derecho a conocer los nombres de esas personas que se sirven del propio dinero del Estado para llevar a cabo algo que va directamente en contra del bien colectivo de la sociedad”. Hubiera sido preferible que esta acusación hubiera sido más explícita, en un terreno más accesible para todos, “donde los hombres y mujeres responsables –son palabras de Solís– puedan opinar, donde se discuta en colectividad, y donde se adopten unos acuerdos que a todos obliguen” ¿Cuáles son los nombres de esas personas que se

serven del dinero de todos los españoles para trabajar en contra de los intereses de todos los españoles honrados y responsables?, se preguntaba ampulosamente la prensa afín a Falange y al Movimiento.

A partir de 1965, la mayoría de los estudios clásicos sobre el fenómeno tecnocrático subrayan de forma implícita o explícita que la tecnocracia y su incursión en el terreno de la política se encuentran directamente conectadas a la consolidación de las sociedades industriales avanzadas (Galbraith, 1967; Meynaud, 1968; Putnam, 1977; Gouldner, 1979; Fischer, 1990) e incluso sociedades postindustriales (Ellul, 1964; Bell, 1973; Lindberg, 1996). Se hace así hincapié en que el proceso de industrialización y la creciente complejidad social, política y tecnológica de las sociedades industrializadas llevarían al fortalecimiento de los hombres con credenciales técnicas en el proceso de toma de decisiones por sobre las aptitudes políticas tradicionales. Así, Fischer (1990: 17) indica que “históricamente, la teoría y la práctica de la tecnocracia han constituido respuestas políticas e ideológicas a la industrialización y al progreso tecnológico”.

Tal floración produjo una cascada de traducciones de autores críticos con la tecnocracia. Laso Vallejo vertía del inglés la obra de David Granick (1962: 104) en la que se contraponen la figura del tecnócrata y el heredero. La elevación al poder del tecnócrata representa, de una parte, la liberación de la sociedad del poder del dinero heredado, actuando como un aditamento útil para endurecer los impuestos por herencia, y permitiendo elevarse al talento natural. De otra parte, se estima como un reto a la función efectiva de la economía nacional al limitar el papel que se reserva, a los beneficios en el sistema tecnócrata de valores. En un país como Francia donde reina la burguesía, el tecnócrata ocupa una posición más sólida. Las empresas más grandes han sido aquellas dirigidas por tecnócratas, individuos del mismo tipo que aquellos que hicieron una “buena carrera” en la función pública o como militares. Granick se preguntaba si la Administración es una profesión. La abundancia de escuelas de empresas y de programas de formación en Administración en las empresas es un argumento a favor de la existencia de una creencia general extendida en los Estados Unidos de que la Administración comprende muchas habilidades que pueden enseñarse a través de programas formales. Si la Administración no es una profesión, se la considera al menos como un oficio.

También recibía especial atención la obra de Jacques Billy, administrador civil en el Ministerio de Hacienda francés y profesor en la Escuela de Altos Estudios Comerciales, que analiza el fenómeno tecnocrático bajo una perspectiva histórica, y sobre todo dedicado a la Francia de sus días. Se asoma a las profecías que operan desde Saint-Simón a Burnham ¿Hasta qué punto las profecías de estos autores sobre el advenimiento de una sociedad tecnocrática han sido confirmadas por los hechos? A esta pregunta trata de responder Billy. Se aplica a enunciar

conceptos sobre las palabras comunes: tecnocracia, poder tecnocrático (o de los directores), tecnócratas, director, organizador, técnico, en escala piramidal; y también a describir las condiciones del desarrollo del poder tecnocrático (condiciones endógenas relativas al origen y comportamiento de los grupos tecnocráticos y condiciones exógenas propias del medio social). Billy definía la tecnocracia como el ejercicio del poder de organización y decisión por un grupo reducido de hombres de formación técnica que aceptan la disciplina jerárquica y se hallan bajo la autoridad de un jefe. En Francia había sufrido un proceso de maduración a partir de 1939. Una serie de factores (potente capitalismo privado llevado por familias y dirigentes industriales, proliferación de empresas de reducido tamaño, etc.) se habían opuesto a su desarrollo, al que ayudaron otros de signo contrario (corriente racionalista de organización económica taylorista, sistema de grandes escuelas dotadas de un espíritu de grupo, estructura jerarquizada de la Administración francesa). El caso francés queda resumido a grandes rasgos: hasta 1939 la tecnocracia no era una fuerza real, mientras que bajo las condiciones favorables del Estado petainista progresó rápidamente, y desde 1944 la subida del poder tecnocrático en Francia es evidente no sólo en los estratos del sector público, sino también en los grandes negocios privados. La V República intensificó este poder en amplios sectores, altos funcionarios, Consejos de expertos, limitando de hecho los poderes del Parlamento.

Billy analiza los factores psicológicos, sociales y económicos (actitudes de los grupos de organización, éxitos alcanzados en el extranjero) que han originado un nuevo incremento en el poder de los tecnócratas, y estudia la morfología del grupo de los directores y los técnicos: su extensión (2 % de la población activa y 4 % del sector asalariado), su extracción social (alta y media burguesía) y los métodos de reclutamiento (predominio de las oposiciones en el sector público y tendencia a la “colonización” de los puestos de dirección por hombres de formación semejante, en el privado). La concentración industrial, la uniformidad que impone el estilo de vida, la automatización y la organización científica refuerzan el poder de los tecnócratas. Los directores se identifican con los técnicos de todas clases, y este movimiento, que tiende a hipertrofiar al Estado, es irreversible, aunque le quede aún por vencer la hostilidad de las antiguas fuerzas sociales.

Completa esta trilogía de traducciones la obra de Raymond Boisidé, *Tecnocracia y democracia* (1964), realizada por Elías Díaz. Nadie discute la importancia del técnico en las sociedades desarrolladas. La discordancia entre los puntos de vista progresista y conservador comienza cuando se aborda el puesto del técnico en la sociedad. El proceso de tecnificación de la política es paralelo al proceso de desideologización, ambos convertidos en argumento central de las actividades conservadoras. Las fuerzas conservadoras habían pasado de mantener puntos de vista muy ideologizados, a actitudes de neutralismo ideológico y de primacía de la técnica sobre la política (semejante paso se había dado también en

los movimientos de extrema derecha: al fascismo ideológico le sustituyó un neofascismo tecnificado). La tecnocracia surge cuando la técnica pretende sustituir a la política, cuando el técnico pretende asumir el control total de las decisiones colectivas; tecnócrata es el técnico negador de las ideologías y convertido en órgano decisorio supremo. En realidad se trata de técnicos al servicio de una política y una ideología conservadora que se enmascara en una aparente neutralidad; surge así el conflicto entre tecnocracia y democracia que Boisde estudia en esta obra. Frente a una tecnocracia omnipotente e irresponsable, él intenta hacer compatibles técnica y política; ni la técnica debe hacer tecnocracia ni la política puede hacerse desde el arbitrio a espaldas de la técnica. “Si el poder político es débil, quien gobierna es la tecnocracia ¿Y qué es la tecnocracia? Una especie de feudalismo”. La técnica es un elemento de orden cuantitativo; la decisión política, en cambio, de orden cualitativo; es bien cierto que cabe el paso de lo cuantitativo a lo cualitativo, pero justamente ese paso significaría aquí la transformación de la técnica des-politizada y des-ideologizada, o sea de la tecnocracia en técnica concorde con la política y en política actuando concorde con la técnica.

La recepción de estas obras y traducciones de autores extranjeros se resumía muy acertadamente en un artículo de Amando de Miguel, “Políticos y tecnócratas” (*ABC*, 10/IV/64), unos meses después de arrancar el I Plan de Desarrollo español, a la que calificaba de “obra cumbre de la tecnocracia en nuestro país”. De Miguel evoca el mito platónico de la caverna como origen de la querrela: el primer político impuso allí su autoridad, el primer tecnócrata consiguió hacer fuego. La técnica se había convertido en tecnocracia, en voluntad de imponer el gobierno de los técnicos; ese afán de integración también corroe al político. Los gobiernos tenían que considerar los aspectos económicos y sociales, ya no había estados políticos puros. “La aparición de la tecnocracia como aspiración de fórmula de gobierno para los pueblos representa una revolución incruenta, por el hartazgo de tantas revoluciones políticas estériles”. Pero a una impertinencia (“querer gobernar con fórmulas políticas los problemas puramente técnicos”, como la idea proteccionista o librecambista del XIX) le había sucedido otra (“querer someter a fórmulas científicas, a ortopedias y apósitos puramente técnicos las congojas y arritmias claramente políticas”). Seguía en pie, sin resolver, un “problema de jurisdicción y competencia entre los políticos puros y los tecnócratas prácticos”. La legitimidad originaria es del político a través del pueblo, pero a medida que se hace compleja la tarea de gobierno, “¿puede manifestarse la voluntad general en los problemas puramente técnicos? ¿Puede imponerse la visión limitada de la técnica en la generalidad y universalidad de los problemas eminentemente políticos?” Evidentemente no. La división del trabajo entre los países –cima de la tecnocracia– resolvería el problema de la paz universal, al hacer interdependientes a los países, lo que se probó cruelmente con las dos guerras y el nacionalismo económico que reinaba en los sesenta. El

“divino diploma” que esgrime el técnico para ser conductor de pueblos es el talento y el dominio de los problemas. Muchos tecnócratas pueden ostentar este diploma, pero ello no puede servir como regla general de juego, porque el juego político no es exclusivamente un juego técnico. Políticos y tecnócratas harían bien en entenderse.

También reapareció una vieja crítica a la tecnocracia: su menosprecio de los valores humanos y espirituales del hombre. Con motivo de la visita del Premio Nobel griego Giorgos Seferis preguntaba *La Vanguardia* (10/XI/64), “¿Decadencia del espíritu?” y el articulista alertaba “que los progresos de la técnica, y la tecnocracia subsiguiente, representan un grave peligro para el espíritu de los científicos”. En la católica *Aún* (3/XII/64), Manuel González volvía sobre la doble tensión, la real y la psicológica –Plan de Desarrollo y auge turístico–, que venía soportando nuestra economía. “Parece que nuestros técnicos están olvidando que el hombre debe presidir la consideración de cualquier problema, en lugar de venir a ser considerado como la mota de polvo que estropea el engranaje de la economía”. Y poco después, de nuevo *La Vanguardia* (18/II/65) en su crítica del libro *Nuevo humanismo y tecnocracia* de Arturo Pigra, analiza las condiciones que dieron lugar al progreso económico y a la crisis del valor humano, “el hombre en cuanto tal y el régimen tecnocrático al que se ve sometido”. Dedicó la primera parte del libro a “El hombre frente a la tecnocracia” y dice el autor que “la civilización mecánica concluye por anular espiritualmente al hombre y convertirlo en un autómeta”.

Sobre la misma pretensión de “humanizar la tecnocracia” volvía el diario *ABC* (1/VIII/65) al comentar la reciente reorganización del Gobierno, del que habían salido los dos primeros tecnócratas, Ullastres (hacia Bruselas) y Navarro Rubio (hacia el Banco de España). En un irónico artículo de redacción, en la sección “Carta sin sello”, se afirmaba: “Cuando un tecnócrata se humaniza multiplica por diez su eficacia”, porque se hace menos técnico y más político”. Un especialista económico sirve siempre de poco cuando no sabe mirar lejos. “La humanización del tecnócrata, es decir, el buen gobierno de un técnico, tiene su clave, las más de las veces, en una buena información. El conocimiento exacto de la realidad de los problemas, el mirar hacia abajo con los ojos bien abiertos es imprescindible para una acertada decisión”. El peligro es que la realidad no sea como la capta el técnico. Parece pensado en los tecnócratas el párrafo del informe del Banco de España referido a las tensiones inflacionistas registradas en 1964: “El tratamiento de esta situación no puede hacerse con criterios estereotipados, sino con una política “ad hoc” de gran flexibilidad y conocimiento detallado de la situación coyuntural y de la estructura económica del país”. Esto es lo que se pedía a esta tecnocracia humanizada que podría ser una de las mejores conquistas del Plan de Desarrollo.

La tecnocracia se puso definitivamente en primera línea en España con la publicación en 1965 de *El crepúsculo de las ideologías*, de Gonzalo Fernández de la Mora. No era una apología de la corriente tecnocrática pero, por su reducción del peso de lo ideológico, suponía un punto de partida envidiable desde el que abordar la cuestión. No es casual que la crítica del libro la firme Florentino Pérez-Embid, antaño impulsor del Grupo Arbor, junto a Calvo Serer, y siempre cercano a las tesis del Ministro Comisario del Plan de Desarrollo, López Rodó. Pero Pérez-Embid reprocha a Fernández de la Mora no darse cuenta de la radical insuficiencia de la tecnocracia, pese a los síntomas de la sociedad de su tiempo que comparte con el autor del libro: “apatía política contemporánea, convergencia de socialismo y liberalismo, superación cosmopolita de los nacionalismos decimonónicos, racionalización de la política, desacralización de las ideologías antes potenciadas por su postiza carga religiosa, triunfo de la existencia tecnificada” (ABC, 11/III/65). El político ha de ser un experto, pero no solo eso. Pérez-Embid completa su análisis con otro artículo en el mismo medio sobre “La posición centro, desde Menéndez Pelayo” (ABC, 19/V/65). Él se ve tan lejos de la derecha reaccionaria como de la izquierda revolucionaria. Don Marcelino, nos dice, tenía principios políticos básicos similares. “No había aparecido aún el fenómeno contemporáneo de la tecnocracia, del dirigente neutral ante los contenidos doctrinales de la política, y que se mueve ante ella sólo según la estricta dialéctica del Poder. No habían comprobado aún que la tecnocracia vale, cuando acierta, para encauzar dificultades coyunturales, pero no basta para abordar los problemas básicos de la estructura social y política”. De nuevo se desmarca de los tecnócratas al colocarse en el centro “tanto respecto de los radicalismos extremistas como de la inhibición tecnocrática, que no es una posición central, sino una insuficiencia”.

A pesar de sus críticas, Pérez-Embid no faltará al juicio a *El crepúsculo de las ideologías* que en el Ateneo de Madrid formaron Millán Puelles, el marqués de Valdeiglesias, Fueyo, Antonio Valencia y Pérez Embid. Era el 2 de diciembre de 1965. Valdeiglesias puso *El crepúsculo* y *La rebelión de las masas* como libros paralelos por el tema y fuerza polémica. Millán Puelles pidió a Fernández de la Mora que aclarase la diferencia entre tecnócrata y experto, a lo que éste repuso: “Tecnócrata es el experto en la ciencia de los medios. Pero no todos los expertos son tecnócratas: hay expertos en la ciencia de los fines, como son, por ejemplo, los estadistas”¹⁵.

Será precisamente esa dificultad de ubicación del pensamiento neoconservador florecido en el grupo *Arbor*, y que habría devenido en tecnocracia, la que llevará al catedrático Pablo Lucas Verdú a analizar en las páginas de la *Revista de Estudios Políticos* la conexión entre anti-liberalismo e

¹⁵ Pérez Embid a Fernández de la Mora, 4 de diciembre de 1965 (AGUN/FPE/032).

ideología de la tecnocracia. El giro de los conservadores desde la ideología integrista de *Arbor* hacia un tecnocratismo con pretensiones científicas era, para Lucas Verdú, una pobre solución: hubieran salido ganado ateniéndose a su programa teórico, pero ahora se había convertido en un postizo sin sustrato intelectual serio. Así concluye su trabajo (1965: 214):

“Si la aproximación neoconservadora a la ciencia política se ha revelado como una táctica brillante para defenderse, puede que el exceso implicado en tal modernización menoscabe su prestigio. El conservatismo cuenta con una tradición larga y respetable en el campo del pensamiento [Menéndez Pelayo, Maeztu] aunque no se comparta. En cambio, el riesgo de algunas neo-directrices políticas conservadoras consiste en la admisión precipitada de nuevas técnicas para compensar el escaso fuste intelectual de sus concepciones actuales. Se nota la carencia de pensadores políticos neoconservadores de altura que puedan equiparse con los del pasado. Es decir, sería conveniente para el neoconservatismo, para el pensamiento político y para la convivencia política, producir una obra, un esquema conceptual e ideológico neoconservador, antes que una limitada ciencia política para neoconservadores”.

Este notable empeño del pensamiento conservador por demostrar la científicidad de sus afirmaciones políticas frente a las posiciones ideológicas de los movimientos políticos de izquierda, le habría llevado a insistir en el descrédito de las ideologías políticas y en su correspondiente sustitución por las técnicas del manejo del poder y de la administración de las cosas. Con la obra de Fernández de la Mora se habría dado el paso de sustituir la ideocracia por la tecnocracia, lo que autoriza a hablar de una ciencia política para neoconservadores. Lucas Verdú (1965: 207) señala la predilección neoconservadora por la economía, la ciencia política y la ciencia de la Administración. Está claro que si pretenden demostrar la científicidad de sus asertos, tienen que aceptar los dictámenes de las anteriores disciplinas sobre los problemas sociopolíticos que les afectan. Pero ellos se limitan a utilizar la ciencia, no la comparten: se trata de una ciencia política *para* neoconservadores y no *de* los neoconservadores. En esto recuperan las tesis de Saint-Simon en favor del industrialismo, los expertos y tecnócratas. La línea de conexión la encuentra Lucas Verdú (1965: 209) en el positivismo de Comte que filtrado a través del pragmatismo de Maurras, desemboca en el científicismo político experimental adoptado por los neoconservadores. Es la conocida insistencia conservadora en señalar el desgaste de las ideologías y su correlativa sustitución por el dominio de los expertos. Los neoconservadores señalan la carga ideológica desacreditada de los movimientos políticos socialistas y democráticos, en tanto que presentan su propio pensamiento como no ideológico, apoyado sólo en los datos y verificaciones de las ciencias sociales y de acuerdo con las exigencias tecnológicas contemporáneas.

Un pensamiento científico no puede ser ideológico; por consiguiente, una dirección política que se apoya en verificaciones científicas no puede ser

ideológica, argumentan los tecnócratas ¿Es cierto que el conservatismo no es ideológico? ¿Puede hablarse de una “no ideología” neoconservadora, que, sin embargo, es una dirección política, puesto que el conservatismo no llega, como el marxismo, a identificarse con la dimensión científica? Para Lucas Verdú (1965: 209-210) la “no ideología” neoconservadora, apoyada en bases científicas, es una ideología que no se atreve, por razones tácticas, a confesarse como tal. No se arriesga porque comprende que una ideología al servicio de intereses económicos limitados, de organizaciones políticas administradas sólo por grupos privilegiados y de estructuras sociales paternalistas, sería el blanco perfecto para la crítica. El neo conservatismo prefiere, coincidiendo, en parte, paradójicamente, con la fase descendente del socialismo marxista, sustituir el gobierno sobre las personas por la administración de las cosas y la dirección de los procesos de producción. Admite el lema de Saint-Simon y prescinde de los políticos para poner en su lugar a los tecnócratas. Pero no prescinde del Estado, sino que lo ocupa decididamente con expertos y tecnócratas, gentes desideologizadas, y por lo tanto, en quienes se puede confiar.

Lucas Verdú (1965: 210) coincide con el juicio del marxismo de que la tecnocracia es un materialismo histórico de derechas, porque defiende un capitalismo remozado que evoluciona incluso contra las mismas intenciones de la “no ideología” conservadora. Pero el desgaste de las ideologías que tanto les gusta afecta también a la “no ideología” conservadora, que se ha aferrado a la instrumentalización oportuna de ciertos postulados de la ciencia política. Inmunizada con elementos científico-políticos frente a la infección ideológica, la “no ideología” conservadora (ideología desgastada) alardea contra todas las direcciones políticas. Frente al tradicionalismo irracional (que no acepta el pragmatismo conservador); frente a los nacionalismos fascistas (por su irracionalismo socializante); frente al comunismo al que usa como su contrapunto (establece el dilema: o los comunistas o nosotros).

Si la “no-ideología” neoconservadora descansa en bases científicas, ¿cómo puede calificarse de ideología? Es fácil mostrar la ideología subyacente a su “no ideología”. Los conservadores temen explicar las razones para defender un mundo económico y político-social privilegiado. Pero tienen que degradar algunos postulados de ciencia política para reinterpretarlos: el desgaste de las ideologías, la despolitización, la ley de bronce de las oligarquías, y la personalización del poder. Tales tendencias sociopolíticas tienen sentido auténtico en el contexto de una ciencia política objetiva, pero pierden su estricta significación cuando se incorporan a una *ciencia-para* el servicio de ciertos grupos políticos. Con lo que la primera ideología desgastada es la conservadora (Lucas Verdú, 1965: 211-212). Pero no todo en ella es inadmisibles. La “no-ideología” conservadora puede albergar o cuenta con elementos científicos no sólo con comprobaciones científicas al uso, pero esto no la convierte en ciencia; sigue siendo la ideología conservadora. Los ingredientes científicos presentes en

las ideologías acaban por ideologizarse en la medida que pierde su conexión con el esquema global científico del que procedían.

Al margen del juicio que uno tenga sobre el conservadurismo lo cierto es que tales grupos ejercen funciones eficaces en los países. Se encuentran políticos con cierta mentalidad conservadora dentro de grupos liberales, democristianos y socialdemócratas. Esto favorece la acción conservadora de contención política de ideologías más progresivas. Pero el neoconservadurismo no puede participar en la vida política si no reconoce antes sus dimensiones ideológicas. Un neoconservatismo que se autoestima “no-ideológico” propende a desautorizar “científicamente” a las otras corrientes políticas y, por consiguiente, a no admitir su necesaria concurrencia. Pero la defensa de las ideologías políticas no debe confundirse con el elogio del fanatismo político o de la partidocracia, riesgos peligrosos de las sociedades democráticas. Una adecuada defensa y reconocimiento de las ideologías es el mejor antídoto contra la tecnocracia y la tendencia peligrosa de sustituir la política por la administración de las cosas. Lucas Verdú (1965: 213-4) legitima al neo conservatismo como una tendencia ideológica más en el juego democrático.

El cambio de gobierno y la publicación de *El crepúsculo de las ideologías*, ambos en julio de 1965, abrieron un debate del que el artículo de Lucas Verdú era solo el aperitivo. El editorial de *La Vanguardia* (17/VII/65) titulado “Cauces de la acción política”, era una reflexión sobre la declaración del nuevo gobierno que sustanciaba su acción inmediata en dos aspectos: desarrollo económico y político. Tras reiterar la opinión del diario “sobre la primacía de lo político”, refutaba la tesis de López Rodó de que “si se consigue alcanzar cierto nivel de bienestar material los problemas políticos quedarán resueltos”. Consideraba útil la despolitización de ciertas cuestiones administrativas que “deben ser abordadas y resueltas por una técnica preparada y eficaz”, más aun en la España del vocerío y las discusiones bizantinas. “Pero de eso a la beatería de las tecnocracias como unguento amarillo de vigencia universal existe alguna diferencia. El espacio que lo político ocupa, o debe ocupar, en la vida pública es cada vez menor”. Pero ese espacio seguirá teniendo una importancia capital. El gobierno declaró como su tarea primordial el dar cima al proceso institucional; esta tarea se llevaría a cabo “acentuando el carácter representativo del orden político para asegurar la continuidad en el futuro”. Este punto de la declaración aparece a continuación de los que se refieren a la planificación económica como si fuese aquello que la culmina y la hace viable. El Plan de Desarrollo tenía ante sí una ardua y dura tarea; pero su misma dificultad hacía aún más necesario “el cauce político que garantice su andadura”.

Unos días después, remachaba sobre el mismo clavo la conferencia en Burgos de Luis Gómez de Aranda, secretario técnico y consejero nacional del Movimiento, sobre “Las ideologías y el desarrollo”. Incrustado en el sector más

duro del franquismo, los hijos del consejero nacional eran los dirigentes, junto a los de Blas Piñar, de la organización estudiantil de extrema derecha Defensa Universitaria. No hay que confundir –decía– un cierto declinar de las ideologías, por el apaciguamiento social debido a la prosperidad, con “lo que la tesis del final de las ideologías tiene de exageración conservadora, fomentada por los tecnócratas de la despolitización”. Habría sido muy dañosa la idea de Saint-Simon de sustituir “el gobierno de hombres” por la “administración de cosas”, al engendrar el despiadado totalitarismo comunista y la desangelada tecnocracia burguesa (*ABC*, 23/VIII/65). Es el mismo pensamiento sobre la insuficiencia de la tecnocracia que había expuesto en Oviedo con motivo del XXX aniversario de José Antonio Primo de Rivera: no basta con colocar a los hombres de una u otra manera como los ladrillos en un edificio sino “armonizarlos como las notas de una sinfonía, y en una sinfonía hacen falta el alma, la inspiración y el aliento” (*El Eco de Canarias*, 27/V/65). Los problemas que nos parecen más exclusivamente técnicos, los económicos, por ejemplo, tienen una base humana y política. Así, los técnicos pueden programar un desarrollo económico sin inflación y también pueden ver que ese proyecto se les va de las manos. Años después, Gómez de Aranda, glosará las mismas ideas en el libro *Los valores humanos del desarrollo* que G. Fernández de la Mora comentará en el mismo diario (*ABC*, 2/X/69). En resumen, Gómez de Aranda, preocupado por espiritualizar y desmaterializar el desarrollo, abomina de la tecnocracia, y apuesta por una mística del desarrollo que necesita de la fe y del entusiasmo para triunfar.

La discusión sobre la tecnocracia había saltado de los moldes puramente teóricos para entrar de lleno en la pugna que sostenían la Presidencia del Gobierno y el Ministro Comisario del Plan de Desarrollo, es decir, Carrero y López Rodó, contra el tinglado sindical, la Falange y, en definitiva, el Ministro Secretario General del Movimiento, Solís. Los primeros, propulsores de la acción tecnocrática; los segundos, agudamente críticos de una “no ideología”, en palabras de Lucas Verdú, que había copado la dirección de la política y la economía del país. Eran luchas de poder en las que los dos bandos movían peones menores para desestabilizar a la otra parte.

Con esa clave interpretativa debe entenderse el discurso del consejero nacional Adolfo Muñoz Alonso en Villagarcía de Arosa, en el XXXI aniversario fundacional de la Falange gallega. Se refería Muñoz Alonso al sentido cristiano que había que imprimir al mundo de la automatización, misión que no era competencia de la acción política. Por eso, aludiendo al trasfondo religioso del grupo que acaudillaba López Rodó, dijo que “confiar a los partidos llamados “cristianos” la salvación cristiana de un país, es una falsificación desde el punto de vista político y una incongruencia desde una perspectiva religiosa, a no ser que lo que se pretende sea un larvado totalitarismo político de la conciencia del cristiano” (*La Vanguardia*, 18/III/66). Un partido político no puede mezclar, sin grave riesgo, las exigencias de lo político y lo religioso. Ha sido la Falange la que

ha mantenido la sed de justicia y libertad, y esperaba “que la tecnocracia no se utilice como una coartada política”. Dos días más tarde (20/III/66) en Sabadell el director de la Delegación de Organizaciones del Movimiento, Miquel Planell, disertaba sobre “Política y Tecnocracia”, en una coincidencia orquestada desde la Secretaría General del Movimiento.

El grupo tecnocrático movía también sus piezas. La editorial Rialp publicó a comienzos de 1966 el libro *Universidad, tecnocracia y política* en el que el filósofo Gastón Berger advertía dónde acaba la obra de la tecnocracia y comienza, a su vez, la obra de la política y de la acción. A los hombres políticos les compete elegir los fines; a los técnicos, proponer toda la gama posible de medios, indicando cuáles tenemos, qué precio sería necesario pagar por aquéllos que se quisiera emplear y qué consecuencias pueden esperarse. La oposición a la tecnocracia aprovechó, por su parte, la visita a España de Raymond Aron. La prensa se hacía eco de su suspicacia ante una supuesta despolitización del hombre, y de su apuesta por la libertad. “Pese a las profundas transformaciones que sufre, el mundo de lo político sigue manteniendo una enorme vigencia. Ni la economía, como sostiene en la teoría, y no en la práctica, el marxismo, ni la tecnocracia, ni la tecnología o la teoría de las manipulaciones masivas de las voluntades humanas, ni el todopoderoso automatismo, han logrado desplazar, en nombre de la caída de las ideologías, el predominio de la política en la vida” (*ABC*, 2/VII/66). Sigue siendo ésta un elemento de integración: la política está “en manos de hombres que demuestran un vigor y un apego a ella que se ignora en la dirección de la tecnología, del automatismo y de la cibernética”.

El vocablo “tecnocracia” haría fortuna como símbolo de una forma fría, sin alma, de concebir la vida diaria, apoyada solo en la técnica. Cuando el crítico de toros del diario *ABC* (24/III/66) quería establecer una comparación entre los dos toreros de moda, lo hacía usando el símil tecnocrático. “Luis Miguel era al toreo lo que la tecnocracia a la política. Luis Miguel fue el exponente más grandioso del crepúsculo de las ideologías taurinas que mandaba mucho y eficazmente, pero no conmovía nada. Acaso El Cordobés sea anárquico, su técnica basta, su espada endeble: pero tiene ese algo secreto que arrastra a las multitudes y pone a cien los corazones”. O cuando el crítico de cine del diario (29/III/66) recomienda la película “Lemmy contra Alphaville”, ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín, nos dirá que la acción se desarrolla en Alphaville, un país de otra galaxia “dominado por una tecnocracia regida por los cerebros electrónicos. En el país se han suprimido palabras como llorar, por qué y ternura”. La tesis de la película era que la técnica puede traer un mundo peor: “Estas gentes servirán de ejemplo para cuantos consideren el mundo como un teatro en el que la fuerza técnica y el triunfo de esta fuerza han de tener vía libre”. Esa imagen romántica enfrentada a la tecnocracia es la que irá calando en la opinión pública española, y será aprovechada por los opositores de los ministros económicos. “Las cuestiones del espíritu deben estar por encima de la tecnocracia”, recordó *La Vanguardia*

(2/X/65) hablando de la enseñanza superior en España y la necesidad de técnicos bien cualificados para sacar adelante los planes de desarrollo.

La *Revista de Estudios Políticos* abrió sus páginas a un largo artículo crítico con la tecnocracia de Dalmacio Negro Pavón titulado “Cambio social y métodos de desarrollo” (1966). Negro Pavón retoma los puntos ya señalados por Lucas Verdú, centrándose en la antinomia entre economía de mercado y planificada, y, de paso, ataca los planes de desarrollo que los tecnócratas habían impulsado. La economía planificada deriva su lógica de los datos empíricos de la de mercado, pero como método distributivo sólo tiene sentido en economías muy “maduras”, mientras que si se enfoca al desarrollo cuantitativo de la riqueza, no difiere apenas del sistema de mercado en sentido formal. Salvo en economías maduras (Reino Unido, escandinavas) los planificadores como López Rodó se habrían centrado en el desarrollo cuantitativo sin excesivos prejuicios distributivos.

El problema de la economía planificada no es que sea inhumana, sino que, como dice Robbins, “buscando a un posible planificador, se descubre a un dictador”, que los riesgos inherentes a la planificación son los mismos de toda utopía social, puro deseo intelectual. Aron lo repite: “Cuanto menos se respetan los deseos de los individuos y menos se recurre a la incitación por los precios, más necesidad hay de emplear la fuerza”. E incluso llega más lejos: “Los planificadores inevitablemente provocan la planificación de la cultura por lo que sus efectos rebasan siempre los económicos y afectan necesariamente a la vida total del hombre” (Negro, 1966: 187). Además, la planificación refuerza el poder económico, social y político del grupo de servidores burocráticos y de las clases dominantes. Las clases dirigentes tecnocráticas se resisten al proceso de democratización bien por incapacidad de adaptación, bien en defensa de sus personales intereses.

El empresario, que es el individuo peculiar del orden capitalista, es liquidado por la tecnocracia al servicio de la clase dominante, lo que equivale a decapitar la economía dinámica. Para los planificadores, obsesionados con sus ideas parciales y sus intereses personales, la actividad independiente es desorden, por la dificultad de manipular infinitas acciones independientes y opuestas entre sí. Según ellos toda actividad debe orientarse según fines de utilidad social, los cuales han fijado previamente con sus personales criterios (Negro, 1966: 196-7). Las decisiones económicas del Gobierno, de acuerdo con las conveniencias de la clase dominante, por la falta de fijeza jurídica, tienen el carácter de decisiones políticas. Con ello se excluyen automáticamente del “sistema” a todos los grupos o individuos no vinculados a cada nueva decisión, según la ley de que “cada concesión de seguridad completa a un grupo aumenta la inseguridad del resto” (Hayek). La única igualdad es la llamada doctrinariamente “igualdad de oportunidades”, fijada y determinada por la clase dominante según sus criterios

de promoción social y sus conveniencias. La creación por Navarro Rubio de un “patronato de igualdad de oportunidades”, apuntaría en esta dirección.

La igualdad actúa más bien en el sentido de disminuir el número de individuos independientes. Las cargas y las medidas “sociales” aniquilan a los pequeños propietarios –sensiblemente a los campesinos que son siempre la clase más individualista– o, al menos, los sitúa en un plano de insuficiencia perpetua. La consecuencia es que la supuesta ineficiencia de la pequeña y la mediana propiedad agraria e industrial –su falta de productividad agobiados por los impuestos y las medidas dirigistas continuas y el mayor peso político y social de las grandes– permiten descubrir a los tecnócratas que hay que concentrar las empresas y que incluso la agricultura debe organizarse también “empresarialmente” (Negro, 1966: 197-8). Se trata de hecho de una sociedad cerrada en la que, a través de la vinculación directa e indirecta a la hacienda pública o por métodos inflacionarios que desposeen a unos y conceden crédito social y poder económico a otros, o por el control de precios y salarios o por la creación de situaciones monopolísticas o por todos estos medios empleados con pretextos técnicos, la clase dominante se adscribe un grupo cada vez más numeroso de servidores, preocupados sobre todo por sus asuntos económicos privados al servicio de los cuales se pone la administración pública.

Se mantiene la idea de mercado pero el sistema es descaradamente oportunista. El cálculo racional es imposible, salvo que se esté en los secretos de los tecnócratas. Con criterios orientadores, la competencia es casi nula. Si hay producción nacional será en régimen de cuasi monopolio, y la importación –es decir, la competencia exterior que podría romper parcialmente los grupos de intereses – con el pretexto de defender la economía “nacional” estaba sometida a controles discrecionales de favor y a duras exacciones fiscales para incrementar los ingresos de la burocracia y protectores al mismo tiempo de los intereses de la clase dominante (Negro, 1966: 199). La política de subvenciones, exenciones, expropiaciones de interés social, contribuyen a fomentar los desniveles entre los grupos, encareciendo, además, la producción ya que en el sistema fiscal predomina casi siempre la imposición indirecta que es la menos gravosa para los grupos económicos influyentes, para quienes, por otra parte, la evasión es fácil en el caso de los impuestos directos puesto que por su situación cuasi monopolística repercuten fácilmente como costes todos los gravámenes. Sociológicamente lo decisivo no es el nivel de ingresos de las clases inferiores sino su dificultad para escapar al control fiscal y a los precios monopolísticos ya que concurren en su contra los intereses comunes de la oligarquía y de la burocracia.

Un sistema de economía dirigida (los planes de desarrollo) no es más que la actitud defensiva de los grupos de poder basados en infraestructuras económicas incapaces de enfrentarse a la racionalidad de los métodos capitalistas. Estos y las ideas democráticas concurrentes ponen en peligro el *status* que el

capitalismo quiebra cuando se le deja actuar. Por eso hay que “organizar” la libertad (Negro, 1966: 200). Los empresarios, si existen, desaparecen convirtiéndose en una burocracia distinguida, especializada en el sentido de que colaboran a los fines de dominación política de la clase dirigente de la que pasan a formar parte y de la administración estatal. En una economía dirigida sólo pueden resolverse las tensiones con actos políticos, es decir, extraños a la lógica económica, que depende de las ideas de escasez y competencia matizada por las costumbres y los hábitos. De la comparación de sistemas es por lo menos dudoso si no serán preferibles las “injusticias” y desigualdades de la economía libre o economía de mercado, que no pretende conscientemente hacer feliz a nadie y los peligros de la planificación sería que acaba inevitablemente en despotismo.

El progreso técnico estaría modificando profundamente los diversos elementos de la vida pública. Habría conmovido, incluso, la base misma de la política occidental: el principio democrático. Desbordadas las instituciones típicamente democráticas, estaríamos en una fórmula política que el senador gaullista Prelot llamó “la nueva herejía de los tiempos modernos”: la tecnocracia.

En la estela de Negro Pavón, otros dos autores atacaron duramente en los medios de comunicación las prácticas tecnocráticas. Se trata de Jorge Uscatescu y Luis Gómez Aranda. Para ambos es imparable “el imperio de la técnica” pero no así el de la tecnocracia, cuya estrella ven brillar en la España de los planes de desarrollo. El problema está en que “la sociedad tecnológica lleva a la soledad del individuo. Hay un auténtico asalto contra la vida íntima, contra los últimos reductos reales de la libertad del hombre” (*ABC*, 22/VII/66). Son las muchedumbres solitarias que describe el sociólogo norteamericano D. Riesman, o V. Packard en su *Sociedad desnuda*. La raíz de la cuestión, dice Uscatescu (“Sociedad, tecnocracia e ideología”, *La Vanguardia*, 18/VI/66), es la difícil interconexión de esos tres conceptos: la sociedad, la técnica con sus derivaciones (tecnocracia, tecnología, sociedad tecnocrática) y la ideología. Especialistas en la tecnocracia, como R. Aron, definen como una de las características fundamentales de nuestra sociedad la de ser una sociedad industrial. Una sociedad que el escritor francés llama arcaica y que es, en esencia, la nueva sociedad capitalista, pero que tiene bastante en común con la sociedad socialista, y ambas tienen una deriva totalitaria. En esta “interpretación tecnológica” de la historia, observa Aron, tanto la sociedad occidental, industrial, neo-capitalista, como la sociedad socialista, marxista, son la misma cosa, por la sencilla razón de que ambas utilizan “la energía atómica y los ordenadores electrónicos” (*La Vanguardia*, 18/VI/66). Esta interpretación tecnológica de la historia es muy familiar a los que proclaman la muerte de las ideologías. Esta es la interpretación de autores tan prestigiosos como M. Duverger, cuando augura la tendencia hacia un régimen socialista democrático hacia el cual “convergerán las sociedades occidentales mediante la socialización y las soviéticas mediante la liberalización”. El mismo Aron, analista de la sociedad industrial, expresa su

estupor ante la aparición de una nueva sociedad, que define como post-industrial. Merece la pena citar, textualmente, lo que viene a ser como una conclusión del libro de Duverger *Introducción a la política*, un análisis de la sociedad contemporánea:

“A pesar de sus desacuerdos, occidentales y marxistas están más cerca de lo que piensan en su concepción política. Los primeros han renunciado prácticamente a un idealismo que camuflaba mal comportamientos concretos diferentes. Ellos admiten que los factores socio-económicos desempeñan un papel esencial en el desarrollo de los antagonismos políticos ya que devienen factores técnicos: el grado de equipo condiciona el nivel de vida, que condiciona a su vez las luchas políticas. Este análisis permanece alejado de esquemas marxistas. Las diferencias se refieren a puntos secundarios. En lo esencial, occidentales y soviéticos, creen que el desarrollo técnico es la base de la evolución de las estructuras sociales, del cual depende la evolución de las luchas y la integración política. He aquí ideología, técnica y sociedad, partícipes del mismo esencial destino integrador. Es la teoría de la “convergencia”.

Con esto nace el mito de las integraciones plenarias. “La integración progresa en la historia, a medida del progreso técnico”, proclama Duverger. Ernst Jünger hablará del Estado mundial. Fukuyama, del “fin de la Historia” por convergencia de valores, una tesis típicamente hegeliana. Uscatescu volverá sobre el tema en las páginas de la *Revista de Estudios Políticos* (n. 150, 1966) donde rebate la seguridad proclamada por Spirito en un humanismo basado en la ciencia y la técnica. Y lo hace mostrando cómo la mentalidad intelectual americana estaba ya de vuelta de la experiencia tecnocrática buscando de nuevo los supuestos de un humanismo espiritual y cultural. Además, el mito resucitado de la ciencia y la técnica capacitadas para resolver los problemas fundamentales del hombre es, desde el ángulo humanista, un “mal esencial”, causa de desequilibrios en la humanidad. En efecto, si el destino humano de la Ciencia y la Técnica es el de acabar en manos de la tecnocracia, nada más oportuno que ver en ellas un “mal esencial”. Así las consideran no sólo filósofos, sino casi toda la sociología americana (Packard, McLuhan, Galbraith) y europea. “La tecnocracia tiene horror a la responsabilidad”, afirma Elgozy, que es precisamente un tecnócrata.

En los años 70, Jorge Uscatescu analizará de nuevo en la *Revista de Estudios Políticos* los conflictos que se presentan en la sociedad tecnológica en el ámbito de las decisiones políticas y que ofrecían un campo de acción a los *managers* o tecnócratas. Toma de Galbraith la tipología del tecnócrata, como elemento específico del Estado industrial. En “Trabajo, burocracia, organización social”, describe a los tecnócratas como los elementos técnicos de la política, que “tecnocratizan la política misma a base de una nueva ideología: la tecnocracia. Son la *elite* del poder que rehúye, según Galbraith, la ostentación del capitalismo clásico, que sirve al Estado o al Régimen en el Poder. Gusta “manipular” más que

“mandar” (Uscatescu, 1972: 49). Son la culminación de la burocracia, aunque no lo son en estado puro, como los concebía Weber en su tipología de la burocracia moderna. Acumulan poder de decisión, información y conocimiento; crean nuevas formas de privilegios y desigualdades; emulan la producción y el consumo. “Ellos se hallan en la cúspide de otras categorías inferiores que integran la nueva burguesía, o la burocracia actual: empleados del Estado y las grandes Empresas, técnicos e ingenieros, y en una escala inferior, y cada vez más ancha, los “nuevos proletarios”. Son lo que Rocher llama las *elites* tecnocráticas y que, según Max Weber, detentan una autoridad racional-legal. “Más que *elites* de influencia son *elites* de autoridad: ocupan puestos de mando en las jerarquías de carácter burocrático”. Origen legal y competencia político-profesional caracterizan esta nueva clase dirigente dentro del Estado industrial. Las nuevas *elites* poseen una enorme capacidad de decisión histórica en los cambios sociales (Uscatescu, 1972: 60-1). Movilidad y dinamismo son los rasgos fundamentales de su acción sobre las colectividades: es lo que Aron llama la “movilidad social” que motiva la nueva circulación de las *elites* en la nueva sociedad tecnológica.

La postura antitecnocrática de Uscatescu (1975: 17-18, 21) parece haberse agudizado con el tiempo. Frente a la ilusión tecnocrática conserva toda su vigencia la “razón política” como elemento integrador y profiláctico frente a “las pasiones maniqueas, el terror anárquico alimentado por burócratas o individuos aislados, cada cual despegado, en su esfera reducida, de la marcha de la comunidad. La actualidad creciente de la razón política ha puesto de manifiesto lo absurdo y grave en sus consecuencias de las actitudes que proclamaban las exigencias despoltizadoras de la era actual, el fin de las ideologías y el dominio de la tecnocracia planificadora, portavoz de un economismo y un consumismo a ultranza”. Resumiendo, le irrita “un economismo injusto y planificado, que pretende agotar los esfuerzos y la capacidad de inteligencia en una existencia espiritual y políticamente estéril”; la abstracción burocrática “que pretende dirigir todo en base a un racionalismo artificial y utópico”; y “la violencia gratuita que abunda en sus formas más insospechadas a escala universal”. Y se alegra de que “el reino de la tecnocracia no ha logrado, por mucho que lo hayan proclamado sus profetas y propulsores al servicio de Gran Leviatán, frustrar por mucho tiempo los anhelos políticos e ideológicos dentro de la sociedad industrial”. La pervivencia de viejas ideologías, a la vez que brotes de nuevas formas de lucha política y social, muestran tal fracaso. “Saber es poder. Una consigna triunfante que nace a medida que la cultura acaba en la ideología de la ciencia y de la técnica”.

El magistrado y doctor en Ciencias Políticas, Luis Gómez de Aranda, publicó en 1966 *El tema de las ideologías*, que recibió una recensión de Alonso Olea en *Revista de Estudios Públicos*. Tanto si las ideologías han tocado a su fin (Bell) o nos hallamos ante su ocaso (Fernández de la Mora), responde Gómez de Aranda, la pretendida muerte de las ideologías es ya una actitud ideológica.

Fernández de la Mora cree que las ideologías han de vivir extramuros de la religión, Aranda aduce que si se prescinde de lo religioso como sustrato último de toda acción humano y político, se condena a éste a obrar a ciegas. Las ideologías entran en barrena cuando se quiere hacer de ellas un sustituto de lo religioso. Cree Aranda que son necesarios los técnicos, pero el tecnócrata necesita saber hasta dónde puede llevar el uso de su tecnicismo, lo que en sí mismo no viene dado por la técnica, cualquiera que sea el grado de dominio que sobre ella se tenga (Aron: “los técnicos no determinan ni el bien ni los fines de las sociedades industriales en el siglo XX”). El técnico en cuanto tal carece para el ejercicio del poder político de la legitimidad inexcusable a éste, salvo que nos refugiemos en un maquiavelismo. Mientras que el político lo tiene por convención: el político no es quien tenga concepciones grandes ni pequeñas, buenas ni malas, ni quien posee ni deje de poseer mayor o menor dominio sobre unas u otras técnicas, sino que lo es quien cuente con apoyo de los gobernados para el ejercicio de su poder. No esgrime poderes especiales, desde luego no religiosos, sino una legitimidad formal externa. El objetivo, dirá Aranda en una encuesta sobre la situación de España, es conseguir al mismo tiempo la promoción social –mediante un esfuerzo por la igualdad de oportunidades– y la participación del pueblo en el poder, superándose cualquier desangelada tecnocracia (*Arriba*, 25/VII/66). Así el pueblo se siente solidario con los objetivos del desarrollo y protagonista del mismo, pues la deficiencia en la participación, la falta de “protagonismo”, podríamos decir, ocasiona el desinterés. Y por grandes que sean los recursos de la técnica y de la organización es evidente que el hombre tiene en sí la llave para colaborar o no. Este es el *quid* de la cuestión: el grado de voluntariedad en la libre cooperación de los hombres.

Gómez de Aranda mostraría en otro artículo las raíces tecnocráticas de la filosofía política subyacente a la Ley Orgánica del Estado y al desarrollismo. La *Revista de Estudios Políticos* dedicó un número monográfico a los diversos aspectos de la LOE con artículos de Aranda, Uscatescu, Cordero. En ese trabajo, lejos de creer en el declive de las ideologías que proclamara Fernández de la Mora, Aranda (1967: 162) piensa, como Aron y Meynaud, que es la transformación en otra cosa. Prueba de ello sería que Primo de Rivera y Franco nunca emplearon el término ideología para referirse al Movimiento, sino palabras como “doctrina, ideario o principios”; sí en cambio cuando Franco habla de la ideología de Mussolini. Porque Franco excluía todo dogmatismo ideológico: el juego de opiniones no podía estar sometidos al partidismo político, origen de los males del país.

En cuanto al desarrollo, importaba el camino para conseguirlo pero, más aún, con qué tipo de ideología estaba conectado. Toda ideología ofrece una imagen de la sociedad ideal, de lo que debe ser el futuro: se comprende la estrecha relación existe entre el concreto desarrollo y ese programa ideológico. Para Gómez de Aranda (1967: 169-170) es un error decir que para el desarrollo

económico no hace falta una ideología, sino sólo eficacia, porque hasta la eficacia es una ideología, la ideología burguesa. Por otra parte, un desarrollo auténtico no puede ser solo cuantitativo, no debe consistir en aumentar la renta nacional, sino en modificar su distribución, y para eso hay que reformar la estructura de la demanda final en provecho de ciertas necesidades. No se trata sólo de ordenar la economía, sino de cumplir otros objetivos generales, y esto es, sin duda, política; la política aborrecida por los tecnócratas. Tan es así que puede darse “crecimiento económico” sin verdadero “desarrollo”. De ahí la necesidad de un pensamiento ordenador del desarrollo. El hombre ha de dominar a la economía y no consentir que ella le domine, o que un grupo de hombres, en nombre de la economía y en beneficio propio, avasallen a los demás. Esto tiene mucho que ver con los problemas del desarrollo, porque la experiencia nos muestra que, generalmente, llevan consigo una regresión en el aspecto social.

10. La crítica a los planes de desarrollo (ya en marcha)

Los trabajos que la Comisaría del Plan de Desarrollo impulsaba para diseñar el que sería II Plan (1969-72) hicieron que se escribiese mucho sobre tecnocracia a lo largo de 1966. Además de los trabajos ya citados merece la pena detenernos en otro que publicó M. Parés titulado “La amplitud de la acción burocrática y la tecnocracia”. Parte del espíritu formalista que anima la administración de la gran empresa y su acción burocrática, que guarda un parecido muy acentuado con la forma de actuar en la esfera pública. Los tecnócratas tienen una gran influencia en el campo estatal y en el privado, ya que por su calidad de técnicos, especialmente en la ciencia de gobierno o de la administración, su actuación es casi indispensable en cualquier organismo que pretenda ser operativo. Esto no significa defender su necesidad en todas las esferas, pero en la práctica es lo que hace al deslindar dos tareas: tecnócrata y burócrata. El tecnócrata crea o ayuda a establecer decisiones, y muchas veces las ejecuta en un plano directivo, mientras que los burócratas se preocupan de dar cauce práctico a las decisiones o actuación de aquéllos. Las premisas sentadas por los tecnócratas pueden quedar desvirtuadas en la práctica por la acción de los burócratas y su objetivo real ser distinto en la forma y en el fondo del que se habían previsto aquéllos (*La Vanguardia*, 25/VI/66). Podría darse una situación similar a la que se da en las empresas de separación de propiedad (accionista) y control (directivo) de aquellas.

En el fondo radicaba la cuestión de que política y economía eran quehaceres inevitables y mutuamente implicados, como bien apunta *La Actualidad Económica* en su editorial “El futuro político del país” (1/VII/66). Nuestras dificultades económicas actuales no podían aislarse de los problemas políticos españoles. Así, la incertidumbre sobre el futuro sucesorio y las personas que lo encarnarán, tienen también una importante repercusión económica. La libertad de prensa ha permitido plantear preguntas tan sugestivas como: “después

de Franco, ¿qué?”. Pero una vez planteado públicamente el interrogante es preciso forzar la marcha para que cuanto antes haya una respuesta libre de incógnitas. La balanza de pasos sufriría las consecuencias de un ritmo excesivamente lento en nuestro proceso político. Al fin y al cabo, política y economía son dos realidades inseparables, y es muy difícil creer en las posibilidades de una tecnocracia químicamente pura.

La tecnocracia española se desacreditaba con la misma rapidez que crecía el crédito y poder del equipo ligado a López Rodó y la planificación del desarrollo. El término ya había adquirido esa connotación peyorativa que todo lo teñía de mediocridad. Lo mismo daba que se tratase de las elecciones municipales (Ha votado solo el 15% en las elecciones municipales grises y tristonas de octubre. Nada que ver con las participaciones masivas de los tiempos de la monarquía y la república. “Faltó un cierto tinte ideológico y sobró un culto excesivo a la tecnocracia positivista”, decía el *ABC*, 27/X/66, en su artículo “Después de las elecciones municipales”), que de las “Perspectivas de la Europa política”, conferencia de Areilza en el C. M. Pío XII, donde afirmó que “la tecnocracia por sí sola no ha logrado racionalizar del todo la política, en la que entrarán siempre ingredientes voluntarios que atañen a la condición profunda del hombre. Y el problema que hoy se plantea la Europa política es el de adoptar la democracia a la era tecnológica” (*ABC*, 28/X/66).

López Rodó: un administrativista dirigiendo la invasión tecnocrática en nuestro país. El libro del jurista Sergio Cotta *El jurista frente al poder* analizaba cómo captaba esta transformación pacífica de la sociedad industrial, llevándole a preocuparse de los múltiples hechos que inciden en su campo. En especial los problemas de organización y racionalización anejos al industrialismo que obligan a considerar inmediatamente la cuestión del poder, agudizada con la tendencia a la tecnocracia que acompaña necesariamente la desaparición del sistema representativo; si esto ocurre, está claro que un nuevo poder totalitario sustituiría a la democracia. No se trataría, desde luego, de un poder violento, opresivo, e irracional, como los conocidos en el pasado reciente, sino benévolo, solícito del bienestar social, paternal, pacífico; pero que lo invadiría todo. La idea de paternalismo despótico es el matiz que añadió en España al significado original de término sociológico. Por ese camino se llegó a convertir en un insulto, quizá el peor que se podía decir a un político de 1966.

Tema que era abordado por José M. Cordero (1967: 25) al analizar la Ley Orgánica del Estado, y poner en relación la tecnocracia, los planes de desarrollo y la LOE. El punto crítico era el papel omnímodo de la Administración, una mezcla de asesora, inspectora y ordenadora, propicia a todo: a felices intervenciones y a desgraciadas intromisiones. Los nuevos Servicios Técnicos, instrumentos eficaces de la Comisaria de los planes de desarrollo, necesitaban una seria reforma o su reemplazo por otros medios sustitutivos de la acción que

desarrollaban. “El gran monstruo de la tecnocracia, imposible de reducir en nuestros días, frente al cual la Ley Orgánica dibuja una inteligente diversión, encuentra en la Administración consultiva abundantes presas: anidando en Organismos tales como las Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos, de fines laudables, pero realizaciones discutibles”, suplantando lo que debiera ser respetable autonomía de las Corporaciones locales.

También Luis de la Morena (1967: 68-69) redescubría la dimensión axiológica de la actividad administrativa, que no quiere decir que sea en sí misma un valor; antes al contrario, ésta está al servicio de la realización de un valor, de una política, sin ser ni un valor ni una política. Precisamente el riesgo que supone la Administración para la comunidad estriba en que, olvidando estas verdades, llegue a considerarse un fin en sí misma, lo que nos sumiría en esa tremenda subversión que es la “burocracia” o “tecnocracia” en su peyorativo sentido etimológico de “gobierno de los técnicos”. Si una política sin Administración termina por ser una utopía, una Administración sin política termina siendo algo peor: una aberración. Abundando en ese mismo pensamiento pudo escribir Rivero: “¿qué sería un servicio público que no sirviera; una Administración que se despreocupara de su misión de servicio?”.

La Ley Orgánica del Estado, cuya redacción original había corrido a cargo de G. Fernández de la Mora y L. López Rodó, inició en el verano de 1966 su fase final, una vez que Franco aprobara el texto definitivo. Una ponencia ministerial comenzó a preparar un texto definitivo en el mes de junio, pero a la vuelta del verano la LOE seguía suscitando abundantes críticas. Calvo Serer en el diario *Madrid* (4/IX/66) mostraba su frontal oposición al texto; Antonio Garrigues presentó un texto alternativo de constitución. También López Rodó presentó el anteproyecto de directrices de política económica y social del que sería II Plan de Desarrollo. Jorge Uscatescu también volvía a la carga con su “Filosofía de la libertad en la Ley Orgánica”: su tesis era que “los principios políticos no pueden desembocar en una rigidez tecnocrática”. Uscatescu (1967: 308, 311) creía que para poner freno a cualquier tipo de oligarquías en manos de los grupos de presión, la LOE excluía en su espíritu la aceptación de un orden tecnocrático como sustitutivo de un orden político. Con lo que el nuevo régimen constitucional español excluiría de un plumazo el sistema de los partidos políticos, los grupos de presión y la gran tecnocracia política. El campo de lo político seguía manteniendo una enorme vigencia. Ni la economía, ni el marxismo, ni la tecnocracia, ni la tecnología, ni el todopoderoso automatismo, habían logrado desplazar, en nombre de la caída de las ideologías, el predominio de lo político en la vida. Como afirmaron los griegos, lo político seguía siendo aquel vasto fenómeno integrador de naturaleza cultural.

Lo contrario sería abrir la puerta de nuevo a las tentaciones totalitarias que la tecnocracia tuvo desde su inicio en la Universidad de Columbia en los años 20.

Es lo que habían denunciado los sociólogos y filósofos Adorno y Horkheimer en la colección “Ensayistas de hoy” de la colección Taurus. Los autores mostraban su preocupación por la trayectoria de la sociedad que condujo a que muchos grupos se inclinaron por “neo-autoritarismos”, reminiscencia de los fascismos de los años treinta, es decir, la moderna fórmula de la tecnocracia (*La Vanguardia*, 28/VII/66). Todos estos procesos conducen a la desideologización de las masas con los peligros que pueden representar el sometimiento de la existencia humana a la administración con finalidad totalitaria. Años después (11/XII/69) publicará este mismo medio una entrevista al ministro de la Alemania nazi, Albert Speer, al que muchos calificaron como “el primer tecnócrata del mundo moderno”, una especie de precursor de Robert McNamara o Jean Monnet. Según algunos, la ventaja era que Speer no había sido un político y esto es lo que le daría mayor perspectiva. Todo esto se escribía mucho antes de desvelarse que Speer sabía mucho más de los campos de exterminio de lo que había reconocido en sus amañadas memorias.

El proceso de elaboración de la LOE seguía en la segunda mitad de 1966 en medio de grandes polémicas, incluso en el Consejo de Ministros. Un grupo capitaneado por Muñoz Grandes se enfrentaba al de Carrero y López Rodó. Estos últimos querían evitar que la nueva ley constitucional acabara recogiendo los derrotados argumentos de Arrese diez años atrás. En vísperas del referéndum que habría de sancionar la LOE, López Rodó se empleaba con fuerza en su Barcelona natal para defender el proyecto en nombre de las transformaciones que habría de operar la difusión del progreso tecnológico. “Necesitaremos cuadros de expertos eficientes para la aplicación de los nuevos saberes. Esto no es tecnocracia, sino aprovechamiento al máximo del progreso científico: tarea del verdadero político que escapa a la frivolidad de los arbitristas” (13/XII/66). La LOE sería promulgada el 10 de enero, y entre las felicitaciones que recibió Franco hubo una muy especial de Don Juan de Borbón.

Con motivo de la aparición del primer informe FOESSA, a finales de 1966, en el *ABC* (3.XII) Gulliver redoblaba sus ataques a los hombres que representaban la tecnocracia en nuestro país. “En una época de tecnocracia, en la que unos aparentes conocimientos teóricos parecen justificar cualquier puesto preeminente y las lucubraciones de gabinete pretender aprehender una realidad que se escurre de la pinza de la técnica, es vital conocer España como es (...) La economía se hace para los hombres y el desarrollo o social o no es nada”. Los dardos se dirigían a López Rodó, recién llegado de su viaje a París, en el que había mantenido conversaciones con el Comisario del Plan francés, François Ortolí. En febrero de 1967, comentando un informe de la Secretaría General Técnica de los ministerios económicos, arremetía contra estos personajes que “personalizan ese poder de la tecnocracia que maneja hábilmente las riendas de los intereses nacionales e impone las fronteras de la ciencia a los impulsos del deseo. Como satélites de los ministros han de poner almohadillas a las decisiones y dictámenes de sus

respectivos departamentos”. En las mismas fechas, López Rodó explicaba en rueda de prensa a los medios y extranjeros las Directrices del II Plan de Desarrollo, en cuya elaboración habían trabajado los secretarios generales de los ministerios económicos.

Unos pocos días después, Gulliver acusa a la tecnocracia, “que cubre como la hiedra las torres de la política”, de haber marchitado la iniciativa privada y el olfato empresarial, abocando a los ciudadanos a una peligrosa dependencia de la Administración para resolver sus problemas. “El fenómeno de la planificación, extendida como una plaga de técnica económica a todas las latitudes, intenta cuadrangular racionalmente el desarrollo” (así se titulaba el artículo, “Desarrollo cuadrangular”). Los tecnócratas habrían “invadido el campo de la economía y desde él ejercen su dictadura, en ondas concéntricas que invaden todas las esferas de la vida” (ABC, 26/III/67). Así, el principio de la especialización, impuesto por la compleja vida moderna, eleva cada vez más el pedestal de la técnica. “El peligro reside en su deshumanización, en la neutralidad del político que deja libre la palestra para que circulen a su antojo las verdades de una ciencia económica que, por ser social, siempre lo son en parte. La economía solo puede aspirar a una aproximación tangencial de la realidad. El economista que no sabe auto limitarse en sus juicios puede ser un peligro, puede no ser un buen economista”. Dos días después, las invectivas de Gulliver apuntaban a los resultados que la tecnocracia estaba produciendo en Francia, el país del que se había tomado ejemplo. El pobre resultado electoral del general De Gaulle en las elecciones se debería a que su política económica “ha sido elaborada, dirigida y ejecutada por el grupo de tecnócratas de la política francesa y quizás la excesiva frialdad de tal tecnocracia es en definitiva la causante de esa escasa mayoría de diputados gaullistas”. Aparte de los condicionantes técnicos, “es indudable que los factores humanos y sociales han adquirido una significación que en ningún caso ni el político ni el tecnócrata pueden olvidar, pero muy especialmente el tecnócrata (...) En el justo medio está la virtud y el técnico económico ha de pensar siempre que el juego de la vida económica es muy similar al de un concierto” (ABC, 28/III/67).

En su Encíclica *Populorum Progressio* (III/67) el Papa Pablo VI se refería explícitamente como un peligro a la tecnocracia:

“Decir desarrollo es, efectivamente, preocuparse tanto por el progreso social como por el crecimiento económico. No basta aumentar la riqueza común para que sea repartida equitativamente. No basta promover la técnica para que la tierra sea humanamente más habitable. Los errores de los que han ido por delante deben advertir a los que están en vías de desarrollo de cuáles son los peligros que haya que evitar en este terreno. La tecnocracia de mañana puede engendrar males no menos temibles que los del liberalismo de ayer. Economía y técnica no tiene sentido si no es por el hombre, a quien deben servir. El hombre no es verdaderamente hombre más que en la medida en que, dueño de sus acciones y juez de su valor, se hace él mismo autor de su progreso, según la

naturaleza que le ha sido dada por su Creador y de la cual asume libremente las posibilidades y las exigencias”.

Palabras a las que hacía eco en el CSIC el ministro López Bravo: “En esta época de empacho tecnológico viene a decirnos el Papa en su encíclica que tengamos prevención hacia la tecnocracia, ya que podía conducirnos a males comparables a los del liberalismo” (*La Vanguardia*, 6/IV/67). López Rodó en su despacho de abril con el Jefe del Estado se ocupó de llevar el ascua a su sardina, y repitió a Franco el lema de la encíclica: “El desarrollo es el nuevo nombre de la paz”. En el artículo “La Populorum Progressio, esa gran encíclica” (9/IV), Manuel Jiménez de Parga argumentaba que no bastan las fórmulas económicas. Algunos teóricos proclaman que “unas medidas de técnica económica, combinadas con técnicas administrativas, resuelven todos los problemas de la convivencia”. A esos tecnócratas se refería el Papa. Ya sabemos a dónde llevan las leyes de la ciencia económica. Dejada a sí misma, la economía conduce hacia “la agravación en la disparidad de los niveles de vida”, decía Pablo VI. Refiriéndose al capitalismo liberal, el Papa advierte: “Ha sido construido un sistema que considera el provecho como motor del progreso económico, la concurrencia como ley suprema de la economía, la propiedad privada de los medios de producción como un derecho absoluto, sin límites ni obligaciones sociales correspondientes. Este liberalismo sin freno, que conduce a la dictadura, justamente fue denunciado por Pío XI como generador de “el imperialismo internacional del dinero”. En otra frase Paulo VI califica y condena ese capitalismo liberal: “nefasto sistema”, es su sentencia.

Similar crítica a la tecnocracia aparecería años después con motivo de la publicación en mayo de 1971 de la encíclica *Octogesima Adveniens*, de Pablo VI. Se oponía a todo cuanto amenace aplastar el alma del hombre. De ahí su terror a una supervaloración de la economía que termine por destrozar la libertad interior. Y de ahí su tensa crítica a una tecnocracia que pone todo al servicio de una nueva eficacia que estaría dando origen, sin darse cuenta, a un nuevo materialismo. Comentando el documento papal, José L. Martín Descalzo advertía que “no es precisamente cómodo para los tecnócratas. Si alguna clave hay en él es el terror del Papa a un mundo regido por una eficacia económica, por esa tecnocracia creciente que pretende desterrar las ideologías y se constituye a sí misma en la más peligrosa y materialista de las ideologías. En ella los valores de la producción y la eficacia suben en cotización sobre los valores de la justicia y la libertad” (*Vida Nueva*, 1/VI/71). ¿Hasta qué punto España no estaba entrando en esa peligrosa dictadura de la eficacia? “Las palabras de grave advertencia a los invadidos de tecnocracia se multiplican en esta carta. Y el recuerdo de que el verdadero progreso está en el desarrollo de la conciencia moral, en el aumento de la participación y la libertad, no en las relaciones de fuerzas e intereses”.

Junto a los franceses, cada vez eran más los autores italianos que se interesaban por la tecnocracia. Así Piovene y Parisi (Venecia) cuyos libros

comenta Juan Masoliver. Este era su juicio global: “Una negación del hombre, degradado de sujeto a objeto; una caricatura de la tecnocracia, los exámenes psicoanalíticos, las planificaciones, el imperio publicitario, la felicidad por decreto: válida, en suma, contra el capitalismo, pero también contra el marxismo” (*La Vanguardia*, 2/II/67). Por su parte la *Revista de Estudios Políticos* retomó la tradición crítica con la reseña del libro *Panorama actual de las ideologías* de Vittorio Vettori (1967, n. 156). La crisis de las ideologías (liberalismo, nacionalismo y socialismo) era el fenómeno histórico del momento, habían desembocado en una encrucijada y cabía evaluar posibles soluciones. La solución más fácil es la tecnocrática, a-crítica y negativa (porque no establece parangones entre las ideologías y porque incluso las niega en conjunto) la cual representa la muerte de las ideologías (1967: 171). La tecnocracia sería la exageración dogmática de la ideología liberal, como el totalitarismo nazista lo fue de la ideología nacionalista y el estalinista de la ideología socialista. Por tanto, la tecnocrática es una solución totalitaria ligada a la lógica autodestructiva de las ideologías en un momento de saturación dogmática. Vettori adelanta el dilema al que se verían expuestas en el futuro las ideologías: ser víctimas del veneno tecnocrático; o renovarse y reanudar su propio camino hacia una convergencia respetuosa de la dignidad humana.

El 18 de noviembre de 1967, el gobierno británico procedió a devaluar la libra esterlina para frenar el creciente déficit de su balanza de pagos. Al tratarse de una moneda de reserva, esa medida tenía que afectar a los países de su área y a España que tenía un fuerte déficit comercial (\$200 millones en 1966). La impopular medida de H. Wilson hacía preguntarse al diario *ABC* (6/XII/67): “¿Es Wilson un político riguroso o un tecnócrata a secas? La tecnocracia ¿es de derechas o de izquierdas?” A lo que responde: “En la política, como en la ciencia y la tecnología, hay que prescindir de los aficionados y reconocer que en todos los niveles, se necesita la mente preparada del profesional”. Esta apelación a los técnicos pareció diluirse cuando, dos días más tarde, España se sumó a los países de la OCDE que tuvieron que devaluar su moneda para mantener la paridad con la libra. El periódico parecía hacerse eco de las quejas de la OSE que puso el grito en el cielo, a través de los ministros de Trabajo, Romeo Gorría, y el Delegado Nacional de Sindicatos, Solís Ruiz, por los perjuicios que esa medida produciría a los trabajadores. En su artículo “Más allá del problema” apuntaba a los riesgos del juego capitalista que se apoya “en la ciencia económica para dictar las reglas que necesita para sobrevivir. Partida difícil en la que se vende bienestar para comprar tranquilidad. Los economistas son sus incendiarios. La economía trepa como enredadera por la actividad política y pacta con ese ejército de hombres invisibles llamados tecnócratas y rinde tributo a esas exigencias que confían en la divinidad de nuestro tiempo: el desarrollo” (*ABC*, 28/XI/67).

Un año más tarde la Francia gaullista tuvo que seguir los pasos de Gran Bretaña y devaluar el franco. Manuel Aznar al aludir a “Las razones del general

De Gaulle” se negaba “a reducir la realidad a los esquemas propios de la tecnocracia; porque pienso que se equivoca quien sale al encuentro de la vida y de los fenómenos sociales armado únicamente de cálculos, diagramas y estadísticas, dando al olvido las fuerzas espirituales y los valores morales” (*La Vanguardia*, 1/XII/68). Así, encuentra Aznar admirable que, antes de decidir, De Gaulle “vuelva siempre con profundidad sus ojos hacia el tesoro inmortal de las calidades con que el alma del pueblo francés ha podido intervenir decisivamente en la historia del hombre”. Por oposición, “el tecnócrata puro tiende a olvidar este tipo de verdades elementales, que no son resumibles mediante croquis, ni estimables según la regla de cálculo”.

Lo que no estaba dispuesto a tolerar De Gaulle era una Europa regida por tecnócratas. Para él habían bastado pocos años para percibir los males que tienen su origen en las decisiones de la tecnocracia. Así argüía Lorenzo López Sancho en *ABC* (18/XI/70): “Es inimaginable el efecto desastroso que en la vida española produciría la implantación de medidas generales definidas en Bruselas por un tecnócrata alemán o checoslovaco. Sería un desastre anegar nuestras queridas instituciones en los decretos abstractos de una tecnocracia supranacional ¿Cómo llegar a una Europa política que no asfixie, sino armonice a las nacionalidades?” Ambos cojean del mismo pié: es tecnocracia si lo hacen otros.

Esta mezcla explosiva de reivindicaciones de la OSE, devaluación de la peseta, y la puesta en marcha del II Plan de Desarrollo, se concretó en un ataque directo a López Rodó y sus hombres por la sustitución de técnicos por políticos en la decisión de asuntos de naturaleza política. Unos días antes, un candidato en las elecciones para el Consejo Nacional declaraba: “Veto a la tecnocracia, a la aristocracia, a la burocracia”. Este veto sistemático a la tecnocracia parecía estar de moda, pero el diario *El Alcázar* (15/XII/67) ponía el dedo en la llaga al apuntar que nada tenía que ver lo que llamaba “tecnocracifobia” con el ataque interesado a los equipos de gobierno alrededor del Ministro Comisario del Plan de Desarrollo ¿En quién se piensa cuando se habla de tecnocracia? ¿Acaso en quienes detentan el poder gracias a la posesión de unos conocimientos técnicos que les hacen aptos para los cargos que ocupan? No parecía tan sencillo. Por esa regla de tres habría de ser calificado de tecnócrata el ministro falangista de Trabajo, Romeo Gorría, dada su condición de letrado del Consejo de Estado; o del Ministro de Educación y Ciencia, Lora Tamayo, catedrático e investigador. Pero la realidad era otra: el calificativo de tecnócrata se dirigía casi exclusivamente hacia la Comisaría del Plan de Desarrollo y a las carteras de Comercio, Industria y Hacienda. De estos “tecnócratas” (económicos) se decían cosas malas, y el periódico salía en su defensa.

Para contar la historia completa, en esos años la propiedad de *El Alcázar* estaba en manos de una sociedad denominada PESA, de la que eran propietarios Carlos Pinilla y algunos miembros del Opus Dei. Este cambio de propiedad desde

la Hermandad falangista del Alcázar, que presidía el general José Moscardó, al grupo PESA se produjo en 1949. Pero no fue hasta el nombramiento en 1963 de José L. Cebrián como director cuando el periódico vivió sus mejores años, especialmente entre 1966 y 1968 cuando se abrió, junto al diario *Madrid*, a la prensa aperturista del régimen. Fue su época de esplendor, con una tirada de 110.000 ejemplares, hasta su incautación gubernativa (27/IX/68) y vuelta a las manos de la Hermandad (Girón, Piñar y Moscardó). Por eso afirmaba en el artículo que comentamos que “el gobierno de expertos es hoy una necesidad ineludible. Lo sensato es ejercer la crítica contra tal o cual tecnócrata, pero carece de sentido convertir el caso particular en ley general”. Los que atacaban eran acusados, a su vez, de “jugar a la política”, pero en un sentido peculiar, “más parecido a la tertulia de café que a la reunión de trabajo”. No hacía falta recordar los nombres de Giscard d’Estaing, Erhard o Einaudi, ilustres tecnócratas según el diario, para calibrar lo dañino de esa “tecnocracifobia”. Se hacía así un flaco servicio al país, sobre todo cuando no se contaba con otro sistema mejor. Era una frivolidad absoluta entrar a saco contra un sistema por no estar de acuerdo con unas personas, una falta de visión política y un exceso de “diletantismo” económico-social.

Contra la pretendida neutralidad política del II Plan de Desarrollo, que había entrado en vigor dos meses antes, se revolvía Martín Retortillo, catedrático de Derecho Administrativo, en la conferencia que sobre “Niveles de participación política en la elaboración del Plan de Desarrollo”, dio en el Círculo de Economía. En su opinión, “no ha habido representatividad en la fase de elaboración del Plan de Desarrollo” (*La Vanguardia*, 16/III/68). Lo que probaría las pretensiones totalizadoras en los diseñadores de Planes: el plan no había sido aprobado por el Parlamento, donde reside la representación popular, por lo que en poco se diferencia del modo de actuar en los países de la órbita soviética donde, no es casualidad, se aplicaba con mayor entusiasmo la lógica tecnocrática. Entra Retortillo en el tema tecnocracia-política y señala que frente a la pretendida apolitización de los Planes, con la pretendida muerte de las ideologías, la tecnocracia reivindica el carácter técnico del Plan. Pero la intervención popular es insustituible, y debiera haber presentado López Rodó varias opciones al Parlamento para que este hubiera podido decidirse por un plan determinado. Tampoco se habría contado con el parecer de las Administraciones locales, que tanto pudieran haber aportado.

Este problema de “La situación del Parlamento en las sociedades industriales” era objeto de atención en un artículo de Jorge Esteban (1968: 99). La soberanía se habría trasladado de los parlamentos a los tecnócratas. Los burócratas pasaran a convertirse en tecnócratas. Esteban remitía a la autoridad de Meynaud: un primer motivo para separar la burocracia de la tecnocracia radica en que ésta añade a la primera un factor de poderío y de prestigio que no posee necesariamente la burocracia.

En los primeros meses de 1968, el profesor Manuel Jiménez de Parga, catedrático de Derecho Político de la Universidad de Barcelona, volverá a retomar su ataque a la tecnocracia. *La Vanguardia* (1/III) publicaba un resumen de su conferencia en el Ateneo Mercantil (Barcelona) sobre “Más allá del neo-capitalismo”. En el mes de abril abordará en el Colegio de Abogados de Barcelona la relación entre política y tecnocracia. Critica la tesis de la desideologización, por ser “la imagen de unos círculos provincianos de Madrid, que olvidan lo que existe más allá de las puertas de sus pequeños mundos”. La aparente apatía política no equivale a desideologización de las masas. La consolidación del Estado de derecho parecía traer una tecnificación de las decisiones y el predominio de los técnicos en la vida pública. La democracia se ha de convertir, según estos profetas, en tecnocracia. Pero Jiménez de Parga sostiene que es posible evitar la tecnocracia a través de la clarificación de los asuntos públicos. Si los técnicos dicen al pueblo: “Dejadnos decidir, vosotros no podéis comprender”, el pueblo tiene derecho a dudar de su aptitud para decidir, ya que no son capaces de hacerse comprender. Además, los tecnócratas, alentados por la supuesta desideologización y la tecnificación creciente de la política, querían hacer compatibles el capitalismo con el Estado de bienestar. La receta política es un Estado administrador, en el que se minimice al Parlamento y se olvide el sistema de partidos. Estos teóricos abogan por un Ejecutivo fuerte y por la incorporación a las constituciones de los derechos sociales. Jiménez de Parga reconoce los frutos estimables del capitalismo, pero recuerda la doctrina de la Iglesia según la cual “la noción de provecho no debe ser el único regulador del crecimiento económico, que la búsqueda de índices de crecimiento lo más elevados posible no es un valor suficiente en sí mismo, que el crecimiento no debe abandonarse al libre juego de los mecanismos llamados naturales”. Concluye que la ideología del continuo desarrollo lleva a una redistribución anárquica de la riqueza. Por ello el neo-capitalismo no puede permitirse el lujo de ser “social”. Propugna un régimen político-humanista. Una organización económica, en suma, más allá del neo-capitalismo dando basamento sólido a un régimen político pluralista: un humanismo socialista o un socialismo humanista. Jiménez de Parga previene contra el autoritarismo tecnocrático, que no admite organizaciones de naturaleza política que realicen verdaderos actos políticos, y que prefiere ser impulsado por grupos de naturaleza no política. Porque tolerar simplemente la concurrencia de asociaciones políticas sería negar uno de los supuestos doctrinales, a saber: la neutralización política, con el fin de las ideologías. En el autoritarismo tecnocrático el Estado, impulsado por una minoría agrupada en un sistema limitado de asociaciones no políticas, termina controlado por esas fuerzas no políticas, generalmente de gran poder económico, que dictan a autoridades y funcionarios sus propias leyes. La confusión del poder económico y el poder político alcanzarían así su punto culminante.

La misma crisis producida en la República Checa, que culminó con la invasión soviética en el verano de 1968, era interpretada como un conflicto entre técnicos y burócratas, entre la tecnocracia optimista del desarrollo y la burocracia anquilosada del Partido: entre los ideólogos de la tecnocracia y los burócratas de la ideología. Situación frecuente en etapas de tránsito de un monopartidismo desfasado y retórico a una espontánea y genuina democratización política y social. Al comunismo ruso le había salido el cisma de Mao porque “utilizó en demasía la técnica como bandera de salvación para la construcción de su pueblo, y la tecnocracia ahogó la fuerza de la ideología, que es lo que ahora esgrime a Pekín” (*Pueblo*, 10/IX/68). También la democracia americana estaría abocada a una crisis, “porque el consumismo ha elevado el poder de la tecnocracia y ésta, a su vez, ha dejado brotar la plutocracia, que no desaprovecha la ocasión de resurgir”.

11. Vallet de Goytisolo, el anti-tecnócrata por excelencia

Desde los años sesenta la literatura anti-tecnocrática tiene en España su máximo representante en el jurista Juan Vallet de Goytisolo. A comienzos de los 60, fundó junto a Eugenio Vegas Latapié, “La ciudad católica”, con su órgano de expresión, la revista *Verbo*. De inclinaciones carlistas, íntimo de Francisco Elías de Tejada, publicó innumerables libros y artículos cuyo lema podría ser: “tecnocracia y el hombre masa, camino al totalitarismo moderno”. Define Vallet la tecnocracia como “una operatividad racionalizadora y cuantificadora del Estado respecto a la sociedad, que se extiende por todos los ámbitos y que tiende a conducirlo al totalitarismo”¹⁶. Encierra la dominación del hombre y su entorno, la racionalización del espíritu, así como la cosificación de la vida que queda orientada hacia el artificio del bienestar material. El dominio de las cosas y el dominio del espíritu son las dos grandes áreas de actuación tecnocrática. Vallet caracteriza al nuevo “hombre-masa” con cuatro notas fundamentales: desarraigo (religioso, intelectual y existencial), segmentación (la sociedad organizada mecánicamente desde el poder), pérdida del sentido de la realidad (sociedad masificada y teledirigida desde el Estado), y condicionalidad de su actividad a los designios de los gobernantes, de quienes todo lo espera (Sánchez-Hidalgo, 2011: 10). La tecnocracia es aquella ideología que trata de

¹⁶ El Estado se convierte en un “artefacto instrumental” que integra en su vasto mecanismo la creciente intervención en esferas de la economía, tales como: 1) La asunción de empresas de servicios con precios políticos que financia en parte con los impuestos. 2) El desarrollo del crédito estatal, o al menos el control de aquél por el Estado. 3) La creación de empresas mixtas estatales y capitalistas. 4) Una política fiscal implacable, por una parte, y de estímulos, de otra, con la finalidad de influir en la economía. 5) El absoluto “control” de importaciones y exportaciones. 6) Una inflación que acrecienta cada vez más el intervencionismo estatal. 7) La planificación centralizada y tecnocrática. 8) El dominio de la enseñanza y de los medios informativos.

dirigir la vida pública según el criterio de “economicidad” por medio de la planificación elitista de unos pocos cerebros comandados por un líder, que goza de amplios poderes políticos y respaldados por los medios de comunicación. No hay que ser muy perspicaz para advertir que Vallet apunta al equipo de L. López Rodó. Esto se puso de manifiesto en el viraje que observamos en las sucesivas reediciones de su libro *Ideología, praxis y mito de la tecnocracia*, publicado inicialmente en 1971, pero que Vallet rehízo por completo en 1974, rectificando su criterio de considerar el *desarrollo* (los planes de desarrollo) como característica esencial de la tecnocracia. Volveremos sobre esto.

En 1969 publica Vallet su libro *Sociedad de masas y Derecho*, que recibió una amplia recensión de José M. Nin en la *Revista de Estudios Políticos* (n. 167, 1969, pp. 231-8). La masificación hace que el pueblo caiga en manos de los tecnócratas. El político de antaño se vuelve técnico de la fábrica social o recurre a técnicos que le proponen soluciones “científicamente valederas” para los problemas. A su vez, el técnico de la fábrica social, formado en escuelas y facultades, alcanza los más altos cargos del Estado (Vallet, 1969: 219). Su aversión por la tecnocracia se cimienta en que fomenta que la sociedad evolucione hacia su división en dos grupos de hombres, “los que saben y mandan” y “los que no saben y obedecen”. Aquéllos forman la tecnocracia que, a su vez, se descompone en dos tipos de técnicos: los que condicionan las cosas y los que condicionan los espíritus, para que –mediante la propaganda– acepten las cosas tal como van siendo condicionadas por aquéllos. La función consiste en “manipular el acontecimiento, prepararlo, disponiendo todo para que se produzca, elaborar un plan, calcular sus fases, concertar los esfuerzos, dirigir las operaciones, guiar las conductas, dominar el saber y los métodos infalibles, disponer de un poder absoluto”. Los tecnócratas, en definitiva, poseen “la ciencia de la eficacia”. Tratan al hombre y al mundo como cosas, como materia a explotar, como un conjunto de ruedas articuladas mecánicamente. Observan la sociedad como la resultante de un organigrama y de una planificación. Suprimen toda tentativa de vuelta a las actividades contemplativas y morales del espíritu. Instauran la primacía sin rival de la actividad productiva; transforman la sociedad en una inmensa fábrica de la que detentarán el gobierno mundial.

Para Vallet (1969: 435), el espíritu tecnocrático no es sino una forma grosera del progresismo religioso. Y resucita el ya temido por Marx, “despotismo asiático”, denunciado por Garaudy y Marcuse. En el ámbito nacional censura las deficiencias de la planificación tecnocrática y acusa a los Polos de Desarrollo de provocar verdaderas deportaciones económicas y sociales (*ABC*, 10/VII/69). Él mismo publicó en ese medio un editorial sobre “Progreso, progresismo y sus respectivos anti” (*ABC*, 7/IX/69) donde apunta de nuevo que la tecnocracia, versión última del progresismo, pretende racionalizar toda la existencia a través del estado tecnificado. La tecnocracia no sería sino un despotismo ilustrado del siglo XX.

Vallet era asiduo lector de la obra de Michel F. Sciacca que vino a España para disertar en el club *Siglo XXI* sobre “La ofensiva de la tecnocracia contra la cultura”. La excesiva tecnocracia mata la fantasía creadora, afirmó, pero la cultura nunca envejece porque nació antigua, mientras que la técnica, a la que no se declara opuesto, envejece con el hombre (*ABC*, 4/VI/70). “El olvido de orden divino abre paso –como subraya Sciacca en *Filosofía y anti-filosofía*– una nueva y privilegiada verdad puramente técnica, exclusiva y tiránica, que crecerá desordenada y deformemente, y traerá el cáncer del economismo, del cientifismo, del sociologismo, de la tecnocracia, que tienen su filiación en la degeneración de la razón” (*ABC*, 14/II/70), escribe Vallet abundando en las ideas del italiano. Una sociedad masificada que da el primado a lo eficaz y es fácil de manipular por los tecnócratas. El Estado totalitario considera los esquemas del desarrollo económico y social como dogmas que es competencia suya formular y dirigir. La nueva clase tecnocrática aglutina a “los que entienden” por la virtud del Decreto que los nombra; la otra, constituida por el resto de la sociedad, incluye a “los que no entienden”, la masa despolitizada. Ellos son quienes determinan “cuál es el sector que debe desarrollarse urgentemente, distribuyen los créditos, tasan los precios, fijando los índices de crecimiento de éstos y de los salarios”. Para Vallet, una ideología tiránica y un mito engañoso habían nacido con la tecnocracia.

En 1972 publicará Vallet *Algo sobre temas de hoy*, libro cuyo capítulo primero lleva el significativo título “Del movimiento de la historia a la tecnocracia”. Remite al concepto que Donoso Cortés y Jaime Balmes tenían del progreso: el mayor grado de espiritualidad posible, el mayor grado de cultura y civilización posible, porque “progresar es civilizar, y civilizar es espiritualizar”. Y lo compara con “el adjetivo de antiprogresista que se emplea arbitrariamente para calificar al que “no crea en la racionalización por el Estado mediante la tecnocracia”. Vallet (1972: 268-9) insiste en la validez de los valores tradicionales, de recuperar las virtudes perdidas. Para él, es una ironía que se tache de antiprogresistas “a los defensores del auténtico progreso que afirman ideas y valores que, por ser eternos, son siempre actuales y permanentes contra los que arremete, precisamente, las ideologías del progresismo que cortan la libertad y atacan las raíces del progreso”.

Tres años después, aparece su obra más acabada, *Ideología, praxis y mito de la tecnocracia*, síntesis de sus aportaciones sobre el fenómeno tecnocrático. Oscurecida desde 1974 la versión española de la tecnocracia, se plantea desmontar el falso dilema entre ideología y tecnocracia (identificada como progreso), examinando ambos términos sin tergiversarlos, como se hace ya cuando se afirma que cuanto no es tecnocracia es ideología. Para ello arguye que las ideologías habían sido presentadas peyorativamente desde los tiempos de Marx, en cuatro sentidos que sintetiza R. Aron: las ideologías intentan más convencer que demostrar; la parte de ciencia que contienen se orienta a la persuasión; sus doctrinas tienden a la justificación de intereses de grupo; y son

parciales y partidistas, porque ignoran lo que les perjudica e insisten en lo que las favorece. El modo de salvarse del lastre que significan las ideologías, vistas peyorativamente, consistiría en un Estado sin “partidos ideológicos” que centrarse su acción en el bienestar de los ciudadanos. Vallet (1975: 302) acude a autores que oponen ideología y ciencia, especialmente Ugo Spirito, sintetizador del precursor de la tecnocracia Augusto Comte y de Giovanni Gentile, para quien “el saber que unifica el mundo es el científico, mientras que las formas de saber limitadas a determinadas zonas y a determinados grupos sociales son las religiones, las filosofías y las ideologías políticas”.

Vallet se centra en un concepto estricto de ideología, como concepción del mundo orientada a la práctica, para “fabricarlo” a tenor suyo y fundada en construcciones mentales; sin que importe que luego se empleen a veces, para su realización práctica, las técnicas más rigurosas. Emplea ese sentido para indagar si la tecnocracia obedece o no a una concepción ideológica. Vallet (1975: 303) adjudica a la tecnocracia siete notas distintivas: prima el desarrollo económico, la productividad y el nivel de vida; sustituye la ortodoxia doctrinal por una “ortopraxis”; emplea los métodos de las ciencias físicas y la técnica de la planificación; alienta la concentración industrial, la unificación del género de vida, la organización científica de los mercados y la automatización; propugna un poder ejecutivo fuerte y una organización burocrática que domine los proyectos de planificación y medios de propaganda para la conducción de la sociedad masificada; mitifica al progreso, situando su acción bajo el supuesto de que “cambio” y “progreso” van íntimamente unidos; registra los hechos para ordenar los acontecimientos, aunque se llegue a un fin no previsto, pues “lo desconocido de toda reforma es preferible al inmovilismo”. Partiendo de estos siete principios, Vallet entiende que la tecnocracia anula todo intento de comprender el orden del universo y lo sustituye por el análisis de la materia, descuartizada. Es una consecuencia de la filosofía empirista: la inteligencia se encierra en su función cognoscitiva del mundo material, excluyendo el conocimiento de los valores. Las realidades inmateriales son consideradas como abstracciones no científicas. En cambio, pone una fe ciega en los cálculos y en la seguridad de los datos de las máquinas. La visión fragmentada de la realidad, enfocada con lentes de visión cuantitativa y mecánica, es una de las características negativas que la tecnocracia ha heredado del mundo de la Edad Moderna. Se niega todo lo que no es materialmente experimentable y se llega a la aceptación, como verdad total, de lo que sólo es una verdad parcial y limitada.

De ahí uno de los defectos prácticos de la solución tecnocrática. Se busca el gobierno de los técnicos y expertos pero, como dijo Funes Robert, “el experto como gobernante tuvo que conformarse con lo que era posible encontrar; el experto no en gobernar, sino en conocer una parcela de la realidad; y le entregaron el poder de decidir”. Así, al elevarse a fines políticos objetivos modestos, que constituyen la misión del técnico, se produce la conversión en fines de simples

medios que deben estar subordinados, al más genérico del bien común. Cada técnico, al llegar al Gobierno, impulsa desmedidamente su “fin” particular, con menosprecio de los otros fines sociales, en vez de ser puesta su capacidad a disposición del político de visión global.

En la España de los 60, la tecnocracia habría pretendido racionalizar el progreso a través de los planes de desarrollo, mediante la ordenación estatal del crédito, el comercio, la fiscalidad, y la orientación de la enseñanza a los logros económicos y sociales. Todo lo que sea facilitar la racionalización es favorecido por la tecnocracia: la homogeneización social, la formación de la sociedad de consumo, la concentración de empresas, el dominio de los medios de comunicación social, el desarrollo de las grandes ciudades, el fortalecimiento de la burocracia, etc. Pretende elevar el nivel de vida mediante una racionalización, que se apoya en la prefiguración mental, elaborada en lo alto, para aplicarla mecánicamente a personas y cosas. En esto, tecnocracia y socialismo coinciden. El hombre, antes considerado como “animal político”, pasa a ser un “individuo calculador”, y bajo esta perspectiva el racionalismo trata de sustituir, el *orden natural* por el *orden racional*.

Vallet (1975: 304) ataca el exceso de racionalización sobre el que descansa este pensamiento, negando la posibilidad de cuantificar el orden social, el desarrollo y la justicia. Y se pregunta: ¿Cómo se valora lo que destruye la inflación que, a la vez, facilita el desarrollo medido por la estadística? También es una ilusión la mensurabilidad de la justicia distributiva, y hasta la econometría tropieza con dificultades que le impiden alcanzar el grado suficiente de cuantificación. El desarrollo económico, el incremento de la productividad y la elevación del nivel de vida, especialmente de la masa consumidora, son los fines que la tecnocracia persigue. Y para alcanzarlos procura la concentración industrial, la homogeneización del género de vida en aglomeraciones urbanas, la concentración de toda clase de medios en el Estado, especialmente del crédito, y la reducción de toda clase de resistencias al plan a través de impuestos, progresivos y redistributivos, incluidas las exenciones, primas, créditos a bajo interés y largo plazo y otras clases de beneficios a quienes se adhieran al plan. Esta concepción de los fines sociales parte de una serie de postulados y de axiomas de veracidad muy discutible. El primero de ellos la racionalidad del Estado altamente centralizado, lo que no significa el triunfo de la *razón* sobre la *sinrazón*, sino el imperio de la razón de unos pocos, situados en la cumbre, sobre la razón de todos los demás. Otro falso axioma es el que ha erigido el trabajo en *ídolo*. El trabajo es una causa eficiente, dirigido a un fin de gozo y bienestar. Por tanto, como causa se halla subordinado a su fin. No obstante, esta subordinación ha sido subvertida. Capitalismo y comunismo han divinizado el trabajo y han fundado el culto al trabajo en que éste es la base de la economía, y en que ésta *es todo*. Lo que, a su vez, ha traído la ocupación del vacío moral y social por

Leviatán, el Estado socialista o tecnocrático, que sustituye a las personas para arreglarles sus problemas.

La teoría económica ha venido a ser una amplia empresa de terrorismo intelectual, cuyo aspecto falsamente científico sirve de coartada para excluir todos los verdaderos problemas de la sociedad contemporánea. Su dinamismo sirve, en realidad, para legitimar la posesión del poder en manos de quienes dominan el aparato productivo, ya sea la tecnocracia capitalista, en los países occidentales, o la burocracia planificadora en los países socialistas. Se llega a erigir la productividad en criterio único de la salud de la sociedad moderna y de la solidez de la economía. Así hemos arribado a la *sociedad de consumo*, especie de estómago inmenso en el cual se diluye el hombre moderno, resultante de una economía al revés, que queriendo ser una economía de productores no puede asegurar su continuidad si no es constriñendo al consumidor a verificar un consumo global de la producción global, haciendo así del consumo un receptáculo gigante. Los tecnócratas serían los organizadores e impulsores de esta economía “al revés”.

Pero no sólo en las grandes empresas capitalistas y en las estructuras del socialismo leninista se habría producido el fenómeno. Gil Moreno de Mora lo ha titulado “el golpe de Estado de las Administraciones”. Cuando la cuestión económica cobra un papel decisivo y fatal, entonces los administradores se valen de sus funciones para condicionar las demás actividades, constituyendo un poder dentro del mismo Estado hasta apoderarse de él, adueñándose primero de la función de dictar los reglamentos de las leyes, y, después, de toda la iniciativa para la promoción y redacción de estas mismas.

En resumen, para Vallet la forma de operar de la tecnocracia (la dominación como objetivo de la praxis tecnocrática, la matematización como técnica de dominación tecnocrática, el empleo de la información de los ordenadores electrónicos, la ordenación de la praxis tecnocrática) lleva a una manipulación de los hombres (a través de la conciencia, la tecnocratización de la enseñanza, efectos de la manipulación de la conciencia y de la opinión, la manipulación genética del hombre), y de las cosas. García-Pelayo (1974: 123) se ha referido a este carácter de “político manipulador”, pragmático, oportunista, que tendría el tecnócrata.

12. La tecnocracia en los estertores del franquismo

Tras este repaso a la obra de un autor tan prolífico en el tema que nos ocupa, retrocedamos a la España de finales de los sesenta, que celebraba el primer cuarto de siglo de existencia profesional de los expertos en ciencias políticas y en ciencias económicas. Los fastos incluyeron una visita de Franco al Colegio Nacional de Economistas de España, acompañado de seis ministros del Gobierno. Era el reconocimiento a los logros de una profesión que había irrumpido en el quehacer científico y práctico del país con fuerza irrefrenable. *La Vanguardia* (26/II/69) describía “Lo que han hecho los economistas”, a saber, “despertar una conciencia nacional en torno a la necesidad y a la posibilidad de un desarrollo económico que de siglos parecía negado a nuestro país, condenado al pesimismo y a la resignación de vivir en una eterna mediocridad”. Los economistas españoles se habrían entregado a su trabajo con desinterés, “no han presentado factura alguna”, señaló López Rodó en su discurso del aniversario. No han cobrado dividendos de suficiencia en su trabajo de poner en orden, y después en marcha, todo el desarrollo económico español. Los economistas han sido no sólo los educadores de esa conciencia nacional en los gobernados, sino también los afortunados y eficaces asesores de los gobernantes. Para el periódico catalán, todo ello sin que “hayan sentido la tentación de escalar el poder de la tecnocracia, es decir, de alzarse con el poder político, a pretexto de detentar con realidad innegable, el poder económico”. Si en el orden práctico la labor de los economistas se ha concentrado en lograr el definitivo “despegue” de la vieja economía hispana, en el orden teórico han servido para importar y vulgarizar todas las fórmulas, módulos y estilos de la moderna ciencia económica, la que inició sus fecundas etapas revolucionarias con Keynes y sus discípulos. Así las nuevas ideas sobre las balanzas de pagos, el desarrollo económico, la contabilidad, los cálculos econométricos, han pasado a formar parte de nuestro común acervo económico.

1969 será el año en que la doctrina tecnocrática cristalice en el llamado “gobierno monocolor”. Y no precisamente porque antes no fuera muy fuerte su presencia en los gobiernos anteriores. Eduardo Álvarez Puga se preguntaba en *Mundo* (3/VI/69): “¿Crisis en el Gobierno?”. La tarea pública había quedado circunscrita a una minoría en teoría ideológicamente neutra, con su inevitable consecuencia: “la inflación tecnológica y el nacimiento paralelo de los llamados grupos de presión. En la escalada de los valores sociológicos, los políticos se vieron desplazados por los tecnócratas. Se olvidó que el técnico, por esencia, posee meramente un valor instrumental, al servicio y subordinado de los criterios políticos”. La técnica ayuda a satisfacer las necesidades, pero “escalonarlas según el grado de prioridades es algo que escapa a las competencias del técnico. Aquí es cuando debe entrar en juego el proceso político. Y con el pueblo como plataforma y soporte”. Todo producto de haber extendido apresuradamente certificados de defunción a las ideologías, con un olvido de la esencia misma de la naturaleza humana; pero las ideologías –entendidas como conjunto coherente de ideas sobre la vida y su circunstancia política – no han muerto ya que es algo consustancial al hombre.

Nada más conocerse la composición del nuevo gobierno comenzó a ser calificado de homogéneo o de concentración. Un periódico británico, después de expresar su júbilo por la caída de Castiella, “el hombre de Gibraltar”, definió al nuevo gabinete como “un equipo homogéneo de tecnócratas europeístas”. En la calle se dijo que había sido encargado del poder el Opus Dei. “¿Será aventurado deducir que la homogeneidad del nuevo gobierno se logra a través de López Rodó, el “hombre fuerte” del nuevo gobierno?” (*Nuevo Diario*, 4/XI/69). Mostraba el rotativo su extrañeza porque “todos los colaboradores menos uno, de un Ministro saltan a poltronas ministeriales. Los brazos suasorios de la comisaría del Plan de Desarrollo han alcanzado a vivienda, industria y agricultura”. Un comunicado de prensa de la Oficina de Información del Opus Dei en España aseveraba que “tan solo tres de los nuevos ministros está vinculado a la Obra”. Por el contrario, como gran derrotado aparecía Manuel Fraga, enemigo declarado de los tecnócratas.

Muchos especialistas interpretaron la composición del nuevo gobierno como una elección entre dos formas de conservadurismo: entre la derecha reaccionaria de los años treinta, cuando el fascismo era posible, y la derecha evolucionada de los años setenta. “A esta es a lo único que cabe aspirar”. Para Josep Meliá el gran debate de la España de 1970 no iba mucho más allá de esta contraposición de conservadurismos. “Tampoco en este aspecto el Gobierno es monocolor. La homogeneidad de gestión no impide la existencia de tendencias orientadas hacia uno y otro polo” (*Nuevo Diario*, 28/IV/70). Y dentro de este marco, la posición intelectual del autor de “El crepúsculo de las ideologías” representaba un factor político de primer orden.

Apenas un año después, en abril de 1970, cesará a petición propia el ministro de Obras Públicas, F. Silva Muñoz. La prensa se hizo eco de que “frente a las opciones que ofrece la tecnocracia, Silva Muñoz puede ser digno ejemplo para explicar a los españoles en qué consiste, cómo se desempeña y de qué sirve el ejercicio de la función pública” (*Informaciones*, 15/IV/70). El articulista afirma el carácter de “hombre político” de Silva Muñoz y reconoce que “no” ha sido un tecnócrata aunque ha sabido rodearse de buenos especialistas.

El nuevo curso que la administración Johnson dio a la guerra del Vietnam a partir de 1968 y la revuelta cultural de mayo de ese año, avivaron el interés por el tema. Eduardo Haro Teglen acusaba a Estados Unidos de haberse embotado de técnica perdiendo así sensibilidad política. “Esta máquina extrahumana de guerra ha fracasado. Ya no hay cerebros que la sustituyan. Se cantó demasiado pronto el final de las ideologías, se ha ensalzado antes de tiempo la primacía de las tecnocracias” (*Triunfo*, 22/III/68). Y el pensador liberal norteamericano W. Lippmann escribía en *Newsweek*: “La política de Johnson está basada en la idea de que 200 millones de americanos, en razón de su tecnología superior, pueden dirigir los dos tercios de la raza humana que habita en Asia”.

El concepto mismo de “revolución cultural” era puesto en entredicho en mayo del 68 porque “la tecnocracia, el rígido mundo de la eficiencia, está empujando a los ideólogos al incongruente camino de la revolución” (*La Vanguardia*, 28/V/68). Alborea “un mundo diferente, que admitirá a los tecnócratas, pero que expulsará a los ideólogos”, afirmaba Tomás Salvador en “La revolución cultural”. Parece consustancial que la cosa pública sea administrada por políticos pero él advertía que “parte de las riendas del poder están ya en manos de técnicos. Un ejemplo sencillo: el Ejército. Hasta no hace mucho, era dirigido por políticos. Poco a poco ha ido reclamando los derechos a administrarse a sí mismo”. Salvador recordaba el hermoso slogan que tuvo la revolución parisina: “La imaginación al poder”; calificada de revolución cultural. Sin embargo, “las fuerzas oscuras, escondidas, de la tecnocracia, economistas, banqueros, especialistas de toda laya, burócratas científicos, tienen ya la fuerza y aspiran a un dominio total de las estructuras sociales, ofreciendo eficacia, nivel de vida y estructuralismo, a cambio de olvidar los valores espirituales que puedan servir de freno a lo puramente económico. Todo esto ya lo dijo Fernández de la Mora en *El crepúsculo de las ideologías*, está implícito en las maniobras de los grupos de presión, en los bloques económicos y en el canto de sirena de la tecnología” (*La Vanguardia*, 17/IX/68).

Sobre el mismo tema abunda el libro *La quinta clase* de Wolfgang Kraus. Frente a quienes tratan de minimizar el fenómeno tecnocrático, el autor de *La sociedad tecnocrática* insiste en las profundas razones que lo justifican. La extensión de los poderes de los técnicos es la consecuencia de nuestra civilización calculadora racional, dominada por el mito y el culto a la eficiencia. La actividad

política no escapa a estas objetivas y generales exigencias de la sociedad industrial, de la civilización del bienestar, sobre todo cuando el Estado extiende su acción a sectores cada vez más amplios de la actividad social. Sin embargo, la intervención del experto tiene un límite impuesto por el carácter de la técnica y por la naturaleza misma de la política, que es continua valoración, visión global, inspiración e invención, mientras que la intervención técnica se mueve en el plano de los medios (*La Vanguardia*, 17/X/68). La misma vía de equilibrio sigue Juan Marcos de la Fuente en la valoración de la tecnocracia. La creciente intervención del técnico es una necesidad y un hecho positivo, pero puede convertirse en un peligro si no cuenta con una política competente.

Desde diciembre del año anterior se había puesto en vigor un nuevo Estatuto Orgánico que regulaba las asociaciones del Movimiento. Esta regulación del pluralismo político era, a todas luces, insuficiente y los intentos de su puesta en práctica darían lugar a situaciones que rozaban lo cómico. Vicente Gallego aludía a esos “milagros de la semántica: los partidos son asociaciones, la discrepancia es contraste de pareceres, la política es tecnocracia” (*ABC*, 5/XII/69). El término aún no había entrado en el diccionario de la RAE. Se habla de los tecnócratas como una clase redentora y se les atribuye un don superior: la homogeneidad. Sin embargo, se trataba de una anti-ideología, no de una comunidad de pensamiento. Ellos discrepan entre sí con mayor encono que los políticos, por creer que parten de bases técnicas indestructibles. Se había visto con la revalorización del marco, medida tomada por Kart Schiller, un político socialista, porque en la Europa occidental gobernaban los partidos, no los tecnócratas. El último tecnócrata alemán habría sido L. Erhard cuyo fracaso como canciller fue rotundo¹⁷. A la unidad de acción política se llega por otras vías, no por la seca y áspera de la tecnocracia.

Fue significativa la contrariada negativa del ministro de Industria, López de Letona, a que se le considerase tecnócrata, su tarea era mucho más política que técnica, dijo. Si un político no pertenecía a una familia concreta, la opinión pública buscaba un denominador común: tecnocracia. Si no hay tal grupo, ¿de dónde ha salido la disciplina y homogeneidad de este gobierno? Ellos hablan de

¹⁷ La crisis gubernamental de Bonn se produjo en 1966 al dimitir el canciller Erhard la jefatura del Gobierno de la R.F.A., por razón de presiones interiores de su propio partido, la Unión Cristiano Demócrata. Quizá cabría la razón de fondo de su fracaso: que es mejor economista que político. El caso de Erhard sería un ejemplo acerca del peligro de confiar demasiado en la tecnocracia. Hay que distinguir entre los “materiales” que la política maneja y lo que es la verdadera política. La política ha de desarrollarse a través de “materiales” que se sitúan en el campo de la economía. De ahí que los economistas sean los técnicos más necesarios para la acción política. Ellos proporcionan las “primeras materias” básicas en las cuales el político ha de ejercer el poder de decisión: un poder que corresponde al político y no al técnico. Así, en las guerras de religión del siglo XVI, los teólogos eran los “técnicos”, pero quien decidía eran, también, los políticos (*La Vanguardia*, 27/XI/66).

que “tecnocratizar” es poner antifaces a la política y los políticos. A estos se les achacan todos los males pero es el menos malo de los sistemas de gobierno.

El caso MATESA había estallado en agosto y se creó una comisión investigadora. La campaña de la prensa del Movimiento se dirigió tanto a los responsables de la empresa como a los ministros cercanos al Opus Dei, acusado de ser copartícipes de la operación fraudulenta. La presión llevó a que el ministro de Hacienda Juan José Espinosa San Martín presentara su dimisión en octubre. La crisis política era inminente y se daba por hecho la remodelación ministerial. El periodista Juan Ferrando diagnosticó el “Fracaso de la tecnocracia” tras el debate que se había desarrollado en las Cortes para poner en marcha el II Plan de Desarrollo. Vista la experiencia del I Plan, Ferrando apuntaba la falta de cohesión del equipo tecnocrático de López Rodó, cuyos distintos departamentos compara con mónadas leibnizianas. “No se comprenderán y entrarán, por tanto, en colisión; de ahí a la inoperancia y a la anarquía hay un paso”. Pero el problema era más hondo porque “la confianza personal, en la democracia debe unir a los titulares del poder político y a los gobernados, no podrá darse en un supuesto régimen tecnocrático” (*Madrid*, 28/XII/68). Los técnicos encerrados en su torre de marfil, en sus ideas de eficiencia, estarían sordos para auscultar el pulso de la opinión pública. No todo consistiría en hallar soluciones “eficaces”, sino que estas deben ser comprendidas y aceptadas por los gobernados, pues, en caso contrario, éstos las convertirán en inoperantes. El ideal sería la forma mixta, un reparto de competencias entre técnicos y políticos, pero teniendo estos últimos el control. Se trataría de sintetizar los aspectos positivos de los políticos y los técnicos, de la democracia y de la tecnocracia. El método de gobierno tecnocrático deberá complementar al democrático, pero no suplantarlo, porque se gobierna a hombres, no a autómatas.

Esta suplantación es la que preconiza el gobernador civil de Navarra cuando, en la toma de posesión del alcalde de Pamplona, abogaba por una despolitización de la vida municipal. Sus palabras reflejaban el carácter tecnocrático en el que había venido a desembocar el país tras un proceso que se inició hace ya algunas décadas. Para él, “los temas personales y las cuestiones de divergencias políticas o económicas deberían quedar en la puerta de entrada de este Ayuntamiento. Aquí se viene a laborar por la ciudad de Pamplona, por su prosperidad y por su progreso” (*La Vanguardia*, 13/XII/69). Los problemas deberían resolverse “con estudios, sin alharacas, con profundidad, en la intimidad de los despachos y en la intimidad de los salones de sesiones, pero deberían nunca salir a la calle y dividir a los ciudadanos”. Según lo dicho, la prosperidad de una ciudad sería independiente de formulaciones políticas o económicas. Pero, ¿es que para conseguir esa prosperidad no han de aplicarse unos criterios políticos concretos? ¿Es que la política no es una opción irrenunciable a la hora de afrontar los problemas de la “res pública”? Evidentemente las respuestas son afirmativas, pero entonces cabe añadir si para alcanzar la prosperidad existe una receta, una

alternativa solamente, única, de evitar cualquier divergencia. Sostenerlo supone negar el legítimo pluralismo incurriendo pura y llanamente en actitudes dogmáticas. La consecuencia inmediata en este caso es clara: la calle –esto es, el ciudadano, única justificación, de que exista el municipio– no tiene por qué enterarse siquiera de cómo se resuelven sus problemas. Frente a tal concepción de la vida local –que no parecía andar muy de acuerdo con la reciente implantación de una representación de orden político a través de la Familia, el Municipio, el Sindicato–, uno tiende a opinar que el auténtico desarrollo de la sociedad tiene su origen en el pensamiento de los hombres cuando este brota de la calle, de la base; cuando puede ser analizado a la luz pública. El hombre o es libertad o es muy poco.

La idea era recogida años después por Pedro Ariol, cuando habló de la figura que se perfila del alcalde-gerente y le contraponía la del alcalde-político en su más amplia acepción. Ariol fustigará “las divinidades que la sociedad va creando en su neo-paganismo, la eficacia, que estaría llena de brazos como Visnú y los tecnócratas irían a quemar incienso al pie de la imagen” (*Tele-Express*, 8/XI/71). Es “el hombre normal, que no sabe matemáticas ni estadísticas, que no va vestido como el tecnócrata y uno piensa en la espesa densidad humana de la sociedad, con todos sus problemas y conflictos. Entonces cree uno que el alcalde debe ser densamente humano, es decir densamente político”. El problema del hombre es un problema de equilibrio y para llevar adelante la convivencia es necesario que el cerebro y el corazón funcionen en sincronía “¿Cerebros solamente? ¡Puaff!”, concluye Ariol.

Otro ejemplo que apareció en prensa era el de la eficacia que supuestamente estaba teniendo el alcalde de Madrid entre 1965 y 1973, Carlos Arias Navarro. Abogaba Lorenzo López Sancho por no desperdiciar la experiencia de hombres que habían dedicado parte de su vida a la política y no dejar que vuelvan a casa. Canto al político profesional. “Los países no pueden ser regidos por aficionados. Una cosa es la tecnocracia de empresa privada y otra la tecnocracia política. La necesidad de los equipos es innegable” (*ABC*, 29/I/71).

El sociólogo Amando de Miguel ahondaba en las contradicciones de la tecnocracia porque “tan disparatado y peligroso resultaría un gobierno compuesto exclusivamente por hombres de ciencia o de técnica, como un periódico deportivo redactado exclusivamente por futbolistas” (*ABC*, 14/II/70). Es mejor solución que un periodista aprenda algo de economía para no meter la pata, que un economista escribiendo las crónicas. “Habría que procurar que los políticos se hicieran tecnócratas o que los tecnócratas se hicieran políticos”. Cuando se ha tratado de modificar las estructuras gubernamentales y administrativas de los Estados, tan válidos son los gobernantes que han enriquecido su política de gobierno con una discreta capacidad técnica, como los técnicos que muestran afición por la política. El ministro de Información y Turismo hacía eco al argumento en la Asamblea

Nacional de Asociaciones de la Prensa, donde recordó que “con ser importante la capacitación profesional del periodista no debe sobrevalorarse indebidamente, y de aquí es la mejor demostración de que no cabe otra tecnocracia que la subordinada a la política” (*ABC*, 26/V/70).

Buena parte de la acción política, la económica y la financiera se habían desplazado de la autoridad atribuida a los políticos para “despolitizarse” y ser sometidas a la competencia y a la eficacia, las dos grandes palabras carismáticas de la tecnocracia. Al margen de los reproches habituales a la tecnocracia, basados en la actuación secreta, olvido de la opinión pública, esquemas abstractos e ignorancia de las preocupaciones locales, este fenómeno existía, y en manos de pocos individuos. Michel Debré aseguró que los “sabios” que constituyen la tecnocracia decisoria en Francia no llegaban al centenar; y L. Guttsman calculó unos 350 para Inglaterra. Las cifras citadas para España, según un estudio publicado en la revista *Mundo*, era de 120, de los cuales 93 son funcionarios. Para el Ayuntamiento de Barcelona la cifra de los que gobernaban a la ciudad no era superior a 30.

Esta necesidad de los expertos había sido reconocida sobre el supuesto de que “sabrían mantenerse en su puesto”; en cierto modo, los expertos formaban la elite de los “cuellos blancos” a los que se refería el sociólogo norteamericano C. Wright Mills. Se trataba de gente sumisa, al par que eficiente. Lo que se denunciaba en la década de los setenta era la emancipación de los expertos, su pretensión de erigirse en dueños y señores de la vida de los Estados y de las empresas. Y frente a este estado de cosas, suele reaccionarse diciendo que los políticos son irremplazables por los técnicos. Cuando se habla tan críticamente de los “tecnócratas”, merecería la pena recordar lo que dijera un avisado político francés, refiriéndose de pasada al pintoresco demagogo que fue en Francia el librero Poujade, “un tecnócrata no es más que un técnico visto por un poujadista”. No parecía que en la España de los setenta conviniera la floración de poujadistas, de personas elementales dotadas de un ligero barniz –incluso con aplicaciones del desacreditado método del “caso”.

Lo cierto es que el tipo de aperturismo político que se estaba preparando, tenía que conducir necesariamente a una proliferación de los “poujadismos”: si el tamiz de la libertad es demasiado pequeño sólo la política pequeña puede pasar por el mismo. Era un hecho que, entre aquellos que en los comienzos de los 70 ejercían un determinado grado de poder político, la gran mayoría se llamaban “técnicos” a sí mismos o eran llamados “tecnócratas” por los demás. Dejando también de lado otra “boutade” asimismo de origen francés –de Alfred Sauvy – según la cual un “tecnócrata es un técnico con quien no se está de acuerdo” definición más explícita pero también recusable por el juicio “ad hominem” que lleva involucrado, parece evidente que existían dos concepciones antitéticas de la

tecnocracia, vinculadas, respectivamente, a la diferente función que cada una de ellas atribuye al técnico dentro de la sociedad contemporánea.

Según la primera concepción –de origen norteamericano–, “tecnocracia” significa “organización y gobierno de un país por técnicos competentes, para el bien de todos”. Así, la tecnocracia constituiría el régimen ideal en el que los técnicos, a través de su inefable competencia, gobernarían al resto de ciudadanos. ¿Cómo pronunciarse contra un sistema tan mítico y tan místico, que no ha hallado nunca, en ningún país, su manifestación concreta? Aunque norteamericanos y rusos son propensos al mito y a la mística de la técnica, puede afirmarse que mientras subsista un mínimo de democracia, los técnicos –por competentes que sean– no se hallarán nunca en la cumbre del poder. Porque podríamos decir que la democracia constituye un sistema basado en la suspicacia de que los técnicos –al igual que los demás mortales– pueden ser incompetentes o poco honrados. Aun admitiendo que la democracia no es un sistema ideal para elegir a los técnicos más competentes, sí lo es, en cambio, para evitar que los incompetentes permanezcan indefinidamente en el poder. Usando términos económicos podríamos decir que la democracia constituye un sistema para evitar el oligopolio de los tecnócratas. Si España no encuentra políticos –y para ello tiene que haber vida política– nuestro futuro es poco esperanzador. La sociedad transparente es, por definición, una sociedad politizada. Y la deserción política no es sólo un “pecado grave” (como diría Manuel Jiménez de Parga): es, incluso, un pecado “contra natura”.

Películas como *Fahrenheit 451*, de François Truffaut, estrenada en 1970, eran una llamada de atención ante la deshumanización de la tecnocracia. Pero a estas alturas la tecnocracia cotizaba muy a la baja en los mercados políticos. El apoliticismo a ultranza había instalado la idea de que el político resultaba inoperante y debería ser sustituido “por gestores administrativos y pequeños industriales y, en general, por personas honradas, trabajadoras y capaces de imprimir a la cosa pública ciertos criterios de gestión empresarial” (*Madrid*, 24/XI/70). Esta sorprendente opinión no solo sorprendía sino que asustaba. “Todo el mundo sabe que desde hace catorce años, si nuestros dirigentes han introducido algún elemento nuevo en la política española, éste ha sido el intento de aplicar principios de gestión empresarial al gobierno del país. Sin embargo, ahí están los hechos. Asistimos a la revolución tecnocrática. Los altos tecnócratas son mirados con prevención debido a su apariencia de políticos y el principal reclamo electoral consiste en convencer a los electores de que uno manejará la cosa pública como si de una gestoría o un taller se tratara”. La pescadilla de la despolitización se mordía ya a cola y cuando acabe de engullirla sólo quedaría el vacío absoluto.

A comienzos de 1971 los rumores de una crisis ministerial desataron una polémica en prensa en la que se contraponían los términos de Gobierno de concentración o “Gobierno representativo”, al de “Gobierno homogéneo”; en el

fondo, la cuestión puesta en tela de juicio era la de la representatividad, aunque encubierta bajo la exigencia, siempre atractiva, de la eficacia. A los editoriales iniciales del matutino *Ya* –órgano de “La Editorial Católica” –, siguieron otros, a cargo de *Pueblo*, de *Nuevo Diario* y de *Informaciones*. *Ya* (11/I/71) volvió a la carga, y al día siguiente era *Pueblo* el encargado de contestarle, dedicando al tema las tres cuartas partes de su “Tercera página”. En esencia, los dominicales del *Ya* podrían sintetizarse en los siguientes puntos: los conceptos de concentración política y de eficacia no son antagónicos; la eficacia y la homogeneidad no son sinónimos; un ministro es competente –o al contrario –, con independencia de que el Gobierno sea homogéneo; hay que distinguir entre la eficacia de los ministros, uno a uno, y la eficacia del Gobierno como conjunto. Estos puntos de vista no eran compartidos por el vespertino *Pueblo*. Para el portavoz de la Organización Sindical, “lo que primeramente exige la opinión pública es eficacia” (12/I/71). Y sustentaba las siguientes tesis: haciendo excepción de los ministros militares, los componentes del actual Gobierno, muchos de ellos tachados de tecnócratas, no son otra cosa que políticos de fuste; no podemos aceptar la equívoca distinción entre el arte de gobernar y el arte de administrar; entremos en el juego político de los hombres, pero no repitamos esa clasificación no verdadera de políticos y tecnócratas: todos los que están en política, son políticos. Para *Pueblo* no dejaba de ser curiosa la comparación entre el actual equipo gobernante y el anterior equipo de la secretaría general, del cual cuatro puntales básicos ocupaban puestos claves en el nuevo gobierno. “Otros ministros pertenecían, en su vida religiosa, al Opus Dei, y no faltan quienes proceden de los equipos ilustres de la tradición, de la monarquía alfonsina y de la Acción Católica. ¿Dónde está, pues, la tan traída y llevada homogeneidad? En el programa de Gobierno, como es lógico notorio”. En lo que sí coincidían los dos medios era que en ese tiempo de incertidumbre merecía la pena la colaboración de todos, tecnócratas y “políticos”.

Otros medios apuntaban que el Gobierno no era de coalición, sino simplemente homogéneo. “Varios ministros son incoloros, o como se les suele llamar tecnócratas, que no es necesariamente una expresión despectiva” (*Aragón Express*, 1/II/71). El núcleo central mayoritario era el aglutinado por López Rodó, con López Bravo como otra figura estelar. “Son hombres cuya adscripción al Régimen no se realiza a través de ninguno de los sectores originarlos del mismo (...) estamos ante el fenómeno quintaesenciado de la tecnocracia, el desarrollismo y el llamado crepúsculo de las ideologías”.

En la polémica terciaron algunos militares de alto rango. El teniente general Rodrigo Cifuentes, capitán general de la IX Región (Granada), atacó a los que llamaba la “masonería blanca”, refiriéndose a los tecnócratas miembros del Opus Dei que estaban entonces en el Gobierno, y a los sectores más politizados de la Iglesia española. Fue castigado por sus superiores con el paso a

la reserva, de la que no salió hasta junio de 1974 cuando fue nombrado Inspector General de Movilización del Ejército.

Con razón decía el ministro de Asuntos Exteriores, López Bravo, en sus declaraciones a la BBC Londres, que si un día pudo ser considerado como “tecnócrata”, ya se le debía ver como “político” (*La Vanguardia*, 4/II/71). Tiempo atrás, ya se había negado el ministro a ser tildado de tecnócrata. En entrevista que le hizo en TVE (20/X/65), Emilio Romero bromeó porque “sé que a usted le sienta como un tiro que le llamen tecnócrata”, y le preguntaba: ¿De qué manera se puede ser algo que no sea tecnócrata, político, en un ministerio como el de Industria? López Bravo le respondió: en el caso esta formación profesional es técnica y tiene una aplicación directa al caso de la industria, pero yo creo, al mismo tiempo, que hay que eliminar este calificativo de tecnócrata. Hoy día es muy difícil hacer política sin tener una técnica política o sin tener una sólida formación profesional. Para tener una responsabilidad política se debe dominar la parte técnica. La política antes era mucho más arte que permitía la improvisación. No se puede irrumpir en la política sin un bagaje de conocimientos sólidos.

En ese viaje a Londres le habían acompañado otros dos ministros también considerados tecnócratas, López Rodó y Sánchez Bella. Contra ellos se revolvía Manuel Fraga en el ICADE al disertar sobre “Técnicos y tecnocracia” porque entendía que el concepto estaba trufado de tópicos y mitos. La tecnocracia, como todo otro proceso social, era ambivalente. “Al lado de productos buenos, como la precisión, la continuidad, la seguridad, la impersonalidad, tiene también resultados menos buenos, como la rigidez, el detallismo o ritualismo, la falta de iniciativa, el espíritu de cuerpo, la tendencia a crecer sin relación con los resultados” (*ABC*, 28/III/71). La cuestión clave era cómo mantener las máximas ventajas de la racionalización y tecnificación de los servicios públicos, sin mengua de control político. Entre el inmovilismo al que llevaba una combinación de integrista intelectual y de tecnocracia administrativa, y el aventurismo de ideologías liberales, Fraga creía necesario buscar un camino de verdadera acción política a la altura de las necesidades de su tiempo. Los análisis de sociólogos como Bell y Lipset, que apoyaban un supuesto crepúsculo de las ideologías, eran solo parcialmente aplicables a España. Sería triste que, después de superar las viejas dicotomías del pasado (derecha-izquierda, capitalismo-socialismo), se plantearan nuevos conflictos porque los tecnócratas vinieran diciendo: “Aquí estoy yo con un par de libros, que me guardo”.

Como él, Blas Piñar en la concentración falangista en la casa donde nació José Antonio, arengó: “Convoco a la juventud española frente a los tecnócratas” (*La Vanguardia*, 1/IV/71). Para muchos falangistas realmente nunca había estado la Falange en el poder, y menos a la altura de 1971. El consejero nacional y procurador en Cortes, Roberto Reyes, censuraba la tecnocracia por hacer “una

política exclusivamente consumista, sin poesía, y que produce un vacío en las mentes jóvenes” (*La Vanguardia*, 1/VI/71). Preguntado si consideraba “materialistas a los de la Obra”, respondía que “la política que hacen “se traduce en materialismo, pese a que sus postulados son espirituales”.

En 1971 había publicado L. López Rodó su libro *Política y desarrollo*, una auto-justificación de las políticas que venía desarrollando en la Comisaría desde hacía diez años. Un artículo de José M. Ruiz Gallardón en el *ABC* (28/I/71) salía en defensa de las políticas del hombre que más críticas contra su obra suscitaba en la España de comienzos de los setenta. No le faltaba razón en su análisis. “De pronto, un tanto misteriosamente, aparece un término de uso nuevo, como un mote. Las gentes lo manejan, usan y abusan de él y, a la postre, acaban por inutilizar semánticamente el término. Así ha ocurrido con la palabra tecnocracia”. Sus palabras avalan la tesis que venimos defendiendo de que el uso del término y concepto de tecnocracia poco tiene que ver en España con los gobiernos llamados de “tecnócratas del Opus Dei”, y sí con la pugna entre azules y el grupo de López Rodó a partir de 1969. De ahí que se refiera a “una nueva especie de hombres políticos a los que se desprecia por ese simple mote”. Para él era un error identificar a los tecnócratas con “los despreciadores de la política”. A base de echar agua (la técnica) al vino de las grandes ideas (la política), se termina por adulterar esta última. Era con soluciones, y no con demagogia, como se movía a las personas. Lo demás, y repite unas palabras de López Rodó, es “caer en la retórica de los viejos sistemas, tan exuberantes en discursos como impotentes para satisfacer las reivindicaciones de un pueblo exasperado por la miseria”. Concluye Ruiz Gallardón que tecnocracia es “proclamación de un principio básico: la racionalización sincera del siempre protegido mundo de la política”.

Poco después apareció una segunda crítica, también elogiosa, de su correligionario F. Pérez Embid. “López Rodó demuestra en su libro que él ha hecho siempre fundamentalmente política, pero política con datos, política sobre datos, política que se contrapone a esa política verbalista que es la política del oportunismo, de la ligereza y de la ineficacia” (*ABC*, 18/IV/71). En su opinión, el libro, además de una rendición de cuentas por sus años de política, venía a mediar en la polémica, justamente llamada infantil por J. Romeo Gorría, sobre política y tecnocracia.

López Rodó reiteró que “la etiqueta de ministro tecnócrata que pertenece al Opus Dei es equívoca”, pues parece indicar que el ministro tecnócrata está en oposición aparente al ministro político. “Yo rechazo el calificativo de tecnócrata, puesto que me siento naturalmente inclinado e interesado en la política” (*ABC*, 30/I/71). Pero si la expresión se refería a quien tuviera una carrera universitaria o una cualificación profesional especializada, en cuanto se opone a los profesionales de la intriga política, “entonces sí me considero un tecnócrata, pues soy profesor universitario y mis actividades docentes y profesionales han sido

antes tan intensas como lo son ahora mis actividades políticas. Creo en una política de realidades y no en una política hecha de palabrería”. Para López Rodó, pertenecer o no al Opus Dei no añadía ni quitaba nada a la imagen y actuación de cualquier político dentro o fuera de España. “Hay miembros del Opus Dei con cuya actuación y pensamiento político no estoy de acuerdo y que han criticado abiertamente mis propias actividades políticas. La gran mayoría de los ministros tecnócratas no son miembros del Opus Dei”.

La tensión entre azules y tecnócratas escondía, para muchos, un cierto autoritarismo en ambas tendencias. Los tecnócratas hablan mucho de apertura “pero las puertas que abren solamente son puertas entreabiertas y por ellas no pueden pasar todos” (*El Correo Catalán*, 1/III/71). Los azules predicaban con altisonancia la igualdad, pero en la ortopedia que unos y otros aplicaban, no siempre salía bien parada la dignidad humana. “Unos son los autoritarios de la economía y otros de la política. Y lo fecundo –para el alma y para el cuerpo–, es la libertad”. La libertad, con un Estado fuerte, pero democrático, para que nadie la monopolice: ni los señores feudales de la economía ni los señores feudales de la política. “Ni autoritarismo blanco, ni autoritarismo azul”, concluía Wilfredo Ospina.

Curiosamente, a través de caminos tecnocráticos pudieron abrirse camino posiciones que tiempo atrás se hubieran considerado de oposición. Es lo que intentaba Enrique Fuentes Quintana, director del Instituto de Estudios Fiscales, desde las páginas que él mismo editaba de la revista Hacienda Pública Española. Fuentes aboga por derribar las barreras existentes entre una racional estructura fiscal y la estructura económica, como vía hacia la reforma política. Esto confirma cómo desde dentro de la dinámica interna de la teoría y la práctica de la tecnocracia podía filtrarse hasta los aledaños del poder posturas que, en otras latitudes, pudieron ser calificadas de subversivas. La propuesta fiscal de Fuentes Quintana contradecía la situación del momento y contestaba a aquella otra que en su día defendió abierta e impopularmente Navarro Rubio, un ministro de Hacienda “tecnócrata” que cantaba las bondades económicas y sociales del impuesto indirecto.

Luis Apostua aportaba en *Le Monde* (4/V/71) una visión opuesta a la de Fuentes Quintana. Propone el desarrollo de las asociaciones políticas y la mayor libertad de los sindicatos oficiales, como tareas esenciales de un equipo que releve a los tecnócratas, que se habían presentado como liberales en el exterior, pero practicando un inmovilismo total en el dominio de la organización política y sindical. Hay que gobernar teniendo en cuenta la opinión general, y no con un claro desdén por el público, como es el caso de los tecnócratas. Los políticos estaban para servir al pueblo y no al revés. En la misma línea se manifestó José María de Areilza en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿El proceso constante de tecnificación de la sociedad que persigue la tecnocracia es

incompatible con la democracia?, se preguntaba el futuro ministro de Asuntos Exteriores. Creía inexacto pensar que el sistema democrático fuera a revelarse inadecuado en la era tecnológica. Por el contrario, la esencia democrática ha de autentificarse mucho más, para que los Gobiernos no sean impermeables a los problemas reales de los gobernados, nunca reflejados del todo en la ordenación tecnocrática. “Hacer compatible la ciencia con la democracia y modificar sustancialmente los métodos y funcionamiento tradicional de esta última son las tareas fundamentales del hombre de Estado de hoy” (*El Correo Catalán*, 18/V/71). Esto es lo que no entendían, o no querían entender, los llamados tecnócratas.

La mañana del domingo 15 de agosto de 1971, Richard Nixon declaró la no convertibilidad del dólar en oro, y terminó de manera unilateral con el acuerdo de Breton Woods. Desde ese momento, todo el comercio mundial se llevaría a cabo usando los dólares que imprimía el tesoro de Estados Unidos, que no es más que dinero fiduciario, o simples papeles. Esto se unía a la rampante inflación que afectaba a Occidente, y ambos problemas trascendían el campo de la economía, no podían ser solucionados por los tecnócratas. Son problemas que requerían la intervención de los políticos. Confiar la creación de una moneda europea a los tecnócratas eran ganas de perder el tiempo y rehuir responsabilidades. Al menos en nuestro país, la crisis del dólar –y la relacionada del petróleo– supusieron el fin de la tecnocracia en su versión hispana.

El ministro de Industria, López de Letona, se defendía en Club Mundo arguyendo que por mucho que se hable de un ministro técnico o político, un ministro era fundamentalmente político. “El ministro de Asuntos Exteriores es ingeniero y el de Obras Públicas es diplomático. Yo soy un técnico al frente de un Departamento técnico, y por esta razón es posible que aparezca como tecnócrata” (*La Vanguardia*, 28/IX/71), dijo el ministro, que explicó seguidamente un poco de su currículo, recordando que había llegado a la política a través de la Comisaría del Plan de Desarrollo. “Desconfío de los apolíticos. En todos los órdenes de la vida, cada uno estamos haciendo constantemente política”. La aplicación de cualquier medida económica exige en última instancia una decisión política.

Juan Domingo Alós se refiere a las consecuencias históricas de la tecnocracia en España, que “constituyó históricamente la palanca que hizo saltar una estructura política monocolor y cerrada. Pero para ello renunciaba a hacer otra política que la de castramentarse en el poder, cerrar el cuadro y constituir un sistema hermético que, si bien ha servido para fortificar al Régimen, le ha privado de la imaginación necesaria para hacerlo evolutivo” (*Madrid*, 9/X/71).

M^a Asunción Guardia entrevistaba a Manuel Fraga a finales de 1971 sobre su experiencia en el gobierno y su relación con los tecnócratas. El ex ministro de Información y Turismo calificó a la tecnocracia de “teoría autista, la última

versión de todos los elitismos”, que “no admite la necesidad de una representación, que no tiene en cuenta la revisión y la crítica” (*La Vanguardia*, 3/XII/71). Entendía que en su gestión como ministro había sabido “entender el papel de los técnicos y dialogar con ellos, para arrastrarlos y entusiasmarlos”. Pero no se creía capacitado para repetir experiencia tan desagradable, desde su punto de vista. Un tecnócrata “nunca entenderá que hay materias opinables”. Lejos de asumir una “visión tecnocrática, que intenta reducir todos los problemas a cuestiones de estadística y de estómago”, afirma que todo país “necesita un propósito trascendente, para que la vida se justifique, un pueblo ha de saber lo que quiere, y a dónde va”, y eso no lo da la tecnocracia.

Muchos hablaban de la conferencia pronunciada por Fraga, estableciendo un paralelismo con la que días atrás diera el ex ministro Silva Muñoz. La identidad se resumía en la frase: “la política no es la técnica”, y era una crítica directa a la tecnocracia, pero no como sistema sino como medio cuando la técnica va desprovista de todo otro medio –como el político– de gobierno; ya que “el problema de gobernar a un pueblo no se agota ni siquiera empieza por satisfacer sus necesidades materiales, dándole una óptima administración”, si no la acompaña lo que Fraga llama una “mínima satisfacción espiritual y cultural que no es posible sin un mínimo de libertad” (*Ya*, 30/XI/71). López Rodó hablaba del “desarrollo económico, social, cultural y también político”, porque “una sociedad despolitizada y sin ideales incurriría en la vida mínima de ciertas especies de animales que caen en la modorra”. Pero el reconocimiento de las insuficiencias de la estricta técnica como instrumento de gobierno comenzaba a ser general. Según Fraga, la ideología tecnocrática había “rebasado su punto más alto ante la indigencia en que ha dejado a la legitimidad de los regímenes que la han adoptado, privados de toda representación válida y en proceso creciente de alienación de numerosos sectores sociales; lo que está dando lugar, en todas partes, a una revalorización de los sistemas políticos”.

El mismo Fraga desarrollaba similares ideales en la presentación de su libro “El desarrollo político”. Preguntado sobre el Opus Dei, respondía: “No tengo nada contra los institutos seculares. Pero no debería permitirse a sus miembros participar en asuntos políticos y de alta economía. Y lo ocurrido en España estos últimos años prueba que no estoy equivocado. Con miembros de esta Obra me he llevado muy mal y pienso continuar haciéndolo” (*Diario de Navarra*, 7/XII/71).

El ex ministro de Asuntos Exteriores había señalado a los tecnócratas como culpables de una muy peligrosa despolitización de la política. La civilización tecnológica traería una cierta inhibición ante los problemas concretos de la política; el absentismo político se convierte en una especie de desprecio por la política que pasa a ser considerada como asunto de profesionales. La tecnocracia era una respuesta concreta a tal inhibición frente a las necesidades de personal

técnico especializado en los puestos públicos. Claro que con la bandera de la tecnocracia puede hacerse política, y en España se vio que “suele hacerse”. Esta despolitización, según los estudiosos de la ciencia política, suele presentar un serio peligro: según las circunstancias críticas por las que atraviesa un país, “los despolitizados se politizan”. Y esta repentina politización, acaecida en un ambiente sociopolítico de abandono, sin cauces de participación activa como en nuestro país, producía extremismos de toda índole.

En 1972 se seguía hablando mucho de la tecnocracia para significar la deformante presión ejercida por los funcionarios administrativos o los técnicos, cuando antepoñían las mociones de su propia formación profesional a los intereses generales del bien común. Así, Francisco Moreno, conde de los Andes, en sus *Ensayos políticos* defendía que la democracia pura es la inorgánica y que los partidos políticos son órganos artificiales entre el individuo y el estado. “Cuando no existen los partidos, el ejercicio del Gobierno cae en las manos desdichadas de la tecnocracia. Los que defienden la conveniencia de los tecnócratas para las lides políticas, están en la misma línea que los marxistas, para los que todos los problemas se reducen a supuestos materiales. El progreso económico deber ser consecuencia, pero no es la causa del progreso humano” (*ABC*, 30/XI/72). El argumento de Moreno Herrera era refutado por el antiguo Ministro de Hacienda y ex Gobernador del Banco de España, Mariano Navarro Rubio: “¿por qué no llamar, de un modo paralelo, politocracia a la deformante presión ejercida por los grupos políticos profesionales?” Con ello ataca el *status* especial de los políticos de oficio que influía en la conducta de los gobiernos y condicionaba sus decisiones. Aunque otro “tecnócrata”, Gregorio López Bravo, ministro de Asuntos Exteriores, decía a Indira Gandhi, en la firma del tratado indio-español sobre usos pacíficos de la energía atómica, que “los políticos tendemos a olvidar que nuestra misión es procurar el bien del hombre. La tecnocracia propende a satisfacerse a sí misma, con sus logros fríos, y el hombre desaparece del haz luminoso” (*ABC*, 16/XII/72).

Este peligro de anteponer los intereses personales a los públicos se percibía muy vivamente en el ámbito jurídico. Bonifacio de la Cuadra entrevistó a Antonio Pedrol Rius, presidente del Círculo de Estudios Jurídicos, y le preguntaba: ¿Cree que los sectores tecnocráticos del país están dispuestos a realizar esas modificaciones necesarias? “El técnico suele escuchar con poca simpatía la exposición de teorías diferentes o contrarias a las que él profesa porque se considera en posesión de la auténtica verdad. Cuando el técnico se convierte en tecnócrata, las consideraciones de prestigio endurecen todavía más su actitud” (*Criba*, 6/IV/72) respondía. Por eso creía necesario que “los expedientes decididos por el tecnócrata sean examinados por los juristas para que éstos puedan señalar los extravíos a los que algunas veces conduce el excesivo apego a una determinada teoría y puedan corregir los excesos del tecnócrata, que cree estar en comunicación con la divinidad los jueves por la mañana”. Pedrol Rius se

mostraba optimista ya que, a medida que el tecnócrata se convierte en político, “va admitiendo más fácil el papel crítico del abogado y de la función revisora de la Magistratura, porque el verdadero político sabe que una sociedad no se dirige solamente con las reglas de cálculo, y que las acciones del hombre no podrán ser calculadas nunca exactamente por una computadora”. Por esto, en los congresos de los futurólogos se estaba programando la “humanización” del tecnócrata.

Lo mismo podría decirse del campo económico. Preguntado Carlos Ferrer Salat, presidente de la CEOE, sobre dónde había mejor ambiente respecto a España, en la Comisión o en el Consejo de Ministros de la CEE, respondía que “en la Comisión porque son más tecnócratas, más independientes políticamente y su profesión consiste en crear y unificar Europa” (*La Vanguardia*, 8/III/72). La formación de los hombres de empresa a los que Ferrer Salat representaba tenía lugar en las escuelas de negocios, como el ESADE, cuyo director declaró que su tarea no era formar tecnócratas. En esa sede tuvo lugar la I Conferencia de la *European Foundation for Management Development* (EFMD) impartida por José L. López Aranguren sobre “El desarrollo del management en conflicto entre innovación tecnológica y avance social” (*La Vanguardia*, 6/VI/72). Admitió que no le gustaba la “solución tecnocrática”, porque la misma tecnocracia “es una acción moral; es una moral utilitaria y tecnológica”.

Desde sectores falangistas y democristianos se ejercía cada vez más presión sobre un gobierno de mayoría tecnocrática, que se sentía acosado. Un manifiesto en abril de 1972 firmado conjuntamente por Silva Muñoz y Girón no haría sino reforzar esa sospecha. López Rodó apareció en TVE en un esfuerzo por comparecer ante la opinión pública dotado del aura de los políticos. Aunque parecía empresa difícil deshacer su imagen tecnocrática. Opinión que matizaba el disidente falangista, fundador del partido Reforma Social Española, para quien “los tecnócratas son necesarios, si bien subordinados a los políticos” (*Diario de Navarra*, 27/V/72). Pero los tecnócratas, funcionando al margen de los políticos, han sido beneficiosos en su conjunto. Si bien al servicio de una política trazada por los políticos, conectados con las bases populares, esos tecnócratas habrían sido, sin duda, mucho más útiles.

Estaba claro que aunque el gobierno pudo ser calificado de “tecnócrata” en 1969, era dudoso que el calificativo tuviera ya vigencia a mediados de 1972. Las situaciones políticas no eran idénticas siempre aun con las mismas personas. El paso del tiempo, la crítica pública de los comportamientos y la propia dinámica de la cosa pública son hechos que hicieron reflexionar a las personas en el gobierno. Nada más lejos de mi pensamiento que creer que el gobierno de octubre de 1969 estaba radicalmente transformado; pero muchos ministros habían experimentado un interesante proceso de “politización” o de “ideologización”, claro que en unos casos en sentido progresivo y en otros, en marcha atrás. Lo que

motivaba precisamente la problematización de poder seguir hablando de un “gobierno homogéneo”.

El llamado “problema regional” era objeto cada vez de mayor atención, y de él había hecho bandera los tecnócratas españoles desde las propuestas de la Tercera Vía de Calvo Serer en los años cincuenta. Contra ellos se presentó un viejo conocido, catedrático de Derecho Administrativo, Cirilo Martín Retortillo, para quien la tecnocracia habría pretendido suprimir las ideologías, pero sólo logró sustituirlas por mitos. “Estos mitos, en España, han sido, la reforma administrativa, después el Plan de Desarrollo; ahora el mito de los tecnócratas se llama región” (*El Correo Catalán*, 19/VI/72). La regionalización propuesta al socaire de la planificación económica no conducía a soluciones “regionalistas” de carácter descentralizador. La tan cacareada regionalización no sería en el fondo, sino una manifestación más de centralismo.

Pocos meses antes de que López Rodó dejara de ser ministro comisario de los Planes de Desarrollo, recibía una nueva crítica a sus publicitados “indicadores económicos”, en favor de los “indicadores sociales”. El editorial del periódico catalán pedía que se estableciera un “Informe social” periódico, que proporcionase una imagen más completa de la interrelación de los elementos de la vida social, económica y política e identifique aquellos cambios económicos que producen cambios sociales. El problema era que “los planificadores tecnocráticos y los economistas ven en la idea de los indicadores sociales una amenaza a su posición atrincherada al oído de los políticos” (*La Vanguardia*, 21/IX/72). Estudios de Salustiano del Campo en 1969, bajo el patrocinio de la Fundación FOESSA, indicaban que “que no seremos capaces de sobrevivir sin un sistema de información social post-tecnocrático”. Era una interesante aportación española a la discusión sobre la conveniencia de disponer de informes sociales que completaran y situaran en su justo lugar los habituales “Informes económicos”. En la inauguración del INE Franco y Carrero, este se lanzó a un discurso pleno de cifras y estadísticas. La prensa tituló “La polémica de la tecnocracia”, por el fondo que tenían las palabras de Carrero.

El nuevo gobierno en julio de 1973, el primer gabinete del almirante Carrero Blanco, incluyó su cuota de ministros tecnocráticos¹⁸. Un tecnócrata, Fernando de Liñán, ex colaborador de la Comisaría del Plan de Desarrollo y

¹⁸ “De la lista de los diecinueve hombres que preside el almirante Carrero brillan por su ausencia representantes de los sectores católicos que cristalizan de alguna forma en torno a una democracia cristiana. También están ausentes los hombres del tradicionalismo integrado. No hay tampoco falangistas, históricos, o sin historia, pero que representen activamente a alguno de los sectores en que se halla fraccionada esa familia. La tecnocracia de alguna forma se ha asentado en Hacienda, en Educación y Ciencia, Comercio e Información y Turismo, además de sobrevivir en Exteriores e Industria, pero no se trata ya ni mucho menos de un equipo conjuntado. Una parte de la tecnocracia del Gobierno anterior ha quedado ahora marginada” (*Diario de Barcelona*, 27/VI/73).

director de Política Interior en Gobernación, pasa a Información y Turismo; y otro tecnócrata con amistades dentro de los grupos católicos de los propagandistas, Antonio Barrera de Irimo, estudiante de Deusto, accedió a la cartera de Hacienda desde la presidencia de la Telefónica. Un tercer tecnócrata, Agustín Cotorruelo, ex alumno también en Deusto con los jesuitas, antiguo decano de la Facultad de Ciencias Económicas de Madrid, sustituyó a Fontana Codina, en Comercio. Cruz Martínez Esteruelas, el más joven de los ministros ligado también con los propagandistas católicos y uno de los oradores más brillantes de las Cortes, fue nombrado para sustituir a Laureano López Rodó en la Planificación Económica, puesto en el que se encontraba el nuevo ministro de Asuntos Exteriores desde hace diez años y desde el que había elaborado tres planes de desarrollo. Continuaban en sus puestos López de Letona (Industria), Allende y García Baxter (Agricultura), García Ramal (Sindicatos) y Gonzalo Fernández de la Mora (Obras Públicas). Como curiosidad hay que destacar que la oficina de información del Opus Dei hizo público un comunicado afirmando que en el nuevo Gobierno español sólo un ministro, López Rodó, era miembro de la asociación espiritual. Los miembros del Opus Dei que dejaban su puesto eran Gregorio López Bravo y Vicente Mortes. Era evidente la intencionalidad de refuerzo político –frente a tentaciones tecnocráticas– que suponía la vicepresidencia del Gobierno en manos del titular del Ministerio político por excelencia.

Ese año se publicó el libro *Carta abierta a los tecnócratas* de Josep Meliá donde éste se preguntaba: ¿Qué se puede esperar de un país donde mandan los tecnócratas y en el que la palabra “tecnocracia”, ni siquiera es recogida en el diccionario oficial? Frente a los que proponían llevar a los tecnócratas al paredón, el libro les invitaba a cumplir su obligación de preparar unas condiciones de libertad en las que los tecnócratas pudieran ser adecuadamente puestos a caldo. Entre las medidas que sugiere figuran “la repoblación intelectual de la España oficial, el matrimonio de la España que piensa y la que ve la televisión, la defensa del ambiente político y la lucha contra la contaminación ante-histórica y la limpieza de los odres del triunfalismo” (*La Vanguardia*, 9/VIII/73). Para Meliá, la tecnocracia es un lujo que él se atreve a calificar de ideológico. “Las barreras ideológicas son ahora tecnocráticas y cualquier país que sobrepasa los mil dólares de renta “per cápita” se cree obligado a estrechar lazos de amistad con los países que anteriormente habían sobrepasado la curiosa barrera”. En referencia al conocido slogan que puso en circulación López Rodó. Según Meliá “nadie se reconoce tecnócrata, todos evitan el calificativo. Es útil, lo discutible está en la asepsia ideológica que ella quiere llevar al llamado Estado de Obras” (*Blanco y Negro*, 7/VII/73).

En la misma línea se manifestó el profesor Harry W. Richardson, dirigiéndose a los economistas españoles, acerca de la imposibilidad de separar lo político de lo económico. Invitado por el Servicio de Estudios del Banco

Urquijo a las Reuniones Internacionales de Economía Regional, organizadas en Barcelona, a finales de 1973, advirtió que los intentos por lograr esa separación no habían conducido a resultados demasiado brillantes. “Los objetivos que orientan el sistema económico de un país hacia metas como la redistribución de la renta, la integración socioeconómica y el Desarrollo, contienen de por sí la suficiente carga política como para encender los entusiasmos y desencadenar los programas gubernamentales más ambiciosamente “revolucionarios”. Tratar de confundir los reinos contiguos de la Economía y de la Política suele ser el subterfugio de tecnócratas y pragmáticos. Tratar de aislarlos entre sí es la coartada de los extremismos filosóficos e idealistas. “Ambos deben equilibrarse y confluir, en algún momento de su circuito, en un regulador común que los contenga y los impulse”.

La cercanía del “hecho biológico”, la muerte de Franco, estaría provocando en palabras de Luis M. Ansón, la “ceremonia de la confusión” entre los elementos tecnocráticos ante lo que se avecinaba. “La tecnocracia desideologizadora tardíamente arrepentida hoy, generó en la década de los sesenta un oportunismo a ultranza. La vieja fórmula de trepar al carro del vencedor, aun a costa de negar con vehemencia lo que se afirmaba la víspera, alcanza ahora niveles casi generales”. Los oportunistas girarían en sus veletas frenéticamente en busca del viento dominante, nerviosos al no saber bien en qué lugar colocarse (*ABC*, 16/IV/75).

La revista *Blanco y Negro* en su editorial “Vuelve la Falange” (26/VI/75) aprovechaba para resumir el conflicto que desde 1957 se había producido entre los tecnócratas (en torno a López Rodó) y la Falange de José Solís. El primero fue ganando batalla tras batalla: Ley de Principios del Movimiento de 1958 (punto VII: la monarquía es la forma de gobierno), en las crisis de 62 y 65 aumentan sus peones en el gobierno, la Ley orgánica de 1966 sale de telares tecnocráticos, el nombramiento en 1969 del Príncipe. El affaire MATESA en 1969 es un intento desesperado de revertir la tendencia pero tiene un efecto boomerang: Fraga y Solís se van a la calle. Pero López Rodó, una vez hecho amo y señor, comienza a cometer errores, no es capaz de aglutinar a otros grupos, la muerte de Carrero es la suya, acaba de embajador, una sombra de lo que fue. Con Arias Navarro parecía volver la Falange.

Con el gobierno de Arias Navarro en enero de 1974 se puede certificar la muerte de la tecnocracia en su versión hispana, vinculada a los hombres de la institución religiosa del Opus Dei. Los miembros de su gobierno serán técnicos, pero no tecnócratas, rigurosos, pero no asépticos. José Oneto daba por acabada una etapa que se habría iniciado con la llegada de A. Ullastres en 1957, y con la sucesiva promoción del ministro del Plan de Desarrollo L. López Rodó. Este había estado presente en la vida política desde 1958 en que fue nombrado secretario general técnico de la Presidencia del Gobierno. “En los últimos diez

años ha sido uno de los ministros más influyentes en la política del país” (*Diario de Navarra*, 4-6/I/74). *Informaciones* (8/I/74) afirmaba que se había retirado a descansar a la casa de sus padres en Barcelona. Se destacaba la entrada de un nuevo tipo de tecnócratas (Barrera de Irimo, Santos Blanco, Martínez Esteruelas), que no habían intervenido en la vida política española.

El gabinete Arias era totalmente distinto a los anteriores, “un gobierno sin anclajes en grupos ajenos ni influencias de presiones sectarias, que hablaba sin metáforas ininteligibles ni promesas indiscriminadas y decidido a abandonar los viejos mitos del desarrollismo y los viejos hábitos tecnocráticos para abordar seriamente y sin demagogias un proceso de apertura” (*Informaciones*, 9/I/74). Ante estas insinuaciones dirigidas claramente contra los tecnócratas presididos por Carrero, *Nuevo Diario* (8/I/74) afirmaba que el gobierno Carrero y su programa político eran merecedores de los mismos elogios que el nuevo gabinete. Tras afirmar que la declaración programática hecha por el almirante Carrero ante la TVE el 14/VI/73 sintonizaba con el programa de Arias Navarro, el periódico se dedicaba a comparar punto por punto ambas declaraciones programáticas en un afán de demostrar que no había marcadas características que diferencien este gobierno del anterior. Igualmente *Nuevo Diario* reproducía parte del discurso del fallecido presidente del Gobierno en el pleno de las Cortes del 20/VII para concluir que “la lectura de estos documentos nos lleva a la conclusión de que para un merecido elogio al actual gobierno no era necesario arremeter contra los gobiernos anteriores”. La comparación por vía de contraste con el anterior gobierno carecería de fundamento. *Nuevo Diario* incluía reseñas de prensa nacional y extranjera sobre la personalidad de L. López Rodó, el ministro que más atención había despertado en el extranjero por su súbita desaparición de la escena política española.

Camilo J. Cela se sumaba a las críticas de la tecnocracia en sus declaraciones a la revista universitaria ANUE (22/I/74). “Veo un porvenir de tecnócratas, que es lo más triste que le puede pasar a un país”. Para Cela el peor gobierno que tuvo el Régimen había sido el de los tecnócratas. “Decían: “Ejercen su técnica, etc.”, pero es que demostraron que no la sabían, lo cual es muy grave; aquello fue un fracaso estrepitoso, que no se llevó al país detrás porque España no hay quien la mate. España es un país que aguanta lo que le echen”.

Quizá el artículo más exhaustivo sobre “El ocaso de los tecnócratas” fue el de Josep Meliá. Constataba que por primera vez en muchos años, no había en España ningún ministro que pertenezca al Opus Dei. “Hasta ahora, además, siempre existían ciudadanos que sin pertenecer a dicha Asociación eran cercanos a ella ¿Es una casualidad? No lo creo” (*El Correo Catalán*, 25/I/74). Los portavoces del Opus Dei reiteraron que la institución no tenía objetivos políticos,

y que quienes participaban en política lo hacían a título particular¹⁹. Pero, como dijo Calvo Serer, había un Opus Dei jurídico y otro sociológico, y fue este último el que aparecía. “Lo cierto es que los miembros del Opus sociológico, como las cerezas, casi nunca andaban solos, que se apoyaban y promocionaban, que imponían una mentalidad que resulta inseparable de la España de los años sesenta”. Se les llamó tecnócratas, pero lo que de verdad les unía era su cercanía a la institución religiosa: “es a estos hombres a quienes se ha desplazado bruscamente”. Lo que no significaba que la Administración perdiera con ello solera y rigor técnico. Todo esto era difícil de entender, sobre todo para los observadores extranjeros. Aunque “la agonía tecnocrática no tiene por qué suponer una menor *chance* europeísta. Ni tampoco impide que un día algunos tecnócratas retornen con nuevos padrinos”. Que el artículo de Meliá había dado en la diana se mostró en las cartas de protesta que se escribieron contra él. Entre otras, el doctor Juan Moya negaba la mayor: que la actuación pública de una persona no debe relacionarse con su pertenencia o no al Opus Dei, porque “pertenecer a esa Asociación para nada condiciona las actuaciones particulares en cuestiones temporales, de suyo opinables, que esas personas puedan tener. No resulta difícil ver, a quien quiera comprobarlo, que la finalidad del Opus Dei es exclusivamente espiritual” (*Diario de Navarra*, 21/I/74). La dirección del periódico añadía una coda a su carta pidiendo que “indicase cuáles son los errores que se difunden”, ya que se limitaba Moya a cuestión de opiniones en las que “lo que para unos es dogma, otros lo ven como error”.

A la vuelta del verano, la revista *Actualidad Económica* publicó una lista de los “cien españoles del futuro [político]”. Amando de Miguel se quejaba de que “hay demasiados nombres ligados a instituciones o empresas donde han sobresalido los dirigentes relacionados con el Opus Dei. Es la técnica de la “profecía que se cumple a sí misma” (*Informaciones*, 21/X/74). Pero lo más sorprendente era la distribución ocupacional de esas personas, con un perfil que recuerda a los altos cargos del periodo de la tecnocracia. “Al igual que en el caso de los ministros actuales, estos futuros funcionarios políticos no pertenecen a cualquier nivel y Cuerpo, sino precisamente a los Cuerpos superiores, y dentro de ellos a los de élite. De formar un Gabinete a partir de esta desdichada lista, saldrían más ministros tecnócratas que en los Gobiernos más monocolors que hemos tenido”. Ya iba siendo la hora de incluir savia nueva. “No está bien que los que tienen todo, encima tengan también la sartén por el mango. Y sobre todo, un ruego: dejen de hacer ministros con tanto catedrático de Universidad, que bien pocos son para tanto trabajo intelectual como hay por delante”.

¹⁹ Comunicado de la Secretaría General del Opus Dei, Roma, 17 de febrero de 1975, cit. En Vázquez de Prada, *El Fundador*, vol. III, p. 547.

Como afirmaba cáusticamente Francisco Umbral, en la España de entonces se hablaba mucho de rearme ideológico “tras el ejemplo de los tecnócratas, dolorosamente cercano”. Los tecnócratas con sus planes de desarrollo habrían sido los causantes de la desideologización. “El crepúsculo de las ideologías” de Fernández de la Mora, fue algo así como la Biblia de los nuevos mormones tecnocráticos. Pero pasa el tiempo, los planes de desarrollo no se han desarrollado lo suficiente, los crepúsculos de cada tarde quedan muy sosos sin ideologías, y se ha decidido volver al rearme ideológico” (*Diario de Navarra*, 28/XI/74). “Los tecnócratas, con gesto arrogante, nos aseguraron que había llegado el fin de las ideologías. Nos encontrábamos en la era de los expertos. El político ya no tenía nada interesante que decir. El político tenía que hacer mutis por el foro. El protagonista de la escena pública era el técnico” (*Diario de Barcelona*, 2/XII/74), pero se equivocaron, según M. Jiménez de Parga. “¿Dónde están las pruebas de la previsión de los tecnócratas? ¿Y el porvenir paradisíaco, que nos prometían? Fue corto su reinado pero pretendían apabullarnos. Con sus frías estadísticas y sus planes de desarrollo todo parecía resuelto. Intentaron construir dando las espaldas a la política y a los políticos. Ahora, en la grave crisis que atraviesa el sistema, no saben cómo reaccionar. Van dando por ahí palos de ciego”.

Amando de Miguel insistirá en el carácter de grupo de presión que tenían los tecnócratas, porque “son los únicos políticos franquistas que no reconocen que forman entre sí un grupo, que consideran como ocasionales o azarosos algunos caracteres que los distinguen. Pero como no es por azar que piensan, hablan y actúan de una determinada manera muy característica y, dado además que aparecen estrechamente vinculados al mundo de los negocios y al Opus Dei, la impresión general es que constituyen un grupo de presión, con bastante éxito, por cierto” (*Diario de Navarra*, 25/III/75). Se les distingue, además, por “una cerrada animadversión a sus primos hermanas: católicos y falangistas. No es casualidad que los sustituyan en la cuota de poder (crisis de 1956-57) y que con ellos mantengan fuertes polémicas”²⁰ (Esteban de Vega, 2008: 1130-1136). Falangistas y tecnócratas compartían aspectos de una mentalidad común; autoritaria, elitista, mística incluso. Pero eran dos familias que conducían a soluciones y estilos políticos diferentes. “Un falangista suele ser estatista, partidario del intervencionismo estatal y prefiere anteponer el ideal populista de la Igualdad (ambas en los términos menos radicales)”. En materia fiscal un falangista propondría un sistema de imposición progresiva y directa (por eso nunca estuvieron al frente del Ministerio de Hacienda), mientras que un tecnócrata acentuaría el escaso control fiscal del Estado.

²⁰ Para las polémicas más recientes en torno a la cuestión, una guía preliminar puede ser el artículo de Mariano Esteban de Vega, “Tecnocracia” (2008).

13. Coda: la tecnocracia en la España posfranquista

La desaparición de Franco coincidió con la de esta cohorte de técnicos que hacían gala de su apoliticismo. Los años posteriores fueron de reinención política de un país que había perdido el paso de sus vecinos europeos cuatro décadas atrás. Pareciera darse una alternancia de etapas más técnicas (la dictadura de Primo de Rivera, el desarrollismo franquista), con otras dotadas de mayor carga política (la II República y la Guerra Civil, los años de la Transición y los gobiernos socialistas). Esta “ley” que pudiera postularse en la historia de nuestro país, habría sufrido el “fin de la historia”, decretado por F. Fukuyama tras la caída del Muro de Berlín, con la victoria del paradigma de la democracia liberal y bipartidista, a partir del cual se conformó en Europa el sistema de alternancia electoral entre la opción socialdemócrata (liberal progresista) y democristiana (liberal conservadora), al menos en los que se refiere al parlamento europeo. Tras años de *pax*, la crisis económica de 2008-2013 no solo amplió las opciones de elección partidista en Occidente ante la supuesta crisis del modelo bipartidista dominante (pese a la inmortalidad de la gran coalición alemana) o supuso la aparición de las llamadas fuerzas populistas (de la izquierda alternativa al nacionalismo identitario); también conllevó el aumento de la selección de “técnicos” para carteras ministeriales ante exigencias neoliberales, la aparición de soluciones tecnocráticas provisionales ante la crisis de gobernabilidad de esos años (el gobierno de Papademos en Grecia, de Bajnai en Hungría, de Fischer en la República Checa, de Monti en Italia), o el poder casi omnímodo de la burocracia de Bruselas (elegida por pocos o por nadie) que dictaba su voluntad en el Viejo continente. ¿Asistimos a un renacimiento de la tecnocracia en Occidente? El debate actual sobre la crisis de la democracia liberal, que nada tiene que ver con la tecnocracia, sí ha arrastrado otro debate (el de la crisis de las instituciones europeas) que según los nacionalismos populistas sí depende de la burocracia.

En una democracia representativa, como la nuestra, la sustitución del discurso ideológico (que no tiene por qué ser irresponsable) por el de la eficacia, convierte a la política en una *management science*. Éste, a fin de cuentas, es el discurso del liberalismo, que emplea la economía y la técnica de gobierno para asegurar el triunfo (De Lucas, 2003: 48). Así se difuminan tanto el liderazgo político, la política y la Democracia. El “fin de la historia” es una empresa, pero recordemos, una empresa con ideología, aunque esta se halle enmascarada. Bajo los supuestos de tecnocracia, burocracia, etc., late un pensamiento pretendidamente “a-ideológico” pero que, realmente, es conservador.

El neoconservadurismo no es un fenómeno que se circunscriba a los Estados Unidos, como repuesta o reacción que fue al emerger del post-materialismo y de la nueva agenda de la izquierda. Son los que desean el regreso de las *reaganomics* y el progreso tecnológico. Se puede advertir de forma clara en la aparición del thatcherismo: la división tradicional entre política conservadora, liberal o socialista, fue desplazada por la aparición de este tipo de neo-conservadurismo encarnado en la figura de la “Dama de Hierro”.

Una de las características de la tecnocracia a finales del siglo XX y comienzos del XXI, es que fue adquiriendo un peligroso sesgo anti-humanista. Esto era nuevo ya que desde los fisiócratas y los enciclopedistas se había encontrado en la técnica y en el empleo racional de las ciencias las herramientas para arribar a una sociedad futura feliz. En el socialismo utópico de Saint-Simon la técnica apuntalaba al humanismo gracias a la intervención de un cuerpo de sabios que coadyuvarían al advenimiento de una civilización del trabajo sin clases. El marxismo, como se sabe, se calificó por Marx y Engels, como científico. En este neoliberalismo (camuflado o abierto) es penosa la complacencia de los políticos con respecto a los desheredados del progreso económico, y así es posible justificar todos los “males necesarios” que excusan cualquier coste social por una acción de gobierno liberada a la técnica y a la búsqueda de soluciones por un solo camino.

En la persecución de resultados esta nueva tecnocracia no duda en pedir sacrificios a los ciudadanos o se intenta convencer a los mismos, a través de los media, del buen rumbo de la economía y del empleo en el país (De Lucas, 2003: 53). De este modo cabe recortar las prestaciones sociales, “flexibilizar” el empleo, descargar a las empresas de parte del lastre de la Seguridad Social y someter, aún más, la política social a la económica, pues la razón técnica nos dice que, creando riqueza, alcanzando ciertos niveles en el PIB, todo lo demás vendrá dado después.

En el trasfondo de la tecnocracia late el pensamiento neoliberal, conservador, que socava los mismos valores que sustentaban al liberalismo y a la burguesía: cuando el burgués presenciaba la inauguración de un pantano, contemplaba un hito más en el avance del progreso, pero el tecnócrata no ve en

ello más que la conclusión de parte de un plan de obras preestablecido o una modernización de estructuras obsoletas. La tecnocracia pierde el horizonte. Y fue el caldo de cultivo de la “cultura del pelotazo” que arraigó como hidra maligna en la España del cambio de siglo.

Al tiempo que ha disminuido el poder del Parlamento, crece el del Ejecutivo. La tradicional separación de poderes se debilita al conectar los expertos del Estado y del Ejecutivo entre ellos y las empresas (incluidas la Banca y los medios de comunicación). Así, la política muestra una doble faz: la abierta, publicitada, y la cerrada en comités y agencias. La perniciosa costumbre de las “puertas giratorias” no es sino el corolario de tal confusión de poderes y funciones.

Más aún, la concentración del poder económico, sumado al político y a la tecnología como instrumento de dominación, bloquea todo tipo de disensión. De esta manera, ciencia, economía, tecnología y política quedan modificadas, siendo, en ocasiones la política el último motivo. Los problemas de dirección de democracias como la española parecen clamar por la aplicación de las técnicas de gobierno, organización y decisión. En los esfuerzos del gobierno español para obtener de las autoridades comunitarias una relajación de los objetivos de déficit fijados a nuestro país, asistimos a una lucha de intereses económicos más que ideológicos.

Este deslizamiento hacia planteamientos tecnocráticos en Europa se ha visto reforzada por la fuerte impronta tecnocrática que ha adquirido la UE y sus órganos políticos y económicos. Muchos expertos afirman que el auténtico soberano en la UE no son los gobiernos o los pueblos de Europa, sino el propio BCE, que, sin rendir cuentas ante nadie, tiene el poder de determinar la solvencia de los Estados. Si el BCE opta por no garantizar la solvencia de la deuda pública de un Estado, se puede producir un pánico de los inversores que, en un movimiento de profecía auto-cumplida, acabe arrastrando a ese Estado a la quiebra. Durante los dos primeros años de la crisis del euro, el BCE se mostró timorato con la deuda pública de España, con el propósito de forzar a nuestro país a poner en práctica las medidas de austeridad y las reformas estructurales que los economistas de la entidad consideraban indispensables para el crecimiento. Por qué una institución no elegida democráticamente como el BCE debería tener estas competencias es algo que escapa no solo a la teoría democrática, sino también a la propia teoría económica.

El problema, no obstante, va más allá del BCE. En general, la eurozona se ha dotado de un diseño institucional tecnocrático en el que no solo hay agencias independientes, como el BCE y la Comisión, sino también reglas de obligado cumplimiento que reduce enormemente la discrecionalidad de los gobiernos representativos (Sánchez-Cuenca, 2017: 68). Ya en el Tratado de Maastricht de 1992 se contemplaban criterios automáticos para la participación en la unión

monetaria en materia de déficit público, deuda pública, tipos de interés e inflación. Curiosamente, los desequilibrios previos a la crisis no se produjeron en estas magnitudes, sino en otras que no se habían tenido en cuenta, como los niveles de endeudamiento privado o las balanzas por cuenta corriente. Tanto la delegación a agencias independientes como la “constitucionalización” de las políticas económicas mediante reglas de obligado cumplimiento transforman a los gobiernos en meros gestores o ejecutores: la economía, de esta forma, queda casi por completo “despolitizada”. Dejando libre, así, el campo a la tecnocracia.

Los tecnócratas recaban cada vez mayor relevancia no por su asalto al poder político, ni por la necesidad de ellos en el entramado de organizaciones complejas, ni porque suplanten al líder político, sino porque los tecnócratas surgen tras la decadencia del líder y el liderazgo político. Son la consecuencia, no la causa. Este declive del líder político puede hallarse en su indecisión, su falta de compromisos claros. Basta ver la trayectoria de Mariano Rajoy, referente de la derecha española desde el declinar de su mentor, José María Aznar. Bien sabía Rajoy que las decisiones pueden ser erróneas, impopulares y esto se paga. Le ocurrió con su gestión del caso catalán o su dubitativa lucha contra la corrupción dentro de su partido. Si un líder político no puede garantizar línea programática alguna, delega en el técnico, que puede ser fácilmente removido (como si fuese una parte de la maquinaria política) y acusado de torpeza.

Una política tecnocrática, constreñida por la razón económica, genera exclusión y acaba por considerar la desigualdad como un hecho o, peor, como un mal necesario que se soluciona mirando hacia otra parte, olvidando o aplacando la conciencia con prácticas benéfico-asistenciales. Los derechos sociales, sobre los que se construye la ciudadanía, están amenazados porque se ha desregulado la esfera política.

La suave sumisión de hierro que ejerce el liberalismo elimina la política y el pensamiento, sustituidos por la verdad de sus dogmas tecno-económicos, responsables. El peligro es que el país sea gobernado como una empresa (y no olvidemos que las grandes empresas se adaptan mal o en absoluto a la teoría y visión democrática), en la que los ciudadanos se convierten en consumidores, sin movilización posible. ¿Seguiremos entonces los españoles dando tan alto grado de legitimidad a la democracia como ahora? La ascensión de populismos de todo signo y de partidos de ultraderecha parece apunta en la dirección justamente opuesta.

La lección que ha dejado el gobierno del PP (2008-2018) es que no se puede cimentar un partido de gobierno solo en la gestión de la economía. La renovación del PP debería decidir si continuar con la tecnocracia o volver al liberalismo conservador. Es lógico pensar que sus militantes quieren un nuevo proyecto, con renovación táctica y retórica; un auténtico rearme que pase por presentar a la sociedad española una identidad ideológica, no de gestión de empresas. El perfil que se busca es el de un político, no un gestor; ya dijo Max Weber que la esencia de la política es aspirar al

poder para la consecución de ideas, por lo que un político debe representar principios políticos e intereses.

La derecha occidental ha optado en los últimos decenios por tres vías: la tecnócrata, la liberal conservadora, y la democristiana. Desacreditada esta última, la batalla ha quedado entre las dos primeras. Pero la defensa del orden institucional supone abordar con altura de miras el problema de la unidad de España. A esto no ha sabido enfrentarse la tecnocracia, que entendió que todo era negociable, que los deseos de independencia se calmaban con dinero, y que el terrorismo era una cuestión del pasado. Los tecnócratas, además, no han sabido entender los sentimientos que generaba sentirse víctima del desprecio de los independentistas en Cataluña; esto sí lo entendió Ciudadanos. El PP tecnócrata, en cambio, no respondió al patriotismo de balcón porque no lo ha comprendido: sigue pensando que el nacionalismo catalán es un ardid para conseguir más financiación, y que el españolismo les hace parecer anticuados. El segundo elemento del debate actual gira en torno al principio de que más individuo es más libertad. Mientras la tecnocracia forma parte de la ingeniería social, de un sentimiento de superioridad intelectual sobre el pueblo, el liberalismo conservador pretende que la persona recupere su libertad de elección y responsabilidad. Esto hace madurar a una sociedad, deja atrás el infantilismo del Estado paternal, y genera una cultura política auténticamente democrática capaz de resistir propuestas autoritarias.

Pero la atracción por la tecnocracia sigue presente. En la actualidad, responde al descontento general con la democracia que producen las eternas negociaciones para formar un gobierno: hay quienes valoran por encima de todo la estabilidad y piden un líder de consenso que solucione el *impasse* institucional. Es una tentación que nunca ha desaparecido. Muchos empresarios suelen aconsejar a gobernantes cómo deben hacer su trabajo, y ven obvio que la solución es gobernar el país como se gobierna una empresa. Como dice Daniel Innerarity (2018: 11), la política busca solución a los problemas que no tienen una solución evidente o experta. Al ámbito de lo público es adonde se han relegado precisamente los conflictos de carácter irresoluble, justamente porque eran irresolubles desde la ciencia o desde la economía. La solución no es la tecnocracia, aunque a veces da la sensación de que, si el tecnócrata es de su cuerda, a algunos la democracia les importa un poco menos.

Prensa y revistas consultadas:

ABC, Arriba, Blanco y Negro, Diario de Barcelona, Diario de Navarra, Documentación administrativa, El Correo Catalán, El Sol, Informaciones, La Actualidad Económica, La Libertad, La Mañana, La Vanguardia, Le Monde, Madrid, Newsweek, Nuevo Diario, Pueblo, Razón Española, Revista de Estudios de la Vida Local, Revista de Estudios Políticos, Tele-Express, Triunfo, Ya.

Bibliografía

- Akin, W.E. (1977), *Technocracy and American dream. The technocratic movement, 1900-1941*, Cal.: Berkeley.
- Andrés-Gallego, J. A.; A. Pazos; L. Llera (1994), *Los españoles, entre la religión y la política: el franquismo y la democracia*, Madrid: Unión Editorial.
- Aron, R. (1954), “Sobre la estratificación del poder”, *Revue Française de Science politique*, vol. IV (3), julio-septiembre 1954, pp. 469-483.
- Bell, D. (1964) [1960], *El fin de las ideologías*, Madrid: Tecnos.
- Berger, G. (1966), *Universidad, tecnocracia y política*, Madrid: Rialp.
- Billy, J. (1963), *Les Techniciens et le Pouvoir*, Paris: PUF.
- Bogdanov, A. (1984), *Red star: the first Bolshevik utopia*, Boston: Brill.
- Boisdé, R. (1964), *Tecnocracia y democracia*, París: Plon.
- Botti, A. (1992), *Cielo y dinero: el nacionalcatolicismo en España: 1881-1975*, Madrid: Alianza.
- Bourdieu, P. (1989), *La noblesse d'État. Grandes écoles et esprit de corps*, Paris: Minuit.
- Burnham, J. (1943) [1941], *La revolución de los directores*, Buenos Aires: Caridad.
- Cambó, F. (1930), *Las Dictaduras*, Madrid: Espasa.
- Cañellas, A. (2011), *Laureano López Rodó: biografía política de un Ministro de Franco (1920-2000)*, Madrid: Biblioteca Nueva.
- Cañellas, A. (coord.) (2016), *La tecnocracia hispánica*, Gijón: TREA.
- Caspistegui, F. J. (2012), *VIII Conversaciones internacionales de historia*, Pamplona: EUNSA.
- Comte, A. (1967) [1851], *Système de politique positive, ou Traité de sociologie, instituant la religion de l'humanité*, Osnabrück: Zeller.
- Conde, F. J. (1950), “Misión política de la inteligencia”, *Revista de Estudios Políticos*, n. 51, p. 11-30.
- Cordero, J. M. (1967), “La administración consultiva del Estado en la Ley Orgánica del Estado”, *Revista de Estudios Políticos*, n. 152, pp. 21-31.

- Cotta, S. (1966), *El jurista frente al poder*, Milán: Giuffrè.
- De Lucas, F. (2003), “Ideología, tecnocracia y liberalismo”, *Barataria*, n. 6, pp. 47-72.
- De Miguel, A. (1975), *Sociología del franquismo*, Madrid: Euro.
- Djordjevic, J. (1960), “Progreso técnico y sistemas políticos”, *Revue Internationale des Sciences Sociales*, París, n. XII (2), pp. 202-214.
- Dossier “La administración pública a través de la prensa” (1964), *Documentación administrativa*, n. 73, pp. 172-187.
- Duverger, M. (1961), *La VIe République et le régime présidentiel*, Paris: Fayard.
- Duverger, M. (1970), *Introducción a la política*, Barcelona: Ariel.
- Echeverría, J. (1964), “Anotaciones al Plan de Desarrollo”, *Revista de Estudios Políticos*, n. 135-6, pp. 321-2.
- Ellul, J. (1960) [1954], *El siglo XX y la técnica: análisis de las conquistas y peligros de la técnica en nuestro tiempo*, Barcelona: Labor.
- Ellul, J. (1964), *The technological society*, New York: Vintage Books.
- Esteban, J. (1968), “La situación del Parlamento en las sociedades industriales”, *Revista de Estudios Políticos*, n. 159-160, pp. 75-102.
- Esteban de Vega, M., “Tecnocracia”, en Javier Fernández Sebastián y Juan Francisco Fuentes (Dir.), *Diccionario político y social del siglo XX español*, Madrid, Alianza, 2008, pp. 1130-1136.
- Fernández de la Mora, G. (1965), *El crepúsculo de las ideologías*, Madrid: Rialp.
- Fernández, G. (1963), “La reforma administrativa en el Ministerio de la Gobernación”, *Documentación Administrativa*, n. 64, pp. 40-48.
- Ferrary, A.; A. Cañellas (eds.) (2012), *El régimen de Franco. Unas perspectivas de análisis*, Pamplona: EUNSA.
- Fischer, F. (1990), *Technocracy and the Politics of Expertise*, London: Sage.
- Fraga, M. (1955), “Planificación y orden jurídico-político”, *Revista de Estudios Políticos*, n. 80, pp. 3-60.
- Frisch, A. (1954), *Une réponse au défi de l'histoire*, Paris: Gallimard.
- Galbraith, J. K. (1967), *El nuevo estado industrial*, Barcelona: Ariel.
- García-Pelayo, Manuel (1974), *Burocracia y tecnocracia*, Madrid: Alianza.
- Gaucher, François (1959), “La crisis de la democracia en un mundo en mutación”, *Revista de Estudios Políticos*, n. 106, pp. 167-185.
- Gómez de Aranda, L. (1966), *El tema de las ideologías*, Madrid: Europa.
- Gómez de Aranda, L. (1967), “La filosofía política de la LOE y las ideologías contemporáneas”, *Revista de Estudios Políticos*, n. 152, 1967, pp. 157-173.
- González Cuevas, P. C. (2000), *Historia de las derechas españolas. De la Ilustración a nuestros días*, Madrid: Biblioteca Nueva.
- González Cuevas, P. C. (2003), *Maeztu. Biografía de un nacionalista español*, Madrid: Marcial Pons.

- González Cuevas, P. C. (2007), “La derecha tecnocrática”, *Historia y Política*, n. 18 (2), pp. 23-48.
- González Seara, L. (ed.) (1964), *Las ideologías y sus aplicaciones en el siglo XX*, Madrid: IEP.
- Granick, D. (1962), *The European Executive*, Londres: Weidenfeld.
- Grégoire, P. M. (1954), *Le langage de l'administration et les affaires*, París: PUF.
- Grégoire, R. (1963), “Los problemas de la tecnocracia y el papel de los expertos” (Informe en V Congreso Mundial de Asociación Internacional de Ciencias Políticas), *Revista de Estudios Políticos*, n. 131, pp. 139-172.
- Guerrero, O. (2006), *Tecnocracia o el fin de la política*, México D. F.: UNAM.
- Gurvitch, G. (1959), “Los marcos sociales del conocimiento sociológico”, *Cahiers Internationaux de Sociologie*, París, Vol. XXVI (6), pp. 165-72.
- Herf, J. (1984), *Reactionary Modernism. Technology, Culture, and politics in Weimar and the Third Reich*, London: Cambridge UP.
- Innerarity, D. (2018), *Política para perplejos*, Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- Judt, T. (2005), *Postguerra. Una historia de Europa desde 1945*, Madrid: Taurus.
- Juliá, S. (2009), *La constitución de 1931*, Madrid: IUSTEL Publicaciones.
- Konrad, G.; I. Szeleny (1981), *Los intelectuales y el poder: “intelligentsia y poder de clase en los países socialistas europeos*, Cambridge: CUP.
- Latouche, S. (1995), *La Megamachine. Raison techno-scientifique, raison économique et le mythe du progrès. Essais à la memoire de Jacques Ellul*, París: La Découverte.
- López Rodó, L. (1971), *Política y desarrollo*, Barcelona: Plaza y Janés.
- López Rodó, L. (1990), *Memorias*, Barcelona: Plaza y Janés.
- Maeztu, R. (1945), *La crisis del humanismo*, Madrid: Alhambra.
- Maeztu, R. (1899), *Hacia otra España*, Bilbao: Cardenal.
- Martín Retortillo, C. (1949), “Los organismos técnicos en la Administración pública”, *Revista de Estudios de la Vida Local*, n. 45, pp. 353-361.
- Martinet, G. (1964), “El porvenir del gaullismo”, *Revue Internationale du Socialisme*, Año I (3), junio 1964, pp. 275-282.
- Meliá, J. (1973), *Carta abierta a los tecnócratas*, Madrid: Ediciones 99.
- Meynaud, J. (1964), *Problemas ideológicos del siglo XX (El destino de las ideologías y Tecnocracia y política)*, Barcelona: Ariel.
- Meynaud, J. (1968), *La tecnocracia ¿Mito o realidad?*, Madrid: Tecnos.
- Morena, L. (1967), “Las funciones administrativas: su enumeración y análisis crítico”, *Documentación Administrativa*, n. 115-116, pp. 31-69.
- Moulin, L. (1962), “La tecnocracia, tentación y espantajo del mundo moderno”, *Revista de Estudios Políticos*, n. 123, pp. 91-131.
- Negro Pavón, D. (1966), “Cambio social y métodos de desarrollo económico”, *Revista de Estudios Políticos*, n. 147-8, pp. 185-202.

- Negro Pavón, D. (1968), "John Stuart Mill: el liberalismo como ideología", *Revista de Estudios Políticos*, n. 159-160, pp. 123-140.
- Olmo, E.; J. M. Roca; L. M. Sáenz; J. M. Vera (2005), *La derecha furiosa*, Madrid: SEPHA.
- Packard, V. (1966), *La sociedad desnuda*, Buenos Aires: Ediciones Sudamericanas.
- Paniagua, F. J. (1975), "Antecedentes históricos de la planificación en España", *Cuadernos de Economía*, VIII (8), septiembre-diciembre, pp. 426-447.
- Pániker, S. (1988), *Segunda Memoria*, Barcelona: Seix Barral.
- París Eguílaz, H. (1947), *España en la economía mundial*, Madrid: Diana Artes Gráficas.
- Pemán, J. M. (1937), *Cartas a un escéptico en materia de formas de gobierno*, Burgos: Cultura Española (2ª edición).
- Pemartín, J. (1929), *Los valores históricos en la dictadura española*, Madrid: Publicaciones de la Junta de Propaganda Patriótica y Ciudadana.
- Pérez-Embid, F. (1953), *Ambiciones españolas*, Madrid: Editora Nacional.
- Posada, A. (1935), *Tratado de Derecho Político*, Madrid: Ed. Victoriano Suárez.
- Ramos, J. L.; Pires, L. (2009), "Los economistas españoles ante la planificación indicativa del desarrollismo", en IX Congreso de la AEHE (Murcia).
- Raymond, A. (1933), *Qué es la tecnocracia*, Madrid: Revista de Occidente.
- Rincón, A., "Nacional-catolicismo, modernización económica y fascistización" (doctorado, 2005).
- Rivero, J. (1950), "Le plan Monnet et le droit", *Droit social*, n. 56, pp. 68-91.
- Saint-Simon, H. (2011), *De la reorganización de la sociedad europea*, Madrid: Bellas Artes.
- Sánchez, R. (2004), "El Ateneo de Madrid: plataforma ideológica del franquismo (1939-1963)", *Historia contemporánea*, n. 29, pp. 871-894.
- Sánchez-Cuenca, I. (2017), "La Unión Europea como dominio tecnocrático", *Nueva Sociedad*, n. 270, julio-agosto, pp. 60-71.
- Sánchez-Hidalgo, A. (2011), "El triángulo tecnocracia-masificación-totalitarismo en el pensamiento político de Vallet de Goytisolo", *Verbo*, n. 491-492, pp. 43-88.
- Santervás, Á. R. (1987), *La etapa inglesa de Ramiro de Maeztu* (3 vol.), Tesis doctoral, Madrid, Universidad Complutense
- Sauvy, A. (1956), "Lobbies y grupos de presión", *Revista de Estudios Políticos*, n. 89, pp. 19-40.
- Schmitt, C. (1991), *El concepto de lo político*, Madrid: Alianza.
- Souillac, R. (2007), *Le mouvement Poujade: De la défense professionnelle au populisme nationaliste (1953-1962)*, Paris: Presses de Sciences Po.
- Stiglitz, J. E. (2002), *El malestar en la globalización*, Madrid: Taurus.
- Tabbah, B. (1959), *De la personne humaine a la communauté humaine*, Paris: Pichón et R. Durand-Auzias.

- Trenas, J. (1971), *Fermín Arteta: Ministro de Isabel II. La anticipación de un tecnócrata*, Madrid: Guadarrama.
- Uscatescu, J. (1966), “Perfiles de un nuevo humanismo”, *Revista de Estudios Políticos*, n. 150, pp. 5-19.
- Uscatescu, J. (1967), “Filosofía de la libertad en la Ley Orgánica”, *Revista de Estudios Políticos*, n. 152, pp. 305-19.
- Uscatescu, J. (1972), “Trabajo, burocracia, organización social”, *Revista de Estudios Políticos*, n. 182, pp. 39-67.
- Uscatescu, J. (1975), “Paradigmas de la política”, *Revista de Estudios Políticos*, n. 204, pp. 15-31.
- Vallet de Goytisolo, J. (1969), *Sociedad de masas y Derecho*, Madrid: Taurus.
- Vallet de Goytisolo, J. (1972), *Algo sobre temas de hoy*, Madrid: Speiro.
- Vallet de Goytisolo, J. (1975), *Ideología, praxis y mito de la tecnocracia*, Madrid: Montecorvo.
- Vedel, G. (1963), “Los problemas de la tecnocracia y el papel de los expertos. Informe sobre Francia”, *Revista de Estudios Políticos*, n. 131, pp. 173-191.
- Verdú, L. (1965), “Ciencia política para neoconservadores”, *Revista de Estudios Políticos*, n. 141-2, pp. 207-214.
- Villacañas, J. L. (2000), *Ramiro de Maeztu y el ideal de la burguesía en España*, Madrid: Espasa-Calpe.
- Zaratiegui, J. (2006), “El periodismo económico de Ramiro de Maeztu”, pp. 433-490, en L. Perdices y M. Santos, *Economía y Literatura*, Madrid: Ecobook.
- Zuleta, E. (2000), “Maeztu, Estados Unidos y el dinero”, *Razón Española*, n. 99, pp. 7-17.

